



ALIDE2026
ASAMBLEA GENERAL

Documento Principal

INNOVAR, INVERTIR, INCLUIR

BANCA DE DESARROLLO EN
UN NUEVO ESCENARIO
ECONÓMICO GLOBAL

Secretaría General de ALIDE
Mayo, 2026

ASUNCIÓN
PARAGUAY

20 - 22 DE MAYO



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. PANORAMA DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE E IMPLICANCIAS DE LA GEOPOLÍTICA

- 1.1. Cambios en la economía internacional y la geopolítica mundial
- 1.2. Panorama, situación y perspectivas de la economía mundial

II. MOVILIZACIÓN DE INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

- 2.1. Panorama reciente y perspectivas de la inversión en ALC
- 2.2. Factores de riesgo y condiciones habilitantes para la inversión
- 2.3. Sectores con alto potencial de inversión para ALC

III. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

- 3.1. Innovación, adopción tecnológica y productividad: brechas estructurales
- 3.2. De la innovación al emprendimiento: cómo se generan y escalan empresas de alta productividad
- 3.3. Políticas públicas e instrumentos para promover innovación y emprendimiento en ALC

IV. INCLUIR: LLEGAR A MÁS PERSONAS Y MÁS TERRITORIOS

- 4.1. Inclusión social
- 4.2. Inclusión territorial
- 4.3. Inclusión financiera

V. ACCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO

- 5.1. Banca de desarrollo y movilización de inversión hacia sectores estratégicos
- 5.2. Articulación entre innovación y emprendimiento desde la banca de desarrollo
- 5.3. Inclusión social, financiera y territorial

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

ANEXOS

INTRODUCCIÓN

América Latina y el Caribe (ALC) enfrenta un escenario internacional más complejo, incierto y fragmentado, en el que la geopolítica, la transición energética, la digitalización, la reorganización de cadenas globales de valor y las nuevas políticas industriales vienen redefiniendo las condiciones del crecimiento y la inserción externa. La economía mundial ya no opera únicamente bajo criterios de eficiencia y apertura comercial, sino también bajo consideraciones de seguridad económica, resiliencia, autonomía estratégica y control de tecnologías críticas. Estos cambios generan riesgos significativos para la región, pero también abren oportunidades para atraer inversión, diversificar estructuras productivas, desarrollar nuevas capacidades tecnológicas y fortalecer la integración en cadenas de mayor valor agregado.

Sin embargo, la posibilidad de aprovechar estas oportunidades depende de la capacidad regional para superar restricciones estructurales que se han acumulado durante décadas. ALC mantiene bajos niveles de inversión, limitada productividad, alta heterogeneidad empresarial, persistente informalidad laboral, brechas tecnológicas significativas y una inserción internacional concentrada en actividades de bajo contenido tecnológico. A ello se suman restricciones fiscales, déficits de infraestructura, desigualdades sociales y territoriales, y una capacidad todavía insuficiente para transformar ventajas potenciales en proyectos financiables, escalables y sostenibles.

En este contexto, el presente documento, desarrollado en el marco de la **56° Reunión de la Asamblea General de ALIDE**, parte de una premisa central: la transformación productiva de ALC requiere articular tres agendas que con frecuencia han sido tratadas de manera separada. La primera es invertir, movilizandorecursos hacia sectores estratégicos capaces de elevar la productividad, diversificar la estructura productiva y generar encadenamientos. La segunda es innovar, fortaleciendo la adopción tecnológica, el emprendimiento dinámico, la digitalización y las capacidades empresariales. La tercera es incluir, asegurando que los beneficios del crecimiento, la inversión y la innovación lleguen efectivamente a más personas, empresas y territorios.

Desde esta perspectiva, la inversión constituye una condición necesaria, pero no suficiente. Para que la acumulación de capital se traduzca en desarrollo, debe orientarse hacia sectores con mayor capacidad de transformación productiva y estar acompañada de innovación, aprendizaje tecnológico, infraestructura adecuada, financiamiento de largo plazo y capacidades institucionales. De igual modo, la innovación no puede entenderse únicamente como investigación y desarrollo (I+D) o generación de patentes, sino como un proceso amplio que incluye adopción tecnológica, modernización de procesos, fortalecimiento empresarial, digitalización y escalamiento de nuevas soluciones productivas.

La inclusión, por su parte, constituye una dimensión indispensable de esta agenda. En una región caracterizada por altos niveles de desigualdad, informalidad, brechas educativas, rezagos rurales, déficit habitacional, déficits de infraestructura básica y exclusión financiera, no basta con aumentar la inversión o impulsar la innovación si sus beneficios se concentran en pocos sectores, empresas o territorios. La inclusión debe entenderse como acceso efectivo, uso pertinente y capacidad real de las personas, hogares y unidades productivas para beneficiarse de servicios, financiamiento, infraestructura, tecnología y oportunidades económicas.

En este marco, los bancos nacionales de desarrollo (BND) adquieren una relevancia estratégica. Su papel no se limita a proveer crédito en condiciones de largo plazo. También incluye preparar y estructurar proyectos, mitigar riesgos, movilizar capital privado, financiar innovación, apoyar la adopción tecnológica, articular ecosistemas empresariales, promover inclusión financiera y canalizar recursos hacia sectores y territorios donde el mercado tiende a subinvertir. Los BND

puede actuar como una plataforma institucional que conecta inversión, innovación e inclusión, contribuyendo a transformar oportunidades productivas y sociales en proyectos viables, financiados y con impacto.

Con lo cual, este documento sostiene que el aporte de la BND debe analizarse no solo por el volumen de recursos colocados, sino por su adicionalidad, su capacidad de movilización, su contribución a la creación de mercados, su efecto sobre la productividad y su impacto sobre brechas sociales y territoriales. Ello exige observar con mayor detalle los instrumentos utilizados, sus condiciones, sus modalidades de operación y su adecuación a distintos tipos de beneficiarios y sectores. Crédito de largo plazo, garantías, fondos de inversión, fondos de fondos, subvenciones, financiamiento combinado, asistencia técnica, plataformas digitales, bonos temáticos y servicios no financieros forman parte de una arquitectura cada vez más compleja, orientada a responder a desafíos que no pueden resolverse mediante instrumentos homogéneos.

Para ello, el análisis se organiza en cinco capítulos. El primero examina el nuevo panorama de la economía mundial y de ALC, destacando las implicancias de la geopolítica, la fragmentación comercial, la volatilidad energética, la reconfiguración de cadenas globales de valor y las perspectivas macroeconómicas regionales. El segundo aborda el desafío de la inversión, identificando brechas, sectores estratégicos y condiciones necesarias para convertir oportunidades en proyectos concretos. El tercero analiza la innovación y el emprendimiento, con énfasis en las brechas de adopción tecnológica, el escalamiento empresarial y la necesidad de fortalecer ecosistemas más densos. El cuarto estudia la inclusión social, territorial y financiera, destacando que el desarrollo exige llegar a más personas, hogares, empresas y territorios. Y, finalmente, el quinto sistematiza las acciones de la BND, mostrando cómo estas instituciones movilizan inversión, financian innovación, promueven adopción tecnológica, estructuran mercados y contribuyen a cerrar brechas de inclusión.

En conjunto, este estudio plantea que ALC no podrá cerrar sus brechas de inversión, productividad e inclusión únicamente mediante mayor disponibilidad de financiamiento; sino que requiere instituciones capaces de orientar recursos, asumir riesgos, estructurar proyectos, coordinar actores, sostener inversión de largo plazo y medir resultados. Bajo esta lógica, fortalecer los BND en términos de fondeo, gobernanza, capacidades técnicas, instrumentos de mitigación de riesgo, medición de impacto y articulación con políticas productivas constituye una condición necesaria para convertir las oportunidades económicas, tecnológicas, sociales y ambientales de la región en desarrollo efectivo.

CAPITULO I. PANORAMA DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE E IMPLICANCIAS DE LA GEOPOLÍTICA

A los cambios propios de la evolución del desarrollo tecnológicos, los avances de la ciencia, y el cambio climático, se suman aquellos derivados por las políticas y las acciones de los países en el marco de sus estrategias de posicionamiento a nivel global. Estas dinámicas han adquirido creciente relevancia en la configuración de la economía mundial, al incidir sobre los flujos de comercio, inversión, financiamiento y abastecimiento de insumos estratégicos. Sus efectos no son homogéneos, como es de esperarse, algunos países y sectores pueden beneficiarse de la reconfiguración de cadenas productivas y comerciales, mientras que otros enfrentan mayores costos, restricciones externas y vulnerabilidades macroeconómicas.

En este contexto, la economía mundial transita por una etapa caracterizada por mayor incertidumbre, fragmentación geopolítica, revalorización de la seguridad económica y aumento de las tensiones comerciales y financieras. Siendo que, para América Latina y el Caribe (ALC), estas transformaciones tienen implicaciones directas sobre el crecimiento, la inversión, el comercio exterior, la estabilidad macroeconómica y la capacidad de los Estados para financiar políticas de desarrollo.

1. Cambios en la economía internacional y la geopolítica mundial

La economía internacional y la geopolítica mundial han experimentado cambios significativos en lo que va de la presente década. El período se ha caracterizado por una sucesión de choques encadenados que han incrementado la volatilidad macroeconómica, revalorizado la seguridad económica y tensionado el comercio y la inversión transfronterizos. En este escenario, las cadenas globales de valor, los mercados de energía y alimentos, la inversión extranjera directa, la política industrial y la seguridad estratégica han pasado a estar crecientemente condicionados por consideraciones geopolíticas.

Reconfiguración de cadenas globales de valor: De la eficiencia a la resiliencia. Entre 2021 y 2023 se consolidó un giro desde modelos de producción y abastecimiento basados en esquemas de “justo a tiempo” hacia estrategias orientadas a una mayor resiliencia. Estas incluyen la acumulación de inventarios, la diversificación de proveedores, la regionalización selectiva de la producción y la relocalización parcial de actividades estratégicas. La evidencia muestra, por un lado, el repunte y posterior normalización de las presiones de oferta. El Índice de Presiones en Cadenas Globales de Suministro (Global Supply Chain Pressure Index, GSCPI¹) alcanzó máximos históricos hacia fines de 2021 y posteriormente se revirtió hacia valores significativamente menores en 2023. Sin embargo, los episodios posteriores de tensión geopolítica y disrupción logística, especialmente en zonas estratégicas —como el Golfo Pérsico— para el comercio marítimo y energético, han vuelto a elevar los riesgos sobre el abastecimiento global.

Perspectiva geoeconómica, el abastecimiento de insumos críticos, como energía, alimentos, semiconductores, minerales estratégicos y componentes tecnológicos, ha pasado a considerarse crecientemente un activo de seguridad nacional. Esto ha acelerado políticas de *friend shoring*, controles a la exportación, incentivos a la producción local y mecanismos de revisión de inversiones extranjeras en sectores sensibles. Si bien estas medidas buscan reducir vulnerabilidades, también implican mayores costos de coordinación, duplicación de capacidades productivas y mayores exigencias regulatorias para empresas y gobiernos.

¹ Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI), es una medida precisa de las presiones en la cadena de suministro global para evaluar la importancia de las restricciones de la oferta en los resultados económicos. El índice es estimado por el Applied Macroeconomics and Econometrics Center (AMEC) del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Figura N°1. Índice de Presiones en Cadenas Globales de Suministro



Sources: Bureau of Labor Statistics; Harper Petersen Holding GmbH; Baltic Exchange; IHS Markit; Institute for Supply Management; Haver Analytics; Refinitiv; authors' calculations. <https://www.newyorkfed.org/research/policy/gscpi#/interactive>. En: Federal Reserve Bank of New York, Global Supply Chain Pressure Index, <https://www.newyorkfed.org/research/gscpi.html>

Energía y alimentos como instrumentos de poder: precios, sanciones y seguridad. Los conflictos bélicos, las sanciones económicas y la reorientación de flujos energéticos y agrícolas han reforzado la centralidad de la seguridad energética y alimentaria. El Grupo Banco Mundial documentó una elevada volatilidad de precios energéticos desde febrero de 2022, asociada al inicio de las tensiones bélicas en Europa del Este y a la posterior reconfiguración de los mercados internacionales de petróleo, gas natural, carbón y granos, en un marco de crisis de energía y alimentos que afectó especialmente a economías importadoras netas.

Figura N°2A. Precio Petróleo: Brent vs. Urales

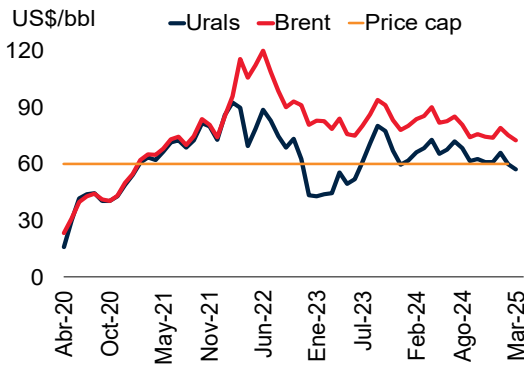


Figura N°2B. Precio del Petróleo y Eventos Claves, Agosto 2024-Abril 2025



Figura N°2C. Precios del Gas Natural

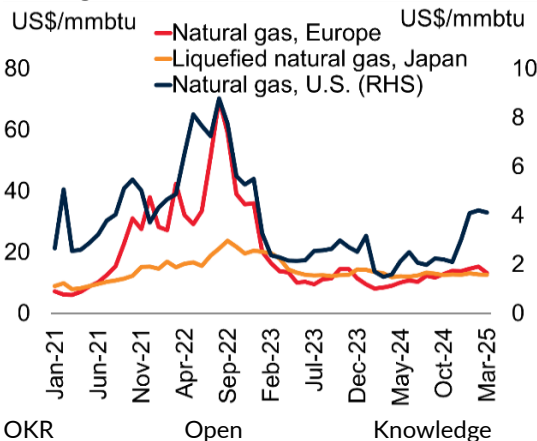
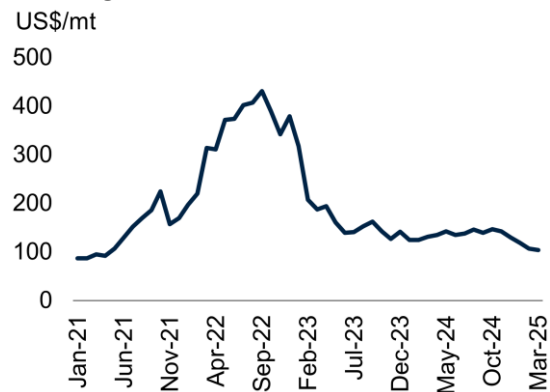


Figura N°2D. Precio del Carbón



OKR Open Knowledge Repository, Banco Mundial. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/8fcb92be-29c0-4fa2-bb05-db4c140f407b/download>

La caída del precio del petróleo Brent desde su pico de mediados de 2022 no eliminó la vulnerabilidad del mercado energético. Por el contrario, nuevos episodios de tensión geopolítica han mantenido elevada la prima de riesgo incorporada en los precios internacionales; siendo que, el precio del petróleo habría registrado un nuevo aumento, desde niveles cercanos a US\$73 hasta aproximadamente US\$112 hacia el 27 de marzo de 2026, evidenciando la sensibilidad del mercado ante este tipo de eventos.

La geopolítica operó por canales concretos: sanciones, restricciones de oferta, rediseño de rutas comerciales, y mayor inversión en infraestructura de importación y almacenamiento. El resultado fue un aumento del “riesgo geopolítico” incorporado en precios y contratos, con efectos persistentes sobre inflación, cuentas externas y seguridad de abastecimiento.

Figura N°3A. Índice de Precios Agrícolas

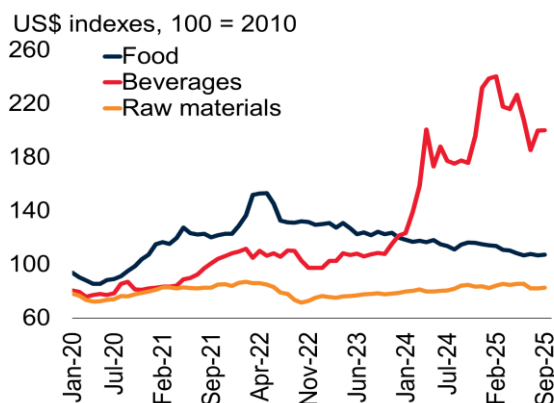
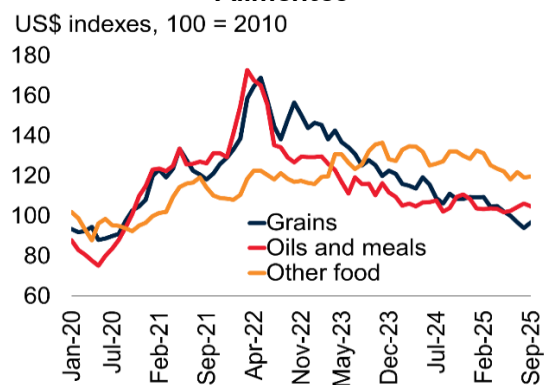


Figura N°3B. Índice de Precios de los Alimentos



OKR Open Knowledge Repository, Banco Mundial.

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/6128f71e-06c0-48eb-bc4f-bdf37ea524f2/download>

Fragmentación geoeconómica: comercio, inversión y política industrial en tensión. El período 2021–2025 consolidó un cambio de régimen hacia mayor proteccionismo, política industrial y fragmentación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) caracterizó el entorno como uno de mayor protección y fragmentación, con elevada incertidumbre de política comercial proyectada para 2025–2026. En comercio, se produjo la menor participación de América del Norte, sobre todo de Estados Unidos, Europa, ALC y el aumento considerable de Asia, liderado por China (Cuadro N°1).

En materia de inversión, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) reportó que los flujos globales de inversión extranjera directa ascendieron a US\$1,33 billones en 2023, lo que representó una caída de 2% respecto de 2022, y que el financiamiento internacional de proyectos disminuyó 26%, un dato particularmente relevante para infraestructura. Complementariamente, la UNCTAD estimó que el valor del comercio global en 2023 descendió a menos de US\$31 billones, equivalente a una contracción aproximada de 4,5% respecto del récord de 2022, con caída marcada en bienes y expansión en servicios.

Cuadro N°1. Exportaciones Mundiales de Mercancías, por Regiones y Determinadas Economías
(Miles de millones de US\$ y %)

	1948	1953	1963	1973	1983	1993	2003	2024
	Valor							
Mundo	59	84	157	579	1838	3688	7379	23845
	Participación							
Mundo	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
América del Norte	28.1	24.8	19.9	17.3	16.8	17.9	15.8	13.6
Estados Unidos de América	21.6	14.6	14.3	12.2	11.2	12.6	9.8	8.7
México	0.9	0.7	0.6	0.4	1.4	1.4	2.2	2.6
Canadá	5.5	5.2	4.3	4.6	4.2	3.9	3.7	2.4
América del Sur, Centro y el Caribe	11.3	9.7	6.4	4.3	4.5	3.0	3.1	3.5
Brasil	2.0	1.8	0.9	1.1	1.2	1.0	1.0	1.4
Chile	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
Europa	35.1	39.4	47.8	50.9	43.5	45.3	46.3	36.3
Alemania (1)	1.4	5.3	9.3	11.7	9.2	10.3	10.2	7.1
Países Bajos	2.0	3.0	3.6	4.7	3.5	3.8	4.0	3.9
Francia	3.4	4.8	5.2	6.3	5.2	6.0	5.3	2.7
Reino Unido	11.3	9.0	7.8	5.1	5.0	4.9	4.2	2.1
Comunidad de Estados Independientes (CEI), incluidos determinados Estados asociados y antiguos Estados miembros (2)	-	-	-	-	-	1.7	2.3	2.7
África	7.3	6.5	5.7	4.8	4.5	2.5	2.4	2.6
Sudáfrica (3)	2.0	1.6	1.5	1.0	1.0	0.7	0.5	0.5
Oriente Medio	2.0	2.7	3.2	4.1	6.7	3.5	4.1	6.1
Asia	14.0	13.4	12.5	14.9	19.1	26.0	26.1	35.1
China	0.9	1.2	1.3	1.0	1.2	2.5	5.9	15.0
Japón	0.4	1.5	3.5	6.4	8.0	9.8	6.4	3.0
India	2.2	1.3	1.0	0.5	0.5	0.6	0.8	1.9
Australia y Nueva Zelandia	3.7	3.2	2.4	2.1	1.4	1.4	1.2	1.6
Seis economías comerciantes de Asia Oriental	3.4	3.0	2.5	3.6	5.8	9.6	9.6	9.8
Pro memoria:								
UE (4)	-	-	24.5	37.0	31.3	37.3	38.6	30.0
URSS, ex	2.2	3.5	4.6	3.7	5.0	-	-	-
Miembros del GATT/OMC (5)	63.4	69.6	75.0	84.1	77.0	89.0	98.3	98.1

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

Nota: Entre 1973 y 1983 y entre 1993 y 2003, la evolución de los precios del petróleo influyó significativamente en las partes porcentuales correspondientes a las exportaciones.

(1) Las cifras se refieren a la República Federal de Alemania de 1948 a 1983.

(2) Las estadísticas han resultado afectadas de forma significativa por la inclusión del comercio entre los Estados Bálticos y la CEI durante el período 1993 y 2003.

(3) A partir de 1998, las cifras se refieren a Sudáfrica y no la Zona Aduanera Común de África Meridional.

(4) Las cifras se refieren a CEE-6 en 1963, CE-9 en 1973, CE-10 en 1983, UE-12 en 1993, UE-25 en 2003, y la Unión Europea, excluyendo al Reino Unido, en 2024.

(5) Miembros en el año indicado.

<https://data.wto.org/>

Desde una lectura geopolítica, se ha ampliado el uso de instrumentos económicos con fines estratégicos. Entre ellos se incluyen subsidios, restricciones tecnológicas, sanciones, controles de exportación, regulaciones ambientales y mecanismos de revisión de inversiones. Esta tendencia eleva la probabilidad de duplicación de capacidades productivas, reduce la eficiencia agregada del sistema económico internacional y puede aumentar los costos de inserción externa

para economías pequeñas y medianas, tal como advierte la literatura del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre costos de la fragmentación.

Figura N°4A. Los aranceles aumentaron significativamente en 2025, especialmente en el sector manufacturero.

Arancel promedio ponderado por el comercio aplicado al comercio mundial.

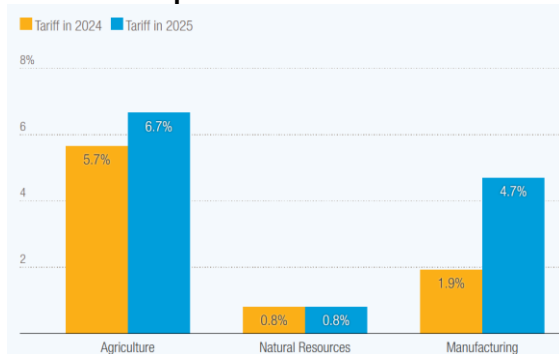
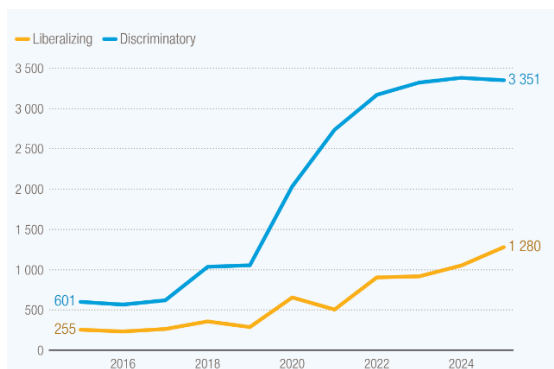


Figura N°4C. Las medidas restrictivas y distorsionadoras del comercio siguen aumentando.

Número de medidas de política relacionadas con el comercio, 2015-2025



Fuente: UN Trade and Development (UNCTAD)

Los aranceles globales aumentaron en 2025, impulsados principalmente por medidas introducidas por E.E.U.U., siendo la manufactura el sector más afectado. Se prevé que los gobiernos continúen usando aranceles en 2026 con fines industriales, fiscales y estratégicos.

Los cambios frecuentes en la política comercial generan mayor incertidumbre, desincentivan la inversión y alteran las cadenas de suministro. Las economías más pequeñas, menos diversificadas y con menor capacidad institucional son las más expuestas al aumento de costos de cumplimiento, volatilidad comercial y pérdida de acceso preferencial a mercados.

Desde 2020 se han introducido aproximadamente 18,000 nuevas medidas comerciales discriminatorias. Asimismo, las regulaciones técnicas afectan actualmente cerca de dos tercios del comercio global, lo que incrementa los costos de cumplimiento, especialmente para exportadores pequeños y medianos. Las normas ambientales, sociales y de seguridad continuarán ampliándose en 2026, por lo que la armonización regulatoria, las normas globales

Figura N°4B. Los servicios digitales constituyen un segmento de rápido crecimiento del comercio mundial. Crecimiento anual promedio de las exportaciones (porcentaje), 2015-2024

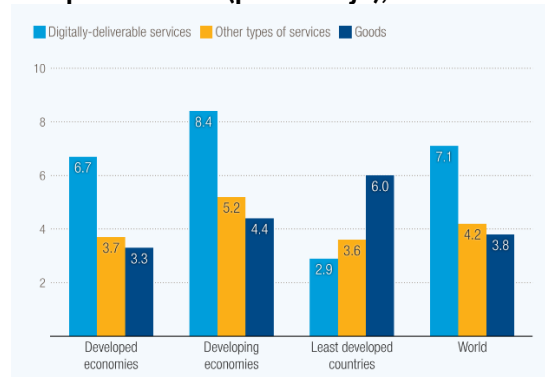
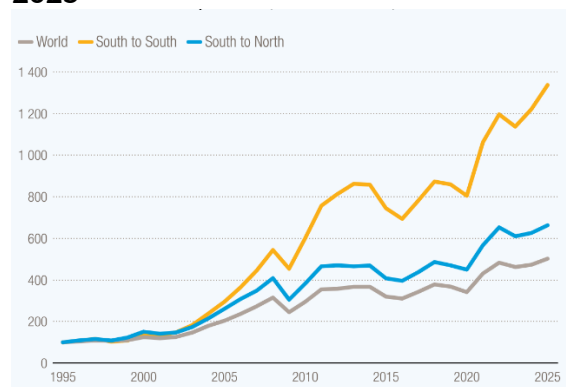


Figura N°4D. El comercio Sur-Sur supera el crecimiento de las exportaciones de los países en desarrollo al Norte y del comercio mundial.

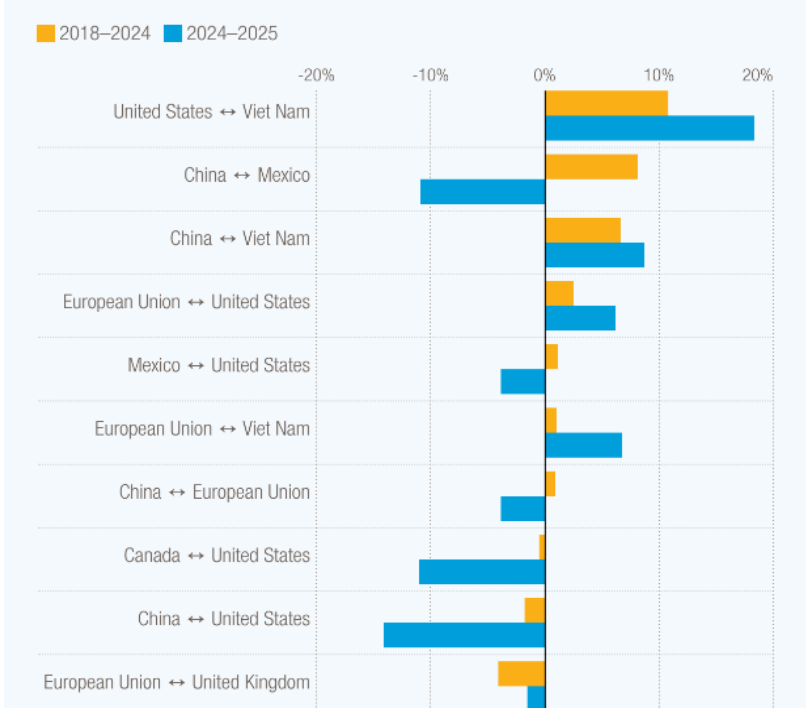
Flujos de exportación de mercancías seleccionadas, índice 1995=100, 1995-2025



flexibles y la asistencia técnica focalizada serán fundamentales para garantizar un comercio más inclusivo.

Figura N°5. El crecimiento del comercio es desigual entre los flujos bilaterales en las cadenas de valor globales.

Tasas de crecimiento anual de flujos bilaterales seleccionados en relación con el promedio mundial en el período.



Fuente: UN Trade and Development (UNCTAD)

Casi dos tercios del comercio mundial tienen lugar dentro de cadenas de valor que están siendo transformadas por las tensiones geopolíticas, la política industrial y las nuevas tecnologías. Las empresas están diversificando proveedores y relocalizando la producción más cerca de los principales mercados para reducir riesgos.

Las exportaciones de servicios representan ahora el 27% del comercio mundial y crecieron aproximadamente un 9% en 2025, muy por encima de los bienes. Los servicios también predominan como insumos intermedios globales, siendo la base de los sectores manufacturero y primario.

Los servicios entregables digitalmente impulsan gran parte de este crecimiento, pero su alcance sigue siendo limitado en los países menos adelantados y en varias economías de ingresos medios. Cerrar la brecha digital es esencial para una mayor participación en el comercio basado en servicios.

Las exportaciones de mercancías Sur-Sur aumentaron de unos US\$0.5 billones en 1995 a US\$6.8 billones en 2025. Actualmente, el 57% de las exportaciones de países en desarrollo se dirige a otros mercados en desarrollo, liderados por las cadenas de valor regionales de Asia.

África y América Latina también están fortaleciendo los lazos Sur-Sur. Una mayor integración interregional puede contribuir a compensar la menor demanda de economías avanzadas, diversificar mercados y fortalecer la resiliencia externa. Sin embargo, para aprovechar esta

oportunidad, la región requiere mejoras en infraestructura, logística, financiamiento productivo, integración regulatoria y capacidades tecnológicas.

Re-militarización del orden internacional: conflictos regionales y gasto en defensa. El quinto cambio es la intensificación del componente militar en la competencia geopolítica. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés) reportó que el gasto militar mundial alcanzó US\$2.7 billones en 2024, con un aumento real de 9.4% interanual, el mayor desde el fin de la Guerra Fría, y un incremento acumulado de 37% entre 2015 y 2024. Esto contribuye a reasignar prioridades fiscales (defensa, seguridad, resiliencia) y a tensionar la disponibilidad de financiamiento para inversión productiva y climática en varias regiones.

2. Panorama, situación y perspectivas de la economía mundial

El escenario macroeconómico y de política internacional para los próximos años combina desinflación gradual, crecimiento estable pero moderado, desaceleración en algunas economías avanzadas y emergentes, y un aumento estructural de la incertidumbre asociado a tensiones geopolíticas, mayores barreras comerciales, volatilidad financiera y profundización de las políticas de industrialización estratégica. Aunque esta tendencia se ha visto parcialmente alterada por episodios recientes de tensión en el Golfo Pérsico.

En el año 2025, el crecimiento mundial alcanzó el 3.3% y las proyecciones se sitúan en el 3,3% en 2026 y el 3,2% en 2027². La inversión en tecnología, el apoyo monetario y fiscal, las condiciones financieras favorables y la adaptabilidad del sector privado contrarrestan los cambios en las políticas comerciales. Se prevé que la inflación mundial tenga una tendencia descendente del 4.1% del 2025, a 3.8% en el 2026 y luego a 3.4% en el 2027. Sin embargo, los principales riesgos podrían venir de un reajuste de expectativas en torno a la tecnología, una escalada de tensiones geopolíticas, nuevas restricciones comerciales y episodios de volatilidad financiera.

El comercio mundial continúa mostrando bajo dinamismo, lo que restringe uno de los principales impulsores externos de crecimiento para ALC. En el año 2025, su tasa de crecimiento del volumen del comercio mundial (bienes y servicios) alcanzó el 4.1% y las proyecciones para el 2026 y 2027, se sitúan en torno al 2.6% y el 3.1% respectivamente.

Se verifica, además, una reasignación de flujos comerciales entre socios, asociada a estrategias de relocalización y diversificación. Si bien algunas economías pueden beneficiarse por sustitución de proveedores o nuevos encadenamientos, el efecto agregado de un comercio mundial menos dinámico constituye una restricción relevante para ALC, dada su apertura comercial.

Para ALC, luego de un crecimiento moderado del 2.4% en el 2026, las proyecciones convergen en un crecimiento alrededor de 2.2% para el 2026 y 2.7% en el 2027. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima 2.3% para 2026, lo que muestra la persistencia de un patrón de bajo crecimiento. Asimismo, subraya que “el margen de maniobra macro es acotado: la deuda pública bruta del gobierno central promedió 52.3% del PIB en América Latina y 67.9% en el Caribe (marzo de 2024); el déficit global proyectado para 2024 fue -3.2% del PIB; y el incumplimiento tributario en 2023 se estimó en 6.7% del PIB regional”³. El aumento del pago de intereses reduce el espacio fiscal para inversión pública y gasto social estratégico. La sostenibilidad fiscal exige mejoras en eficiencia del gasto, fortalecimiento de ingresos tributarios y marcos fiscales eficaces.

² Fondo Monetario Internacional (2026) “Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial: Una economía firme ante fuerzas divergentes”. Enero. <https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/january/spanish/text.pdf>.

³ CEPAL (2025) “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe”. Diciembre de 2025.

Restricciones fiscales: déficits, endeudamiento y presión por intereses

Persisten déficits fiscales (Figura N° 6) y niveles de deuda pública bruta elevados (Figura N° 7) en términos históricos. La combinación de un mayor nivel de endeudamiento y costos de financiamiento más elevados ha incrementado significativamente la carga por intereses, que actualmente alcanza sus niveles más altos desde 2020. El pago de intereses compite con la inversión pública y con el gasto social prioritario, reduciendo la capacidad del Estado para financiar bienes públicos esenciales y políticas de desarrollo.

Figura N°6. América Latina (16 países): indicadores fiscales del gobierno central, 2015-2025 (En % del PIB)

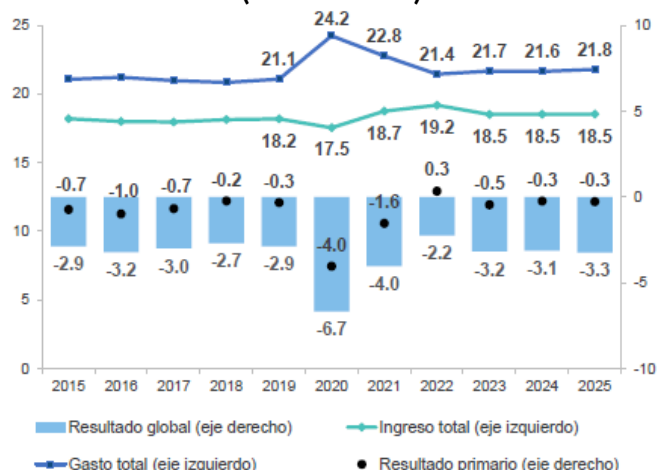
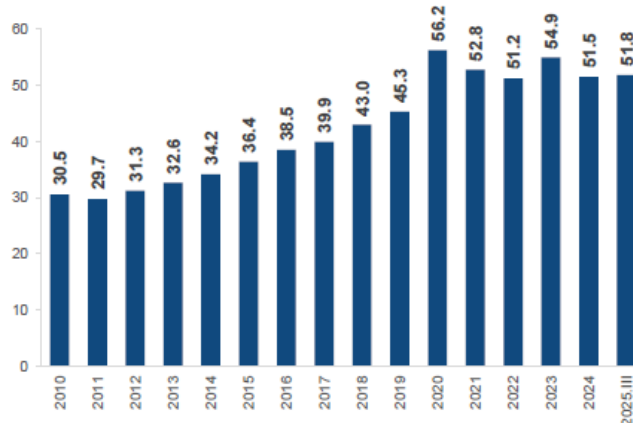


Figura N°7. América Latina (16 países): Deuda pública bruta del gobierno central, 2010 -2025.III (En % del PIB)

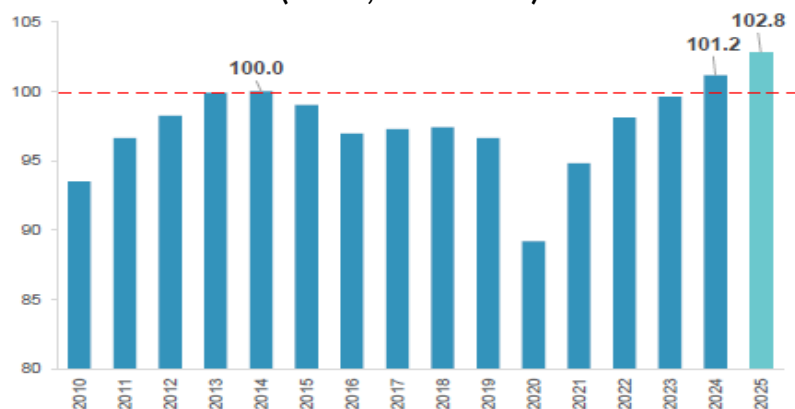


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Tomado de la Presentación de Esteban Perez (2026) en el webinar "Perspectivas Económicas 2026 para ALC y su Implicancia para la Acción de la Banca de Desarrollo". Comunidad de Practica ALIDE/BID/CEPAL

Estos niveles de crecimiento de la región son insuficientes para cerrar las brechas de ingreso per cápita con economías avanzadas. El crecimiento potencial del PIB per cápita, estimado en torno a 0.7%, evidencia un patrón de no convergencia y limita la capacidad de generar mejoras distributivas sostenidas.

Figura N°8. América Latina: PIB per cápita, 2010 a 2025 (Índice, 2014 = 100)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de cifras oficiales. *2025 estimado.

Tomado de: Presentación de Esteban Perez (2026) en el webinar "Perspectivas Económicas 2026 para ALC y su Implicancia para la Acción de la Banca de Desarrollo". Comunidad de Practica ALIDE/BID/CEPAL

La inflación venía mostrando una tendencia a la baja en la región, aunque con diferencias entre subregiones, reflejada por las reducciones de los precios de alimentos y de energía en mercados internacionales, la depreciación del dólar, un contexto de menor inflación global y Los efectos de tasas de interés relativamente elevadas, esto ha tenido una leve reversión a partir del mes de febrero. El FMI⁴ estimó en octubre de 2025, una tasa de inflación para la región para fines de ese año de 6.5% y 4.2% para 2026. Mas recientemente, en enero de este año J.P. Morgan Private Bank⁵ señaló que “la inflación regional se estaba estabilizando y se estima que la mayoría de los países tendrán tasas generales de entre el 2% y el 5%, y que el consenso estima que la inflación regional se moderará hacia el 3,7% en 2026, apoyada por un ajuste previo de la política monetaria y un retorno de las expectativas de inflación a niveles más estables”.

Si bien se observa una recuperación del empleo, los niveles de crecimiento son cada vez menores y persisten elevados niveles de informalidad y baja productividad. Cerca de dos tercios de la población reside en hogares con al menos un trabajador informal, lo que constituye una restricción estructural para la sostenibilidad fiscal, la acumulación de capital humano y el cambio estructural. Así tenemos que el crecimiento del empleo en la región en los últimos 25 años ha tenido el siguiente comportamiento: en el periodo 2000-2004 fue de 2.6%, en el 2005-2009 bajo a 2.3%, posteriormente en el 2010-2014 volvió a bajar a 1,7%, tendencia que se acentuó en el periodo 2015-2019 con 1.1%. En los últimos 20 años del 2016-2025 creció en promedio 1.4%.

Cuadro N°2. Proyecciones de Crecimiento de la Economía Mundial

PBI Real (Variación porcentual anual)	Estimación	Proyecciones	
	2025	2026	2027
Producto Mundial	3.3.	3.3	3.2
Economías Avanzadas	1.7	1.8	1.7
Estados Unidos	2.1	2.4	2.0
Zona Euro	1.4	1.3	1.4
Economía Emergentes y en Desarrollo	4.4	4.2	4.1
China	5.0	4.5	4.0
India	7.3	6.4	6.4
América Latina y el Caribe	2.4	2.2	2.7
Brasil	2.5	1.6	2.3
México	0.6	1.5	2.1
Oriente Medio y Asia Central	3.7	3.9	4.0
Africa Subsahariana	4.4.	4.6	4.6
Economías Emergentes de Ingreso Medio	4.3	4.1	4.1
Economías en Desarrollo de Ingreso Bajo	4.6	5.1	5.1
Comercio			
Volumen del comercio mundial (bienes y servicios)	4.1	2.6	3.1
Economías avanzadas	3.0	1.9	2.4
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	5.7	3.6	4.4
Precios de las materias primas			
Petróleo	-14.2	-8.5	0.1
No combustibles (promedio basado en las ponderaciones de la importación mundial de materias primas)	9,4	7,5	0.9
Precios mundiales al consumidor	4.1	3.8	3,4
Economías avanzadas	2.5	2.2	2.1
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	5.2	4.8	4.3

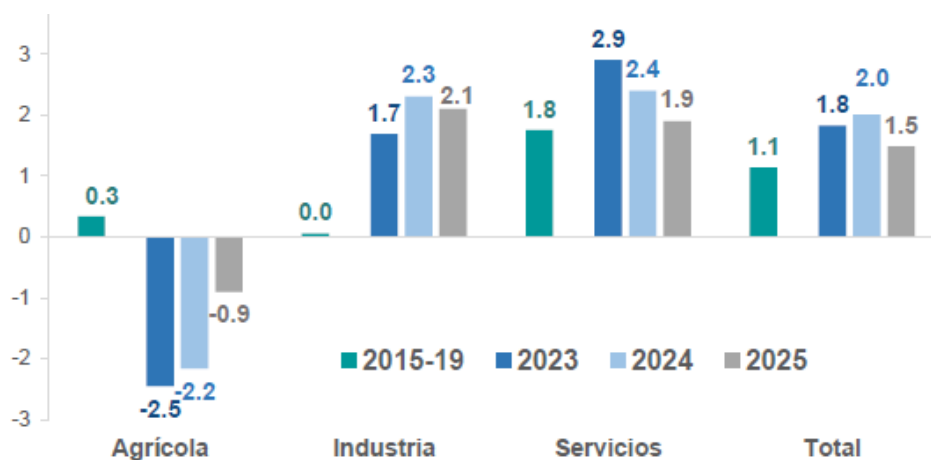
FMI (2026). “Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial: Una economía firme ante fuerzas divergentes”.

⁴ FMI (2025) “Perspectivas Económicas las Américas Enfrentando desafíos en un entorno mundial cambiante”. Octubre.

<https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/whd/2025/october/spanish/text.pdf>.

⁵ <https://privatebank.jpmorgan.com/latam/es/insights/markets-and-investing/ideas-and-insights/latin-america-in-2026-between-promise-and-pressure-the-answer-is-optionality>.

Figura N°9. América Latina y el Caribe (14 países): Variación del Número de Ocupados, Sectores Productivos, Variación Promedio 2015 -2019, 2023, 2024 y Estimación 2025 (%)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

*Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Tomado de: Presentación de Esteban Perez (2026) en el webinar "Perspectivas Económicas 2026 para ALC y su Implicancia para la Acción de la Banca de Desarrollo". Comunidad de Practica ALIDE/BID/CEPAL

Este patrón sugiere restricciones estructurales en productividad, capacidad de absorción de empleo formal y articulación entre crecimiento, inversión y diversificación productiva. La informalidad elevada continúa operando como un canal de vulnerabilidad social y fiscal, y como freno a la acumulación de capital humano, la inclusión financiera y la difusión tecnológica.

En correspondencia con lo señalado previamente y con los resultados de espacios técnicos organizados por ALIDE, se destacan un conjunto de hallazgos estructurales y coyunturales relevantes para la región en perspectiva:

- Un entorno internacional menos dinámico y con mayor incertidumbre; la persistencia de un régimen de bajo crecimiento;
- Una recuperación laboral incompleta y acompañada de alta informalidad;
- Una tendencia de desinflación que abre una ventana parcial para la política monetaria;
- Restricciones fiscales persistentes y elevada carga de intereses; y
- Condiciones financieras externas relativamente favorables, aunque sensibles a cambios en las expectativas globales.

Probablemente, de no variar las tendencias internacionales recientes, estos factores podrían limitar la capacidad de recuperación de la región e incluso revertir algunos avances observados en materia de inflación, empleo y financiamiento.

CAPITULO II. MOVILIZACIÓN DE INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El capítulo anterior examinó el entorno macroeconómico, las condiciones coyunturales y las perspectivas globales y regionales que inciden sobre el desempeño económico de América Latina y el Caribe. A partir de ese diagnóstico, este capítulo desplaza el foco hacia la inversión y plantea que el desafío regional no consiste únicamente en aumentar su volumen, sino en mejorar su orientación hacia actividades con mayor potencial de productividad, innovación, encadenamientos productivos y empleo de calidad. El capítulo muestra que ALC mantiene un rezago estructural en acumulación de capital, con tasas de inversión inferiores a las de otras regiones emergentes y una composición todavía concentrada en actividades tradicionales, lo que limita su capacidad de cerrar brechas de productividad.

El objetivo central del capítulo es evaluar cómo la banca nacional de desarrollo puede contribuir a movilizar inversión hacia sectores estratégicos capaces de transformar la estructura productiva regional. Para ello, se analizan las condiciones habilitantes y restricciones que enfrenta la inversión (incertidumbre regulatoria, brechas logísticas, baja integración regional, costos financieros, disponibilidad energética y capacidades institucionales), así como las oportunidades abiertas por la reconfiguración de cadenas globales, la transición energética, la digitalización, la bioeconomía y la demanda de infraestructura sostenible. El capítulo identifica sectores con alto potencial, entre ellos manufactura de nueva generación, energía y vectores de transición, infraestructura digital, centros de datos, servicios intensivos en conocimiento, agroindustria, bioeconomía, turismo sostenible e hidrocarburos bajo una transición gestionada.

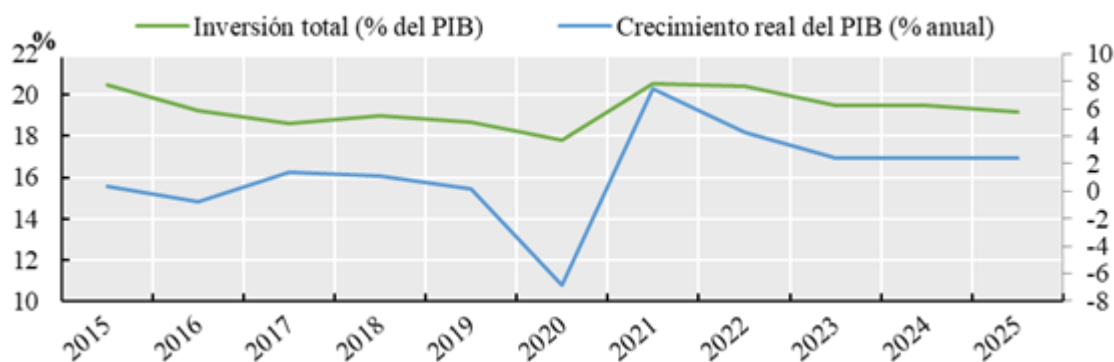
La contribución principal del capítulo es mostrar que los bancos nacionales de desarrollo no actúan solo como proveedores de crédito de largo plazo, sino como instituciones capaces de reducir riesgos, estructurar proyectos, movilizar capital privado y crear condiciones para que sectores emergentes se conviertan en carteras de inversión financierables. Aunque estos instrumentos aún son limitados y heterogéneos en la región, ya existen experiencias que se alinean con políticas industriales, climáticas, digitales, territoriales y de integración regional. En esa línea, el capítulo destaca el papel de instrumentos como garantías, financiamiento combinado, asistencia técnica, fondos temáticos, bonos verdes, coinversión y plataformas sectoriales para conectar las oportunidades productivas de ALC con una agenda de transformación económica sostenible.

2.1. Panorama reciente y perspectivas de la inversión en ALC

El desempeño reciente de la inversión en ALC se inscribe en un contexto de crecimiento moderado, alta incertidumbre global y restricciones financieras persistentes, que han limitado la capacidad de la región para sostener un proceso de acumulación de capital consistente con sus necesidades de desarrollo productivo. En este marco, la inversión continúa siendo una de las principales limitantes para el crecimiento económico regional, tanto por su bajo dinamismo como por su orientación sectorial y su limitada capacidad para generar encadenamientos productivos y empleo de calidad.

Andrade et al (2026) señala que, tras el rebote registrado en la etapa inmediatamente posterior a la pandemia, la inversión en ALC ha mostrado un desempeño errático y débil. Este comportamiento responde tanto a factores externos adversos —endurecimiento de las condiciones financieras internacionales y menor dinamismo del comercio global— como a factores internos vinculados a la volatilidad macroeconómica, la incertidumbre regulatoria y a las restricciones fiscales. Como resultado, la inversión no ha logrado consolidarse como un motor sostenido del crecimiento, lo que ayuda a explicar la desaceleración observada en la mayoría de los países de ALC (Figura N°10).

Figura N°10. Evolución de la Inversión y el Crecimiento Económico de ALC, 2015-2024

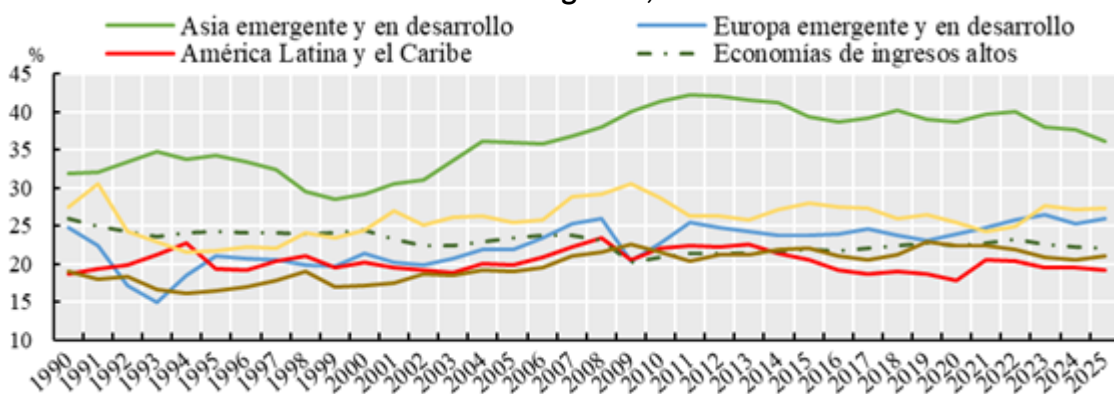


Fuente: FMI (WEO). Elaboración propia

Este desempeño reciente se inscribe, además, en un patrón de largo plazo de baja acumulación de capital, que refleja el rezago relativo de ALC en cuanto al esfuerzo inversor. La inversión como porcentaje del PIB se ha mantenido en niveles relativamente bajos desde comienzos de la década de 1990, concentrándose en un rango cercano al 18%-22% del PIB, con fluctuaciones cíclicas, pero sin un cambio estructural sostenido (Figura N°11).

En contraste, Asia emergente y en desarrollo ha sostenido durante el mismo período tasas de inversión significativamente más elevadas, en muchos casos superiores al 35% del PIB, lo que ha permitido financiar procesos de industrialización, diversificación productiva e incorporación tecnológica en una escala significativa. Incluso otras regiones emergentes –como Europa emergente y Oriente Medio y Asia Central– han mostrado, en promedio, esfuerzos inversores superiores a los de ALC, pese a enfrentar episodios recurrentes de volatilidad macroeconómica y tensiones geopolíticas. Este rezago estructural contribuye a explicar la dificultad de la región para converger hacia mayores niveles de productividad e ingreso.

Figura N°11. Inversión Total como % del PIB en América Latina y el Caribe y en Determinadas Regiones, 1990-2025



Fuente: FMI (WEO). Elaboración propia

Desde una perspectiva comparada, ALC muestra, por tanto, una posición desfavorable respecto a otras regiones emergentes, no solo en términos del volumen de inversión, sino también en su capacidad para sostener procesos de transformación productiva. Mientras Asia emergente ha logrado orientar la inversión hacia manufacturas, tecnología y servicios basados en conocimiento, ALC mantiene una estructura de inversión sesgada en sectores tradicionales, con menor impacto sobre la productividad agregada. OECD et al (2023) subraya que esta brecha no

responde únicamente al nivel de inversión, sino a su calidad, composición y grado de articulación con estrategias de desarrollo productivo.

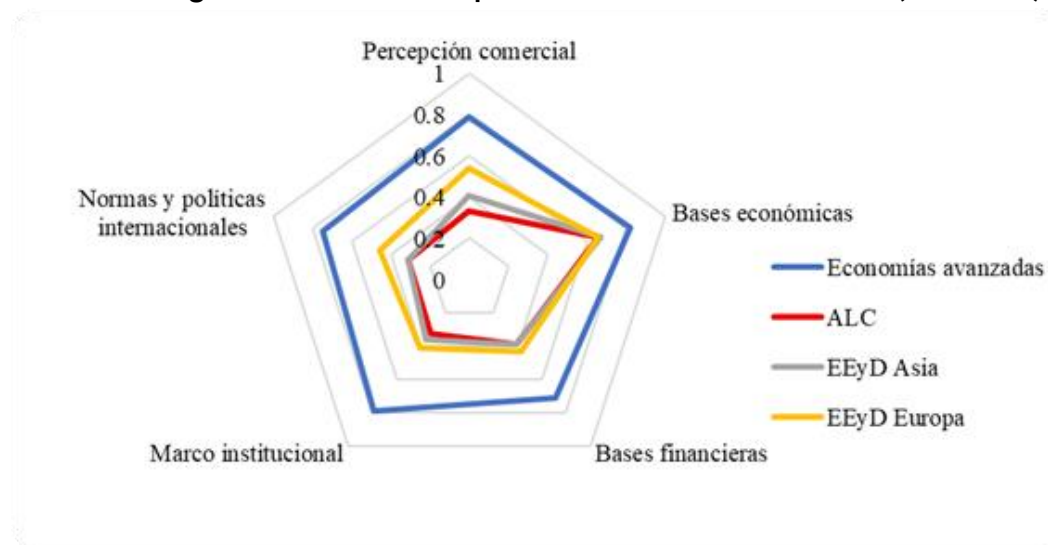
La relación entre inversión y productividad refuerza este diagnóstico. De acuerdo con estimaciones de McKinsey (2026), una mayor inversión y una asignación de capital más eficaz resultan fundamentales para impulsar el crecimiento de la productividad en ALC. Sin embargo, durante los últimos 25 años, el capital adicional por trabajador ha contribuido al crecimiento de la productividad regional en apenas 0.9 puntos porcentuales anuales, aproximadamente la mitad de lo observado en economías comparables.

Este bajo aporte de la productividad no es un fenómeno coyuntural, sino una consecuencia directa de la persistente subinversión en sectores intensivos en capital, tecnología e innovación. Las estimaciones contrafactuales de McKinsey (2026) sugieren que, de haber igualado el desempeño de economías pares en materia de productividad, el PIB regional podría haber sido entre 10% y 15% mayor en la última década.

El Global Opportunity Index 2025 del Milken Institute muestra que, si bien ALC presenta niveles de inversión relativamente más altos respecto a otras regiones en desarrollo, obtiene puntuaciones más bajas en indicadores vinculados al entorno institucional, la estabilidad percibida y la sofisticación productiva. Este patrón sugiere que la región continúa atrayendo inversión asociada a ventajas estructurales —como el tamaño del mercado o la dotación de recursos naturales—, pero enfrenta dificultades para posicionarse como destino preferente de inversión orientada a actividades de mayor valor agregado (Figura N°12).

Mirando hacia adelante, Andrade et al. (2026) señala que las perspectivas de inversión seguirán siendo moderadas y sujetas a riesgos, aun en un escenario de cierta normalización macroeconómica. La eventual reducción de las tasas de interés y una mayor estabilidad de algunas variables podrían aliviar parcialmente el costo del capital, pero difícilmente bastarán para revertir un patrón histórico de baja acumulación. El desafío central para la región no es únicamente aumentar los volúmenes de inversión, sino mejorar su orientación y su impacto productivo, alineándola con sectores capaces de impulsar la productividad, la innovación y el empleo en un contexto global marcado por la sostenibilidad, la digitalización y los cambios geopolíticos.

Figura N°12. Perfil Comparado del Entorno de Inversión (GOI 2025)



Fuente: Milken Institute (2025, puntuaciones del Índice GOI, y análisis de los autores basado en datos de las Estadísticas Financieras Internacionales del FMI.
Elaboración: Propia

2.2. Factores de riesgo y condiciones habilitantes para la inversión

El comportamiento reciente de la inversión ALC se comprende mejor si se toma en cuenta, lo señalado anteriormente, esto es, que la economía mundial atraviesa una fase de cambio profundo, con implicancias directas sobre la localización del capital, la configuración de las cadenas de valor y los sectores que concentran las nuevas apuestas tecnológicas. La pandemia actuó como acelerador de tendencias preexistentes, al reorganizar los patrones de consumo, modificar la demanda de bienes y servicios, impulsar modelos de negocio basados en plataformas y datos, y aumentar la sensibilidad empresarial frente a interrupciones logísticas, cuellos de botella y shocks sanitarios o geopolíticos. A su vez, cobró relevancia una agenda de transición energética, digitalización y sostenibilidad que comenzó a incidir en decisiones de inversión, estrategias industriales y políticas comerciales en las principales economías (CEPAL, 2025a; OCDE, 2025). Sin embargo, los acontecimientos geopolíticos recientes tienden a alterar algunos de los puntos de esta agenda, sobre todo en materia energética.

Ese giro tiene una consecuencia analítica importante, ya que la inversión internacional dejó de explicarse exclusivamente por costos relativos, tamaño de mercado o dotación de recursos. Actualmente, adquiere mayor relevancia la capacidad de los países —y de sus entornos regionales— para ofrecer condiciones que reduzcan la incertidumbre y faciliten la ejecución de proyectos. La previsibilidad regulatoria, la calidad de la infraestructura física y digital, la conectividad logística, la disponibilidad de insumos críticos y la existencia de una trayectoria creíble de transición energética se consolidan como factores decisivos.

En el caso de proyectos intensivos en capital, conocimiento y tecnología, el diferencial competitivo proviene con frecuencia de la calidad del ecosistema en el que se inserta la inversión, lo que incluye permisos ágiles, coordinación institucional, tiempos de ejecución razonables, seguridad jurídica, provisión estable de energía y reglas claras en materia de datos, competencia y contratación (BID, 2023; Milken Institute, 2025).

ALC posee condiciones para insertarse en estas dinámicas, entre ellos, la abundancia de recursos naturales estratégicos, el elevado potencial en energías renovables, una dotación de biodiversidad con posibilidades de desarrollo de la bioeconomía, grandes mercados urbanos y una amplia red de acuerdos comerciales preferenciales en varios países. Aun así, ha tenido dificultades para traducir ese potencial en flujos sostenidos de inversión de largo plazo, especialmente, de inversión orientada a la diversificación, la incorporación tecnológica y el escalamiento productivo. Esta brecha responde a una combinación de riesgos macrofinancieros y geopolíticos, junto con factores domésticos asociados a debilidades institucionales, baja integración regional, déficits logísticos y limitaciones para transformar oportunidades en carteras de proyectos financiables y ejecutables (CAF, 2023; OCDE, 2024).

Otro elemento relevante, según J.P. Morgan (2026), es que, ALC pese a representar alrededor del 6% del PIB mundial y contar con una dotación excepcional de recursos naturales, exhibe una alta fragmentación económica. Esta situación limita su capacidad para aprovechar la reorganización de las cadenas globales de valor y los procesos de relocalización productiva. Asimismo, afecta las economías de escala, la profundidad de los mercados, la densidad de proveedores y las posibilidades de especialización intraindustrial, condicionando así el atractivo para inversiones de mayor complejidad.

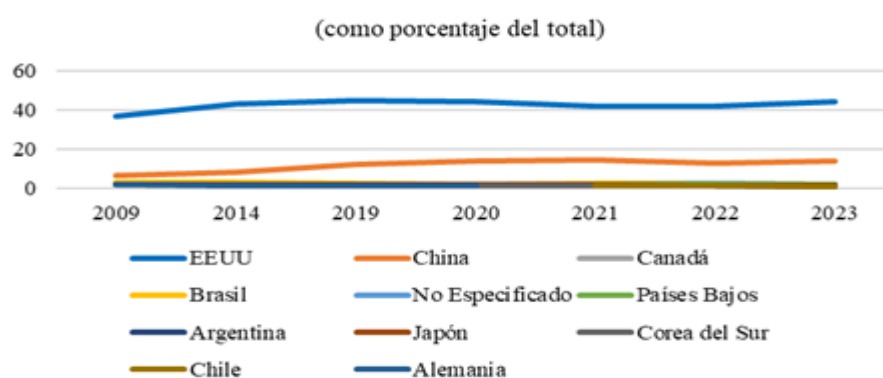
Riesgos macroeconómicos, financieros y de política internacional

Un entorno financiero más exigente limita tanto la disponibilidad de recursos e incrementa la aversión a riesgos regulatorios, logísticos y políticos, lo que se traduce en decisiones de inversión más selectivas. A su vez, las restricciones fiscales persistentes refuerzan este cuadro.

El problema es doble: por un lado, se debilita la provisión de bienes públicos que bajan costos sistémicos; por otro, se reduce la capacidad de diseñar instrumentos de mitigación de riesgos, cofinanciamiento o garantías públicas en proyectos con retornos sociales altos y retornos privados más inciertos (BID, 2023; OCDE, 2024).

Por su parte, la política comercial e industrial de las principales economías del mundo agrega incertidumbre para el inversionista. JP Morgan (2025) destaca que una orientación más proteccionista de la política comercial como la que aplica USA afectaría el comercio e inversión regional, considerando que más del 40% de las exportaciones de ALC se dirigen a ese mercado (Figura N°13). Esa dependencia introduce un riesgo adicional, sobre todo en economías muy integradas al mercado de USA, donde los cambios de reglas pueden afectar rentabilidad esperada, certificaciones, reglas de origen, compras públicas o condiciones de acceso.

Figura N°13. Concentración y Composición de los Destinos de Exportación de América Latina y el Caribe, 2009–2023



Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia

La fragmentación del comercio global y las tensiones geopolíticas entre grandes potencias también impactan a través de canales menos visibles, como la reconfiguración de estándares, los condicionamientos sobre tecnologías sensibles, los controles a las exportaciones y las nuevas exigencias de trazabilidad.⁶ Los sectores vinculados a baterías, semiconductores, servicios digitales y tecnologías limpias enfrentan un entorno regulatorio más complicado, en el que la inversión tiende a orientarse hacia regiones con mayor claridad normativa y mayor capacidad estatal para administrar estándares. Aunque ALC puede beneficiarse de las tendencias de relocalización, el resultado no es automático. Las decisiones de inversión suelen concentrarse en destinos que ofrecen de manera integral mercado, logística adecuada, estabilidad regulatoria, disponibilidad de energía y fuerza laboral calificada.

Integración regional, logística y acceso a insumos como habilitadores

La capacidad de integrarse a cadenas de suministro transfronterizas se ha vuelto una condición cada vez más relevante para atraer inversión, en particular en manufacturas avanzadas y servicios tecnológicos. En varios países de ALC, las preferencias comerciales y los acuerdos

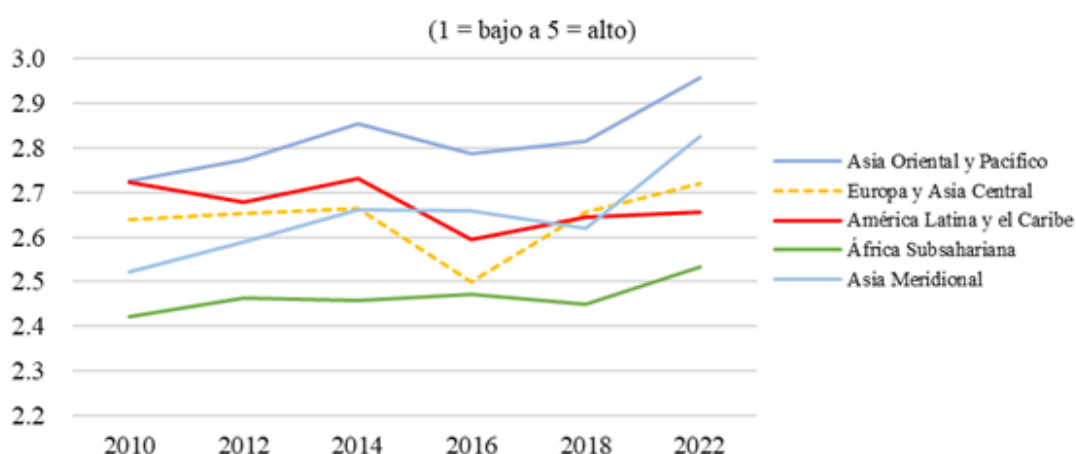
⁶ Prueba de esto lo constituyen las restricciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de semiconductores avanzados y equipos asociados, que introducen requisitos de licencias y limitan el acceso a tecnologías críticas para la IA y la supercomputación (CSIS, 2025). Estas medidas tienen efectos sistémicos, considerando que China representa cerca del 50% del mercado global de semiconductores, y se estiman impactos macroeconómicos acumulados de hasta 0,8% del PIB en el mediano plazo (Oxford Economics, 2024). En paralelo, otras economías han respondido con restricciones a exportaciones de insumos críticos y con políticas orientadas a fortalecer capacidades tecnológicas domésticas, lo que refleja una creciente utilización de instrumentos regulatorios, tecnológicos y comerciales como herramientas de competencia geopolítica (Reuters, 2026). <https://www.csis.org/analysis/understanding-us-allies-current-legal-authority-implement-ai-and-semiconductor-export> <https://www.reuters.com/world/china/how-china-has-expanded-its-economic-toolkit-during-its-trade-truce-with-us-2026-04-26/>

vigentes han facilitado el acceso a insumos que no se producen localmente con la calidad o escala necesarias. Un caso ilustrativo es el vínculo entre Europa y ALC, donde en el segundo trimestre de 2023 aumentaron las importaciones regionales de bienes intermedios europeos, en contraste con la caída general observada en la mayoría de las regiones, salvo excepciones como el comercio entre Asia y África o entre Europa y Asia (OMC, 2023). Esta evidencia indica que, cuando existen canales comerciales funcionales, la inversión puede apoyarse en cadenas híbridas que combinan insumos importados con capacidades locales, lo que reduce riesgos operativos y facilita el escalamiento productivo.

La limitada integración regional constituye una restricción relevante para la inserción productiva y la atracción de inversiones. Según JP Morgan (2025), el comercio intrarregional representa apenas alrededor del 15% de las exportaciones totales latinoamericanas, una proporción considerablemente inferior a la observada en economías asiáticas comparables (55%). Este bajo nivel de intercambio refleja mercados fragmentados, marcos normativos poco armonizados, deficiencias en la interoperabilidad logística y una menor densidad de proveedores regionales. En términos de inversión, estas condiciones reducen las economías de escala y dificultan la conformación de plataformas productivas regionales, especialmente en industrias donde la especialización se organiza por etapas del proceso productivo.

La logística es otra limitación. El desempeño regional en indicadores de logística y conectividad se ubica por debajo del de regiones con niveles de ingreso comparables (gráfico 5), reflejando brechas persistentes en infraestructura de transporte, puertos, facilitación aduanera y conectividad digital (OCDE, 2024). Estos déficits elevan el costo total de la inversión y, en sectores sensibles a tiempos de entrega o confiabilidad, pueden ser determinantes para elegir otro destino. A diferencia de inversiones orientadas a recursos naturales, donde la localización está “anclada” por geología, la inversión en manufacturas o servicios globales elige destinos con logística y regulación más predecibles.

Figura N°14. Desempeño Logístico ALC versus Regiones Emergentes, 2010–2022
(Índice de desempeño logístico, Banco Mundial)



Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia. Nota: Las regiones excluyen a los países de altos ingresos.

La transición verde abre una ventana de oportunidad significativa para América Latina y el Caribe. De acuerdo con ALIDE (2022), la región concentra más de la mitad de los depósitos globales de litio —principalmente en Bolivia, Argentina y Chile—, además de otros minerales críticos para la transición energética. Sin embargo, la producción de baterías de litio se encuentra altamente concentrada a nivel global, con China representando cerca de dos tercios de la oferta. Esta brecha entre dotación de recursos y capacidades industriales pone en

evidencia el potencial existente para que los países de la región impulsen el desarrollo de industrias asociadas, particularmente en la producción de baterías y otros componentes estratégicos, lo que requeriría inversiones significativas en tecnología, capital humano especializado y capacidades productivas. En esta línea, la perspectiva del BNDES recogida por ALIDE subraya que las oportunidades de una economía basada en tecnología dependen de fortalecer compañías locales, atraer inversión extranjera y consolidar ecosistemas de innovación, lo que permitiría agregar valor, elevar la complejidad de la producción y generar efectos positivos sobre otras industrias.

No obstante, la posibilidad de traducir esta ventaja en mayor valor agregado depende de la existencia de condiciones habilitantes adecuadas. Entre ellas destacan la disponibilidad de infraestructura física y energética, la eficiencia de los procesos de permisos, la previsibilidad de los marcos regulatorios y ambientales, y la capacidad institucional para acompañar proyectos de inversión complejos. Asimismo, resulta necesario articular inversiones a lo largo de toda la cadena de valor, tanto en etapas posteriores —como refinación y manufactura de componentes— como en actividades previas vinculadas a servicios tecnológicos, ingeniería, logística y gestión ambiental. En ausencia de una mayor integración regional y de sistemas logísticos competitivos, existe el riesgo de que la especialización productiva continúe concentrándose en eslabones primarios, limitando los efectos de aprendizaje, la generación de capacidades tecnológicas y los potenciales derrames hacia el resto de la economía.

Reconfiguración geopolítica y nueva geografía de la inversión

El vínculo creciente con China se inscribe en un contexto de competencia estratégica entre las principales potencias, lo que redefine incentivos y márgenes de maniobra para ALC. China se ha convertido en un socio comercial clave para América del Sur, al concentrar aproximadamente el 28% de sus exportaciones y una participación creciente en las importaciones. Además del intercambio comercial, se han intensificado inversiones en infraestructura, energía y logística, con efectos potencialmente positivos en la conectividad y la reducción de cuellos de botella. Sin embargo, el patrón de intercambio se mantiene concentrado en materias primas y, por tanto, las inversiones se focalizan en sectores extractivos o en infraestructura orientada a la exportación primaria, esto conlleva a una mayor dependencia y limitada diversificación productiva.

Según J.P. Morgan (2025), una desaceleración pronunciada de la economía china tendría repercusiones significativas sobre la región debido a la concentración de exportaciones primarias hacia ese destino.⁷ El impacto sobre la inversión operaría por un doble canal: menores expectativas de precios y demanda, junto con una mayor percepción de fragilidad externa. Al mismo tiempo, la presión ejercida por USA para redefinir alianzas y acotar la presencia de China en ciertos países introduce un componente adicional de incertidumbre, particularmente en sectores estratégicos como infraestructura portuaria, telecomunicaciones, energía y sistemas digitales.

El desafío no se reduce a optar por uno u otro socio comercial. La mitigación de vulnerabilidades requiere fortalecer marcos comunes para la inversión en sectores estratégicos, profundizar la transparencia y mejorar la capacidad estatal para negociar condiciones que promuevan transferencia tecnológica, generación de empleo y desarrollo de proveedores locales. Establecer un marco legal atractivo y predecible para la inversión en infraestructura crítica, energía y sistemas digitales puede contribuir a equilibrar el entorno competitivo y a alinear el capital externo con objetivos de desarrollo sostenido (OCDE, 2024). Asimismo, la coordinación regional

⁷ Una caída de 1 punto porcentual en el crecimiento de China reduce el crecimiento del PIB en países latinoamericanos altamente expuestos (como Chile y Perú) entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales.

resulta clave para evitar dinámicas de competencia fiscal excesiva entre países, que tienden a erosionar la base tributaria sin asegurar inversiones de mayor calidad.

Incentivos, políticas activas y necesidad de ejecución: de la atracción al aterrizaje de proyectos

La evidencia acumulada sugiere que atraer inversión requiere algo más que estabilidad macroeconómica y apertura comercial.⁸ ALC necesita estrategias que combinen integración regional, inversión en infraestructura, fortalecimiento institucional y políticas activas alineadas con objetivos productivos y tecnológicos. JP Morgan (2025) sostiene que una integración regional más profunda podría traducirse en mayores flujos de IED, aumentos de productividad y mejor posicionamiento global. Ese argumento es especialmente relevante en una etapa donde las empresas valoran mercados ampliados y capacidad de abastecimiento regional.

En los últimos años, distintos gobiernos han introducido incentivos dirigidos a sectores vinculados con la movilidad sostenible y las tecnologías verdes.⁹ La evidencia internacional sugiere que su efectividad depende de su inserción en una estrategia integral que incluya estabilidad normativa, infraestructura funcional, formación de capital humano y evaluaciones ex ante y ex post del costo-beneficio fiscal (OCDE, 2024). Cuando los incentivos se aplican de manera aislada, suelen atraer proyectos oportunistas o de corto plazo; en cambio, su articulación con una estrategia industrial amplia puede favorecer procesos de escalamiento, innovación y adopción tecnológica.

Brasil lanzó en junio de 2024 el programa de Movilidad Verde e Innovación (MOVER) con el objetivo de estimular inversiones en movilidad y energía ecológicas. El esquema contempla créditos fiscales significativos durante un período plurianual y combina beneficios comerciales con requisitos de inversión en I+D e innovación en la cadena automotriz. Este diseño refleja una tendencia más amplia en la política industrial, en la que el Estado vincula incentivos fiscales con compromisos verificables orientados a fortalecer capacidades productivas locales. Así, se busca avanzar simultáneamente en la industrialización y en la reducción de emisiones, en coherencia con metas de sostenibilidad.

A través del BNDES, el principal brazo financiero del Estado Brasileño encargado de implementar el "Plan de Producción", el cual se creó para fomentar lo que se ha llamado la neointustrialización¹⁰ y la transición ecológica en el país, hasta mayo de 2024, ya había invertido R\$300 billones (equivalentes a US\$57 mil millones), destinando R\$271 billones (unos US\$51 mil millones) a créditos, de los cuales R\$21 billones (unos US\$3.9 mil millones) son no reembolsables y R\$8 billones (unos US\$1.5 mil millones) para acciones de equity. Este plan se

⁸ La evidencia empírica muestra que la atracción de IED depende de múltiples factores más allá de la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial. Hernández (2021) encuentra que la estabilidad política y económica explica alrededor del 35% de la atracción de IED, mientras que la infraestructura y la disponibilidad de mano de obra calificada aportan conjuntamente cerca del 45%. En la misma línea, Castillo et al. (2020) estiman que la estabilidad macroeconómica representa aproximadamente el 40% de la influencia en los flujos de inversión hacia América Latina, mientras que el tamaño del mercado interno y la apertura comercial contribuyen en torno al 30%, lo que evidencia el peso de factores estructurales e institucionales complementarios.

⁹ La Unión Europea ha desplegado incentivos financieros y regulatorios para impulsar sectores vinculados a la movilidad sostenible y las tecnologías limpias, incluyendo subsidios, financiamiento público, capital de riesgo y marcos normativos orientados a acelerar la descarbonización y el desarrollo industrial verde. Iniciativas como *Cleantech for Europe* reflejan este enfoque, al evidenciar un aumento significativo de inversiones en tecnologías net-zero (con más de €11,000 millones en capital riesgo en 2023), así como la necesidad de complementar estos incentivos con políticas industriales, financiamiento adecuado y ecosistemas de innovación para facilitar el escalamiento de proyectos. Asimismo, la agenda regulatoria europea en sostenibilidad ha incorporado estándares y requisitos que orientan las decisiones de inversión hacia tecnologías limpias, consolidando un marco en el que los incentivos económicos se articulan con políticas regulatorias y de competitividad (BBVA, 2024; Deloitte, 2025).

¹⁰ Un modelo basado en un conjunto de normas y leyes que pretende revitalizar la competitividad industrial de los países para agregar valor a los productos, pero esencialmente para romper o reducir la dependencia de insumos o productos críticos del exterior. A diferencia de la re-industrialización que implica buscar la recuperación de las industrias que se perdieron.

estructuró en base a cuatro ejes principales: 1) Innovación y digitalización, con el objetivo de potenciar la competitividad y desarrollar nuevos sectores productivos; 2) Exportación, enfocado en incrementar las exportaciones de mayor valor agregado y mejorar la inserción internacional de la industria brasileña; 3) Verde, buscando la descarbonización de la industria para contribuir al combate del cambio climático y generar empleos de calidad; y 4) Productivo, orientado a aumentar la producción y reducir costos para mejorar la competitividad de la industria nacional.

México ha adoptado una estrategia activa para posicionarse como plataforma de relocalización manufacturera en sectores de alto valor exportador. En esa línea, ha implementado incentivos fiscales dirigidos a industrias como automóviles y autopartes, farmacéutica, equipos médicos, electrónica, aeroespacial y agroindustria, complementados con deducciones asociadas a la capacitación laboral. Asimismo, estableció exenciones temporales del impuesto corporativo en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para actividades estratégicas como semiconductores, dispositivos médicos, tecnologías de la información y agroindustria. Esta combinación de incentivos sectoriales y desarrollo logístico se ha visto reforzada con el lanzamiento del Plan México en 2025, una hoja de ruta integral que articula inversión pública y privada en infraestructura, energía e industria como pilares del crecimiento económico. El plan contempla un portafolio cercano a dos mil proyectos con inversiones estimadas en alrededor de US\$277 mil millones, lo que evidencia un esfuerzo por escalar la atracción de capital hacia sectores estratégicos.

En particular, el componente energético del Plan México refuerza las condiciones habilitantes para la inversión productiva, mediante estrategias orientadas a expandir la capacidad de generación, mejorar la cobertura eléctrica y avanzar en la transición energética. Entre sus metas se incluye alcanzar hasta un 45% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables hacia 2030 y añadir más de 22,000 MW al sistema mediante inversiones públicas y privadas. A ello se suma el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, que contempla proyectos de generación, transmisión y almacenamiento, junto con inversiones significativas en redes eléctricas e infraestructura energética.¹¹ Estas medidas se complementan con reformas institucionales orientadas a redefinir la gobernanza del sector energético y asegurar la participación del Estado en la provisión de electricidad.

La estrategia también incorpora instrumentos de banca de desarrollo orientados a innovación y escalamiento productivo. En febrero de 2026, Nacional Financiera y Bancomext presentaron la Impulsora de Innovación México, concebida como un instrumento del Plan México para acelerar proyectos estratégicos en innovación tecnológica e IA. El mecanismo prevé esquemas de coinversión de capital, con inversiones de hasta US\$49 millones por parte de Nafin y Bancomext y otros US\$49 millones de la Secretaría de Economía, además del relanzamiento del Fondo de Fondos con una capitalización de US\$232 millones para fortalecer el financiamiento de proyectos y empresas de alto valor agregado. Este componente será desarrollado con mayor detalle en el capítulo 3, dedicado al impulso a la innovación.

Colombia ofrece deducciones fiscales para inversiones en turismo, energías no convencionales y eficiencia energética, incluyendo reducciones del impuesto a la renta corporativa para proyectos turísticos, beneficios tributarios de largo plazo para energías alternativas y exenciones de IVA para bienes y servicios vinculados a renovables. También se han discutido medidas para permitir la importación de componentes automotrices con arancel cero en iniciativas orientadas a vehículos de energía verde. Este conjunto de instrumentos sugiere una orientación creciente hacia políticas sectoriales alineadas con la sostenibilidad y la transición

¹¹ En seguimiento a estas medidas a fines del 2025 se lanzó el Plan de Expansión 2025–2030, para fortalecer la confiabilidad, seguridad y respaldo del sistema eléctrico mexicano mediante una inversión superior a US\$4,300 millones destinada principalmente a proyectos de generación y energías limpias.

energética. Estas medidas podrían contribuir a diversificar la base productiva y a fortalecer la atracción de inversiones en actividades sostenibles.

Chile busca consolidarse como plataforma abierta y diversificada para la atracción de inversiones vinculadas tanto a comercio como a transición energética y servicios globales. En ese contexto, combina una extensa red de acuerdos comerciales preferenciales con regímenes de zonas francas en regiones estratégicas que eximen a los inversionistas de ciertos tributos aduaneros e impuestos. Asimismo, promueve el desarrollo de hidrógeno verde con el objetivo de posicionarse como exportador relevante en las próximas décadas, y ha captado inversiones asociadas a procesos de relocalización en servicios de tecnologías de la información y financieros. Este conjunto de iniciativas refleja una estrategia orientada a articular apertura comercial, incentivos territoriales y apuesta tecnológica de largo plazo.

El principal desafío para ALC no consiste únicamente en atraer inversión, sino en asegurar una implementación efectiva, que aumente la productividad, genere encadenamientos productivos y empleo de calidad. El análisis de estas medidas aconseja su debida evaluación, los incentivos fiscales pueden catalizar proyectos, pero no reemplazan condiciones habilitantes como seguridad jurídica, acceso estable a energía, disponibilidad de talento, infraestructura logística y coordinación público-privada. La experiencia reciente, particularmente durante la pandemia, mostró que la ejecución puede convertirse en el principal problema cuando los sistemas de permisos son lentos, las licencias enfrentan procesos de judicialización o la coordinación intergubernamental resulta insuficiente.

La transición verde y la digitalización acentúan esa necesidad de ejecución. Sectores como energía renovable, electromovilidad, manufactura de la salud, bioeconomía, economía circular, servicios digitales y turismo sostenible concentran una parte creciente del dinamismo inversor global y definen nuevas fronteras de competitividad (CEPAL, 2025a; CAF, 2023a). ALC participa en esas agendas de manera desigual. La limitación no proviene de falta de oportunidades; proviene de dificultades para convertir ventajas comparativas en proyectos escalables, con gobernanza clara y financiamiento estructurado.

La experiencia de países que transformaron su estructura productiva en pocas décadas —como Corea del Sur o China— suele citarse para subrayar que el atraso no es destino. La comparación, sin embargo, también advierte que la velocidad del cambio tecnológico actual y la competencia global reducen márgenes para una secuencia lenta de reformas. Los instrumentos convencionales, por sí solos, no garantizan resultados similares en el crecimiento, por lo que se considera necesario combinar políticas macro con instrumentos selectivos, coordinación de inversiones y construcción de capacidades.

Por esa razón, como lo señalan distintas organizaciones internacionales (CAF, 2023a; OCDE, 2024), la política pública enfrenta el urgente desafío de acortar tiempos, reducir costos y mitigar riesgos mediante instrumentos financieros, regulatorios e institucionales adecuados, con prioridades claras y mecanismos de gobernanza que alineen actores. La articulación entre política de atracción de inversiones, estrategia de desarrollo productivo e integración regional aparece como condición para transformar las oportunidades en carteras de inversión concretas, financiadas y replicables. El fortalecimiento institucional y la mejora de logística no son “reformas de soporte”; operan como palancas de competitividad para sectores que hoy definen el nuevo ciclo de inversión global.

El debate sobre condiciones habilitantes no se agota en incentivos fiscales o en acuerdos comerciales; incluye la capacidad de los Estados para estructurar proyectos, proveer información confiable, reducir asimetrías, y coordinar inversiones complementarias.

2.3. Sectores con alto potencial de inversión para ALC

Las oportunidades de inversión en ALC no surgirán de manera aislada ni responden exclusivamente a coyunturas políticas o ciclos financieros. En gran medida, se explican por transformaciones estructurales de la economía global que están redefiniendo la localización de la producción, la demanda de recursos estratégicos, el comercio de servicios y la configuración energética y digital (Rodrik, 2005; UNCTAD, 2023; CEPR, 2024). ALC destaca por una combinación singular de atributos, entre ellos su proximidad a grandes mercados, la abundancia de recursos naturales críticos, una matriz energética más limpia que el promedio mundial y una base de capital humano que, pese a sus brechas, ha comenzado a integrarse de forma creciente a la economía digital.

No obstante, identificar sectores con alto potencial de inversión requiere ir más allá de descripciones generales. Supone evaluar, qué actividades reúnen simultáneamente tres condiciones: escala suficiente para movilizar flujos relevantes de capital, capacidad de elevar la productividad agregada y posibilidades reales de insertarse en cadenas de valor globales en condiciones competitivas. Desde esta perspectiva, análisis recientes convergen en un conjunto acotado de sectores que, bajo determinados supuestos de política y ejecución, podrían modificar de manera significativa la trayectoria de crecimiento de ALC en las próximas dos décadas.

Un ejercicio de estimación sectorial señala que siete sectores estratégicos podrían generar hacia 2040 ingresos adicionales anuales del orden de entre US\$590 mil millones y US\$1.2 billones, siempre que se logre movilizar inversión acumulada entre US\$1.7 a US\$2.8 billones en ese horizonte temporal (Child et al., 2025). La magnitud de estas cifras significa un incremento sustantivo del producto regional y a un volumen de inversión comparable con decisiones de política macroeconómica de largo plazo, no con programas sectoriales marginales. También este mismo análisis de Child et al (2025) subraya que el impacto económico de esta inversión depende críticamente de su asignación y de la capacidad de los países de ALC para convertir capital en productividad, evitando obstáculos regulatorios, déficits de infraestructura y fallas de coordinación público-privada.

Sobre esta base, es posible identificar los siguientes sectores estratégicos:

Manufactura de nueva generación y reconfiguración de cadenas de valor

Durante varias décadas, el análisis sobre la inserción productiva de ALC estuvo marcado por la pérdida progresiva de capacidades manufactureras frente a Asia, asociada a procesos de liberalización comercial, especialización en exportaciones primarias y dificultades para competir en costos y escala. Sin embargo, dinámicas más recientes que muestran cómo la organización de la producción —sobre todo a partir de la reconfiguración de las cadenas globales de valor— está abriendo espacios para actividades manufactureras de mayor sofisticación tecnológica. Esta reconfiguración no implica una reversión total de la globalización, sino una reubicación estratégica de eslabones productivos que privilegian la resiliencia, la proximidad a grandes mercados, la reducción de riesgos logísticos y la capacidad de integrar innovación con producción física. Bajo ese esquema, la manufactura de nueva generación, como componentes de automóviles avanzados, dispositivos médicos, semiconductores y baterías para electromovilidad, entre otras, se posicionan como vectores de crecimiento industrial con alto contenido tecnológico y asociadas a dinámicas de inversión internacional.

En contraste con los esquemas tradicionales de manufactura intensiva en mano de obra de bajo costo, estas nuevas actividades requieren procesos productivos complejos, certificaciones globales, integración de proveedores especializados y la adopción de tecnologías avanzadas. La

evidencia disponible muestra que este tipo de manufacturas no solo pueden contribuir a elevar la productividad agregada de las economías latinoamericanas, sino también a promover inserciones más sostenibles y diversificadas dentro de las cadenas globales de valor, reduciendo vulnerabilidades asociadas a la concentración en pocos mercados o productos específicos.

Automotriz y autopartes: un caso de escala y complejidad creciente. Esta industria constituye, a escala regional uno de los casos más consistentes de manufactura avanzada con inserción global. México ha consolidado una red de producción bastante integrada con el mercado de USA, apoyada en acuerdos comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y en su posición geográfica estratégica. En 2023-2024, el país exportó aproximadamente US\$95,000 millones en vehículos, de los cuales más del 80% se destinó a USA, lo que evidencia la magnitud y la densidad de los encadenamientos productivos desarrollados.

Este dinamismo no se limita a ensamblaje de vehículos completos, incluye también sistemas de transmisión, módulos eléctricos y otros subensambles. Es un núcleo clave de la competitividad manufacturera de México. La presencia de proveedores globales, combinada con marcos regulatorios relativamente estables y una infraestructura consolidada, ha permitido que se convierta en un hub automotriz para Norteamérica.

Brasil, por su parte, destaca como el mayor mercado automotriz de Sudamérica, con una base industrial que incluye tanto producción nacional de vehículos y componentes como la instalación de plantas de fabricantes globales. Grupos como Stellantis, Volkswagen, Toyota y BYD han desplegado inversiones significativas para fortalecer capacidades locales, tanto en vehículos tradicionales como en segmentos asociados a electromovilidad y tecnologías de propulsión avanzada. La demanda interna de vehículos eléctricos está creciendo rápidamente en Brasil y otros países de ALC, con aumentos en importaciones y ventas que reflejan una transición hacia nuevas tecnologías de movilidad que, a su vez, impulsan la necesidad de manufacturas más sofisticadas.

A pesar de hechos recientes, como las tensiones arancelarias y el desabastecimiento de semiconductores que afectaron temporalmente la producción en algunas plantas en México, la industria automotriz regional mantiene su relevancia estructural. Por ejemplo, la planta de Honda en Guanajuato experimentó interrupciones derivadas de la escasez global de semiconductores, lo que pone de relieve la importancia de diversificar y fortalecer las fuentes de insumos tecnológicos en las cadenas productivas regionales. Estas contingencias evidencian la necesidad de políticas orientadas a desarrollar capacidades locales en la producción de insumos tecnológicos, incluidos semiconductores y módulos electrónicos, como parte de una estrategia de manufactura de nueva generación.

Aparatos médicos: diversificación exportadora y tecnología de precisión. Otro sector que ilustra la transición de ALC hacia manufacturas de mayor contenido tecnológico y proyección global es el de los dispositivos médicos y equipos de precisión. Costa Rica es un punto mundial importante de manufactura de equipo médico. Sede de más de 90 empresas multinacionales de tecnología médica (MedTech), es el segundo mayor exportador de equipo médico de ALC y el octavo mayor del mundo. Igualmente, República Dominicana ha registrado en los últimos años un crecimiento significativo en este ámbito, exportando tecnología médica a 132 países, incluidos mercados exigentes de Europa, América y Asia. Este desempeño se sustenta en la producción de aparatos auditivos, suturas quirúrgicas y equipos de diálisis con estándares internacionales de calidad (Espino, 2025).

La exportación global de dispositivos médicos constituye un ejemplo de inserción industrial donde la calidad, la certificación y la innovación son determinantes para captar participación en

mercados exigentes, lo que a su vez fomenta encadenamientos productivos locales, empleo de alta calificación y dinamización de proveedores especializados.

Semiconductores: capacidad emergente y esfuerzos por diversificación. Esta industria es, sin duda, uno de los segmentos de manufactura avanzada más estratégicos a nivel global, debido a su papel central en la cadena de valor de tecnologías digitales, automotrices, de comunicaciones y de sistemas inteligentes. Si bien la producción de semiconductores de última generación sigue concentrada en Asia y USA, varios países latinoamericanos han comenzado a explorar su participación en eslabones específicos de la cadena, como diseño, empaquetado y prueba, así como en la creación de capacidades técnicas que pueden atraer inversión y diversificar su base manufacturera.

Costa Rica ha emergido como uno de los actores regionales con gran potencial en este ámbito, al consolidar un ecosistema de manufactura avanzada que reúne a más de 450 empresas multinacionales instaladas en el país,¹² varias de ellas vinculadas directa o indirectamente a la cadena de valor de semiconductores y tecnologías asociadas, particularmente en zonas francas, que les permite aprovechar incentivos fiscales, una fuerza laboral calificada y una ubicación geográfica cercana al mercado de USA. En 2024, Costa Rica lanzó una Hoja de Ruta Nacional de Semiconductores para promover asociaciones estratégicas, simplificar procedimientos administrativos y fortalecer la protección de la propiedad intelectual, a fin de hacer más atractivo el país para inversiones en este sector. Además, existen iniciativas para desarrollar centros de excelencia con equipamiento y programas de capacitación técnica con empresas e instituciones educativas, para formar talento especializado para la industria tecnológica.

Brasil también destaca en términos de instalación de capacidades tecnológicas específicas para semiconductores, y con un rol más prominente en actividades relacionadas con la provisión de insumos electrónicos y componentes para manufactura avanzada. Un análisis reciente señala que Brasil y Costa Rica son de los pocos países en ALC con inversiones significativas en la cadena de semiconductores, en un contexto mundial donde China, Taiwán y Corea del Sur dominan la producción física de chips, pero donde la diversificación de manufactura en ALC es un objetivo declarado de políticas comerciales y de innovación.

Baterías y electromovilidad: una manufactura vinculada a la transición energética. La transición energética y la expansión de la electromovilidad están impulsando una demanda creciente de manufacturas vinculadas a baterías, sistemas de almacenamiento y componentes eléctricos. En ALC las importaciones de vehículos eléctricos registran tasas de crecimiento elevadas: Brasil alcanzó US\$1,593 millones (+108% interanual) y México US\$1,298 millones (+80.5%), lo que evidencia una demanda regional capaz de sustentar el desarrollo de capacidades productivas asociadas a estos sistemas.

Energía y vectores de transición: más allá de la generación eléctrica

La energía ocupa un lugar central en la discusión sobre inversión en ALC, no solo por su peso directo en la formación de capital, sino por su carácter habilitante para otros sectores. La región cuenta con una ventaja estructural relevante: alrededor del 65% de su generación eléctrica proviene de fuentes renovables, proporción que duplica el promedio mundial y que la posiciona favorablemente en un contexto de creciente exigencia climática y regulatoria por parte de inversionistas y mercados finales (Connectamericas, 2025).

Esta base renovable ha impulsado una expansión significativa de la inversión en generación solar, eólica e hidroeléctrica durante la última década (aumentó casi un 25%, alcanzando los

¹² <https://investincr.com/wp-content/uploads/2024/06/Costa-Rica-Semiconductores-Hoja-de-Ruta.pdf>

US\$70 mil millones en 2025). Sin embargo, el verdadero salto en términos de potencial de inversión y encadenamientos productivos se encuentra en el desarrollo de vectores energéticos que permitan transformar energía limpia en productos comerciables, como el hidrógeno verde y sus derivados. Bajo el concepto de Power-to-X,^[2] estos desarrollos buscan aprovechar recursos renovables abundantes para producir combustibles sintéticos, amoníaco o insumos industriales con baja huella de carbono, tanto para el consumo interno como para exportación.

El análisis sectorial identifica explícitamente al Power-to-X como uno de los sectores estratégicos con potencial transformador para ALC (McKinsey, 2025). No obstante, el atractivo de estos proyectos está lejos de ser automático. Su viabilidad depende de múltiples factores: acceso a grandes volúmenes de energía renovable a precios competitivos, infraestructura de transmisión suficiente, marcos contractuales bancables,¹³ permisos ambientales claros y una logística portuaria capaz de manejar exportaciones a gran escala.

La experiencia reciente muestra que muchos proyectos energéticos enfrentan retrasos significativos no por falta de interés privado, sino por dificultades en permisos, en expansión de redes y en coordinación institucional. Desde una perspectiva proinversión, el desafío no es diseñar incentivos genéricos, sino reducir las restricciones en aquellos puntos que afectan directamente la estructura de riesgos de los proyectos. En ausencia de esa previsibilidad, incluso las ventajas comparativas pueden diluirse frente a otras regiones que, aun con menor dotación de recursos, ofrecen procesos más ágiles y marcos regulatorios estables.

Existe, además, un riesgo de política que merece atención: la tentación de limitar la estrategia energética a la exportación de energía o de derivados sin desarrollar capacidades locales. Si bien estos proyectos pueden generar ingresos y empleo en la fase de construcción, su impacto estructural será limitado si no se integran con proveedores locales, servicios de ingeniería, operación y mantenimiento, y procesos de innovación. La transición energética ofrece una oportunidad para crear nuevos clusters industriales, pero solo si se diseñan políticas que articulen inversión, formación de capacidades y desarrollo productivo.

Infraestructura digital, centros de datos y servicios intensivos en conocimiento

La economía digital representa uno de los frentes más dinámicos de inversión global y una oportunidad particular para ALC, siempre que se logre superar la brecha entre infraestructura y contenido productivo. En los últimos años, la región ha atraído un volumen creciente de IED vinculada al ámbito digital. La evidencia muestra que, entre 2005 y 2024, los anuncios de proyectos¹⁴ en estos sectores aumentaron de manera sostenida, al tiempo que la participación de las fusiones y adquisiciones transfronterizas digitales en el total regional se elevó de 11% a 26%, con un máximo de 28% en 2022 (CEPAL, 2025b). Sin embargo, su composición revela desafíos importantes. De acuerdo con un análisis reciente, alrededor del 66% de la inversión digital en ALC se concentra en infraestructura, mientras que solo el 14% se dirige a actividades de producción. A escala mundial, en cambio, la proporción de inversión en producción alcanza el 40%, lo que sugiere que la región participa más como plataforma física que como generadora de valor tecnológico (CEPAL, 2025b).

¹³ Son aquellos que aseguran previsibilidad en los ingresos y una asignación adecuada de riesgos, facilitando el acceso a financiamiento de largo plazo. Esto suele incluir contratos de largo plazo con contrapartes con adecuada calidad crediticia, estabilidad regulatoria y mecanismos efectivos de resolución de controversias (Banco Mundial, 2017).

¹⁴ Corresponde a la comunicación pública de una inversión planificada por parte de una empresa, generalmente asociada a proyectos *greenfield*, es decir, a la creación de nuevas operaciones productivas desde cero (incluyendo la construcción de instalaciones, la instalación de capacidades productivas y la generación de empleo) en un país receptor. Estos anuncios constituyen un indicador adelantado de la IED, aunque su materialización efectiva puede diferir del monto inicialmente anunciado.

Este patrón no es necesariamente negativo en una etapa inicial. La infraestructura digital – redes, centros de datos, servicios cloud, TIC– es una condición necesaria para el desarrollo de servicios avanzados. Sin embargo, si la inversión se queda en ese nivel, el impacto sobre productividad, empleo calificado y exportaciones de servicios sería limitado. La clave está en convertir esa infraestructura en una plataforma que habilite el crecimiento de servicios digitales locales, desde desarrollo de software y analítica hasta ciberseguridad, servicios financieros digitales y soluciones empresariales.

Las cifras de inversión permiten dimensionar la escala y la concentración geográfica de esta tendencia. Entre 2005 y 2024, la inversión originada en ALC en sectores vinculados a tecnologías digitales alcanzó unos US\$29,473 millones, esto es, el 12% del monto anunciado en ese período. Más de la mitad de esta inversión se concentró en México (55%), seguido por Brasil (11%), Argentina (8%), Colombia (7%) y Chile (6%), lo que refleja tanto la heterogeneidad regional como la existencia de polos específicos de atracción (CEPAL_2025b).

Un componente central de esta dinámica es el desarrollo de centros de datos. Los anuncios de inversión en procesamiento y alojamiento de datos muestran una aceleración notable: de apenas 36 anuncios hasta 2010 se pasó a 195 acumulados en 2019, y posteriormente se sumaron 165 anuncios adicionales, alcanzando un total de 360. Este crecimiento refleja la expansión de la economía digital global y la búsqueda de ubicaciones con energía confiable, conectividad y estabilidad relativa (CEPAL, 2025b). Sin embargo, la expansión de esta infraestructura también ha comenzado a generar tensiones en algunos territorios, particularmente por su elevada intensidad en el uso de recursos críticos. Los centros de datos requieren un suministro eléctrico continuo y de gran escala, lo que puede presionar sistemas energéticos locales y generar competencia con otros usos productivos o residenciales, especialmente en contextos donde existen restricciones de transmisión o capacidad instalada. A ello se suma el uso intensivo de agua en ciertos sistemas de enfriamiento, lo que plantea desafíos adicionales en zonas con estrés hídrico o eventos recurrentes de sequía. Estos factores han llevado a cuestionar no solo la sostenibilidad ambiental de estos proyectos, sino también su legitimidad social, en la medida en que pueden concentrar beneficios económicos limitados frente a costos locales significativos si no se diseñan mecanismos adecuados de gestión y regulación (ALIDE, 2026).

La competitividad energética vuelve a jugar un rol decisivo en este segmento. En un análisis comparativo sobre centros de datos y energía, se señala que algunos países de la región presentan costos eléctricos significativamente más bajos que mercados desarrollados. El caso de Chile, con costos en torno a 50 dólares por MWh frente a valores superiores a 100 dólares por MWh en USA, ilustra cómo la combinación de energía renovable y costos competitivos puede inclinar decisiones de localización de inversión (IOA, 2025).

Al mismo tiempo, el mismo análisis advierte sobre los desafíos asociados a capacidad de transmisión, demoras regulatorias y uso de agua para enfriamiento, factores que, de no ser abordados, pueden erosionar esa ventaja inicial (IOA, 2025). Más allá de la infraestructura, ALC ha comenzado a mostrar dinamismo en la exportación de servicios digitales. Se proyecta que las exportaciones de servicios de ALC crecerán un 27%, con un impulso particular de los servicios modernos provistos digitalmente, lo que abre una vía complementaria a las exportaciones de bienes tradicionales (Connectamericas, 2025). Estos servicios tienen la ventaja de escalar con menor dependencia de infraestructura física pesada, siempre que exista talento adecuado y marcos regulatorios que faciliten la contratación, protección de datos y tributación clara.

Agroindustria, alimentos y bioeconomía: productividad, no solo volumen

La seguridad alimentaria, la transición climática y la reconfiguración de las cadenas globales han devuelto centralidad estratégica a la agroindustria en ALC. La región continúa siendo el principal exportador neto de alimentos, con exportaciones cercanas a US\$349,000 millones y proyecciones de crecimiento del orden del 11% (ConnectAmericas, 2025). Sin embargo, desde una perspectiva de desarrollo productivo, el desafío estructural no radica en la capacidad de producir alimentos, sino en la limitada captura de valor agregado a lo largo de las cadenas agroalimentarias.

El reto estratégico para ALC consiste en avanzar desde una inserción internacional basada principalmente en volumen hacia otra sustentada en sofisticación productiva, diferenciación y conocimiento aplicado dentro de los sistemas agroalimentarios.

Bajo esta lógica, la bioeconomía aparece como un campo particularmente promisorio para diversificar la estructura productiva regional. ALC concentra cerca del 50% de la biodiversidad del planeta y alberga varios de los países más biodiversos del mundo, lo que constituye una base excepcional para el desarrollo de nuevas aplicaciones productivas (FAO, 2022; Bullor et al., 2023). A ello se suma una trayectoria relevante de acumulación científica en biotecnología agrícola y microbiología aplicada. La región ha sostenido, durante décadas, redes de investigación y cooperación científica en torno al uso de microorganismos, la fijación biológica de nitrógeno y el desarrollo de soluciones para mejorar la productividad agrícola, lo que ha permitido construir capacidades que hoy adquieren mayor valor en un escenario de transición hacia sistemas productivos más sostenibles (Castro-Sowinski, 2023). Estas capacidades abren oportunidades concretas para el desarrollo de bioinsumos, biotecnología agrícola, ingredientes funcionales, biomateriales y soluciones basadas en la naturaleza.

Entre estos segmentos emergentes, los bioinsumos destacan como uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento. Su dinamismo reciente se vincula tanto a la expansión de la demanda global por soluciones más sostenibles como a restricciones crecientes en el uso de insumos químicos tradicionales. En América Latina, el mercado de bioinsumos ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, con tasas cercanas al 15% anual, en contraste con la madurez de otros segmentos del mercado de insumos agrícolas (Bullor et al., 2023). Este comportamiento se explica, en parte, por la presión económica derivada de la elevada dependencia de agroquímicos importados y por la necesidad de reducir costos y riesgos asociados a su uso intensivo. Al mismo tiempo, la región ha comenzado a consolidar un tejido empresarial en torno a estos productos, particularmente en países como Brasil y Argentina, donde su adopción se ha expandido de manera significativa en cultivos extensivos.

La evidencia reciente también sugiere que este dinamismo se está trasladando hacia el ámbito de la inversión. El crecimiento del financiamiento en biotecnología agrícola y soluciones basadas en insumos biológicos ha sido notable en los últimos años, acompañado por un aumento en la adopción por parte de productores y por el interés de grandes empresas del sector. En algunos mercados, más de la mitad de los agricultores ya utilizan bioinsumos en alguna etapa del proceso productivo, lo que refleja un cambio gradual en las prácticas agrícolas y en la estructura de la demanda (Marston, 2025).

Los bioinsumos —productos de origen vegetal, animal o microbiano que mejoran la productividad, la calidad o la sanidad de los cultivos— incluyen biofertilizantes, bioplaguicidas, bioestimulantes y microorganismos que fortalecen la salud del suelo y la eficiencia en el uso de nutrientes. Su relevancia no radica únicamente en su capacidad de sustituir parcialmente fertilizantes y pesticidas sintéticos, sino en su potencial para articular biodiversidad, conocimiento científico y desarrollo productivo. En ese sentido, representan una vía concreta

para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más resilientes, con menor impacto ambiental y mayor capacidad de generación de valor agregado a lo largo de las cadenas productivas.

Cuadro N°3. Oportunidades Emergentes de Inversión en la Bioeconomía Agroalimentaria

Segmento	Oportunidad de inversión	Potencial para ALC
Bioinsumos agrícolas	Producción de biofertilizantes, biopesticidas, microorganismos agrícolas y soluciones biológicas para la sanidad vegetal	Sustitución de insumos importados, expansión de industrias biotecnológicas regionales
Superalimentos e ingredientes funcionales	Procesamiento de alimentos con alto valor nutricional, nutraceuticos, suplementos alimentarios	Aprovechamiento de biodiversidad regional y posicionamiento en nichos premium
Biotecnología agrícola	Mejoramiento genético, microbiología del suelo, agricultura de precisión	Incremento de productividad y adaptación climática
Soluciones basadas en la naturaleza	Restauración de suelos, agroforestería, agricultura regenerativa	Reducción de riesgos climáticos y acceso a financiamiento climático
Biomateriales y bioenergía	Bioplásticos, bioenergía, aprovechamiento de residuos agrícolas	Diversificación industrial y economía circular

En paralelo a estas transformaciones tecnológicas, ALC presenta oportunidades crecientes vinculadas a la valorización comercial de productos agrícolas diferenciados, frecuentemente agrupados bajo la categoría de superalimentos. Productos como la quinua, el cacao, el açái, la chíá o diversas variedades de berries andinos han tenido un aumento sostenido de la demanda internacional debido a sus propiedades nutricionales y su posicionamiento en mercados asociados a dietas saludables y alimentos funcionales. Sin embargo, una parte significativa de estas exportaciones continúa realizándose en estado primario, lo que limita la captura de valor dentro de la región. La oportunidad de inversión reside en avanzar hacia etapas de mayor procesamiento —como ingredientes funcionales, alimentos nutraceuticos, suplementos alimentarios o productos con denominación de origen— que permitan transformar biodiversidad y conocimiento científico en productos de mayor valor agregado.

El desarrollo de estos segmentos también se vincula con la expansión de modelos de producción agrícola positivos para la naturaleza, que buscan integrar productividad, conservación de biodiversidad y resiliencia climática. Diversos análisis señalan que la agrobiodiversidad contribuye con unos US\$150,000 millones anuales a la productividad agrícola global, mientras que las inversiones en restauración de ecosistemas pueden generar retornos de entre US\$7 y US\$30 por dólar invertido (FIDA, 2025).

Hidrocarburos y gas: una transición gestionada

La transición energética en ALC se desarrolla sobre una matriz que continúa mostrando una dependencia significativa de los hidrocarburos, en particular del petróleo y gas natural. Aunque la expansión de las energías renovables no convencionales (ERNCC) ha sido acelerada en los últimos años, la estructura energética regional aún refleja el peso de los combustibles fósiles en sectores clave como el transporte, la industria y la generación eléctrica de respaldo. Según OBELA (2024), en 2022 el petróleo representaba alrededor del 40% del consumo energético

regional, mientras que el gas natural aportaba el 23%, lo que evidencia que la transición se produce de manera gradual y heterogénea entre países y subsectores.

Los hidrocarburos continúan siendo relevantes tanto para la seguridad energética como para la atracción de inversión. El análisis sectorial de McKinsey (2025) estima que, hacia 2040, ALC podría generar ingresos adicionales anuales cercanos a US\$105,000 millones en petróleo y gas, siempre que se materialicen inversiones acumuladas del orden de US\$785,000 millones en exploración, producción, transporte y procesamiento. Estos montos explican por qué, incluso en escenarios de transición energética ambiciosa, el sector sigue figurando entre los prioritarios para la región, particularmente en países con dotaciones significativas de recursos y capacidades instaladas.

La discusión proinversión en hidrocarburos y gas se ha desplazado hacia un enfoque más pragmático, orientado a la gestión de rentas, riesgos ambientales y compatibilidad con los compromisos climáticos. OLADE y CAF (2025) destacan que el gas natural puede desempeñar un papel relevante como combustible de transición, especialmente como respaldo de sistemas eléctricos con alta participación de energías renovables variables. Aunque presenta ventajas relativas en términos de emisiones directas frente a otros combustibles fósiles, su contribución climática depende de manera crítica del control de las emisiones de metano a lo largo de toda la cadena de valor.

El principal desafío ambiental del gas en ALC se concentra en las emisiones fugitivas¹⁵ y ventiladas¹⁶ de metano. Según OLADE y CAF (2025), ALC produjo en 2023 alrededor de 197.6 billones de metros cúbicos de gas natural, concentrados principalmente en Argentina, México, Venezuela, Trinidad y Tobago y Brasil, lo que refleja la magnitud del sector y refuerza la necesidad de estrategias de mitigación acordes con su peso en la matriz energética regional. En esa línea, la certificación de gas natural de bajas emisiones (GNBE) surge como un instrumento relevante para alinear la producción regional con los estándares internacionales emergentes.

Para avanzar hacia trayectorias de reducción progresiva de emisiones de metano y CO₂ hasta 2050 se requeriría de inversiones adicionales acumuladas cercanas a US\$53,000 millones, concentradas casi en su totalidad en la reducción de emisiones de metano en el segmento upstream. Este esfuerzo se apoya en una infraestructura gasífera de escala regional, que incluye 89 gasoductos operativos, 22 terminales de regasificación en diez países y exportaciones de 15.8 billones de metros cúbicos de GNL desde Perú y Trinidad y Tobago en 2023, lo que confirma la inserción de ALC en los mercados energéticos globales (OLADE, 20205; y CAF, 2025).

No obstante, la transición energética plantea riesgos relevantes para el sector. La expansión desordenada de proyectos de hidrocarburos puede desplazar inversiones en energías limpias o generar activos varados en escenarios de descarbonización acelerada. Este dilema se manifiesta de manera distinta entre países. Colombia muestra tensiones entre seguridad energética y transición. Según análisis recientes, el país enfrenta una caída en la producción de gas natural y un riesgo creciente de agotamiento de reservas en el corto y mediano plazo, en un contexto de debates regulatorios y políticos que habría introducido incertidumbre sobre la exploración futura (Bloomberg, 2025).

¹⁵ Las emisiones “fugitivas” de metano se refieren a las liberaciones no intencionadas de gas que ocurren a lo largo de la cadena de producción, procesamiento y transporte, por ejemplo, a través de fugas en válvulas, tuberías o equipos.

¹⁶ Las emisiones “ventiladas” corresponden a liberaciones intencionales de gas a la atmósfera, generalmente por razones operativas, como el alivio de presión o la eliminación de gas no aprovechado. En conjunto, ambas representan pérdidas de gas natural que no se utilizan productivamente y que contribuyen de manera significativa al cambio climático, dado el alto potencial de calentamiento del metano.

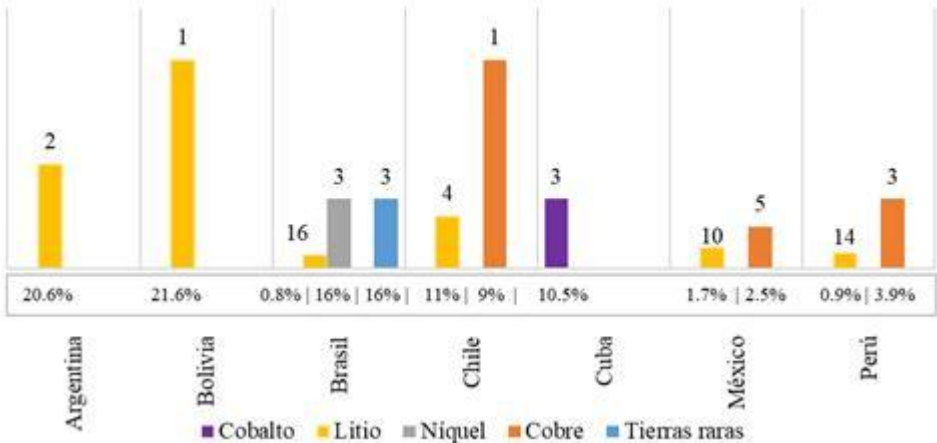
En otros países de ALC, el enfoque ha sido avanzar hacia un equilibrio entre la explotación de hidrocarburos y la transición energética. Argentina, por ejemplo, combina el desarrollo de recursos no convencionales¹⁷ en Vaca Muerta con una expansión acelerada de las energías renovables, utilizando el gas como respaldo del sistema eléctrico y fuente de exportaciones para generar divisas. Brasil, por su parte, integra el gas natural dentro de una matriz diversificada que incluye hidroeléctrica, eólica y solar, apoyándose en su capacidad industrial y en marcos regulatorios que buscan compatibilizar inversión energética y objetivos climáticos de largo plazo.

Desde el punto de vista de la política económica, la cuestión central no es si los hidrocarburos deben desaparecer de manera inmediata de la matriz regional, sino cómo gestionar sus rentas e inversiones para que contribuyan a una transformación estructural más amplia. La experiencia internacional sugiere que los ingresos derivados del petróleo y el gas pueden desempeñar un papel relevante en el financiamiento de infraestructura, capital humano e innovación, siempre que existan mecanismos adecuados de gobernanza fiscal, transparencia y planificación de largo plazo. En ausencia de estos elementos, el riesgo es que el sector refuerce patrones de dependencia y volatilidad, limitando su contribución al desarrollo productivo.

Minerales críticos: oportunidad estratégica con exigencias institucionales

El aumento sostenido de la demanda global de minerales críticos vinculados a la transición energética y la transformación digital ha reposicionado a la región como un proveedor estratégico a escala internacional. Minerales como el litio, el cobre, el níquel, el grafito y las tierras raras son indispensables para la fabricación de vehículos eléctricos, baterías, sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura eléctrica y tecnologías digitales avanzadas. ALC concentra una proporción significativa de las reservas globales de varios de estos insumos: Chile, Perú y México destacan en cobre; Argentina, Chile y Bolivia concentran más del 50% de las reservas mundiales de litio; y Brasil ocupa posiciones relevantes en níquel, grafito y tierras raras (Gráfico N°15), lo que otorga a la región un peso estructural en las cadenas globales asociadas a la descarbonización y la electrificación (JP Morgan, 2025; Rivas, 2025).

Figura N°15. ALC: Reservas Globales de Minerales Críticos: Ranking y Participación (%)



Fuente: USGS y EIU. Elaboración propia.

Notas: Las cifras se refieren a reservas probadas de minerales críticos; para el litio, la clasificación utiliza estimaciones de reservas totales.

¹⁷ La clasificación de hidrocarburos como convencionales o no convencionales no depende del tipo (petróleo o gas), sino de las características del yacimiento. En formaciones no convencionales, como Vaca Muerta, los hidrocarburos se encuentran en rocas de baja permeabilidad y requieren técnicas como la fractura hidráulica y la perforación horizontal para su extracción.

Sin embargo, la evidencia disponible muestra una brecha persistente entre la dotación de recursos y la capacidad efectiva de capturar valor económico. ALC participa de manera significativa en las reservas globales de minerales críticos, pero su peso relativo en la producción, el procesamiento y las rentas mineras es inferior al de otras regiones. ALC presenta un desempeño menor en términos de procesamiento y refinación, lo que se traduce en una alta concentración de exportaciones en productos sin procesar o con procesamiento básico. En minerales críticos, el 62% de las exportaciones de ALC corresponden a productos primarios, limitando el desarrollo de encadenamientos productivos y la generación de capacidades industriales asociadas (Salazar-Castellanos, 2025; Rivas, 2025).

Los análisis de CAF subrayan que esta brecha no responde únicamente a factores de mercado, sino a restricciones institucionales y estructurales, que impide la atracción sostenida de inversión en minería estratégica incluso en un escenario de precios elevados y fuerte demanda internacional (Tiusabá y Elorza, 2025; Mahtani 2026).

Al mismo tiempo, Tiusabá y Elorza (2025) destacan oportunidades selectivas para avanzar hacia etapas de mayor valor agregado cuando existen condiciones de escala, tecnología y coordinación público-privada. La experiencia internacional muestra que la minería puede convertirse en una plataforma para el desarrollo de proveedores de bienes, servicios y tecnología —como ilustra el modelo australiano METS— y no limitarse a la extracción. En ALC, esto se traduce en oportunidades vinculadas al procesamiento intermedio de litio, la producción de materiales para baterías, el desarrollo de insumos para electromovilidad y la provisión de servicios especializados asociados a la minería moderna. Aprovechar este potencial exige decisiones de política orientadas a fortalecer la gobernanza sectorial, alinear incentivos de inversión y asegurar que los beneficios económicos se traduzcan en desarrollo productivo y territorial, evitando que la abundancia de recursos refuerce patrones históricos de dependencia extractiva.

Turismo sostenible y servicios asociados como oportunidad de inversión territorial

El turismo se ha consolidado como uno de los principales sectores exportadores de servicios en ALC. En 2024, las exportaciones de servicios turísticos alcanzaron US\$108,000 millones, frente a US\$65,000 millones en 2014, y representaron 42.3% de las exportaciones totales de servicios y 6.3% de las exportaciones totales de la región (Giordano et al., 2025). A escala global, ese mismo año se registraron 1,465 millones de llegadas internacionales y US\$1.7 billones en ingresos, de los cuales ALC captó 79.3 millones de llegadas y US\$95,500 millones en ingresos, confirmando la existencia de una demanda externa sostenida que respalda nuevos proyectos de inversión (Bayona, 2026). El peso macroeconómico del turismo es particularmente visible en el Caribe, donde constituye uno de los principales sectores económicos.

Antes de la pandemia, el turismo representaba el 42% de las exportaciones totales, mientras que la economía del turismo alcanzaba 26% del PIB y 35% del empleo en la subregión (CAF, 2023b). Esta elevada especialización implica vulnerabilidad ante shocks externos, pero también evidencia el potencial de profundizar inversiones orientadas a elevar productividad, resiliencia climática y diversificación de la oferta turística. En el Caribe, la agenda de inversión no es solo ampliar la capacidad hotelera, incluye también infraestructura aeroportuaria y portuaria, gestión costera, adaptación al cambio climático, servicios urbanos y digitales, y formar capital humano especializado.

El atractivo inversor del sector se refleja en los flujos recientes de proyectos. Entre 2019 y 2024, ALC concentró 238 proyectos nuevos en turismo, con un valor estimado de US\$22,074 millones y la creación proyectada de 80,000 empleos (Bayona, 2026). Estos datos sugieren que existe una percepción sostenida de rentabilidad en el sector, tanto en destinos consolidados como en

aquellos con potencial de desarrollo. La rentabilidad futura dependerá cada vez más de la capacidad de integrar sostenibilidad ambiental, inclusión social y gestión territorial eficiente en el diseño de los proyectos.

La dimensión ambiental ya no es un atributo accesorio, sino un determinante competitivo. CAF (2023b) plantea la necesidad de avanzar hacia un turismo “vivo y regenerativo”, que no solo minimice impactos, sino que contribuya activamente a la conservación de biodiversidad, la restauración de ecosistemas y la valorización del patrimonio cultural. Esta orientación redefine el tipo de inversión requerida: energías renovables en instalaciones turísticas, gestión hídrica eficiente, tratamiento de residuos, movilidad sostenible, soluciones basadas en la naturaleza y planificación urbana que preserve activos ambientales.

El turismo también presenta un efecto multiplicador relevante en las economías locales. El gasto turístico impulsa cadenas de suministro en agricultura, pesca, transporte, comercio, industrias creativas y servicios empresariales, ampliando el impacto más allá del alojamiento y la restauración (TSTT, 2025). Esta característica lo convierte en una oportunidad atractiva para territorios rurales y ciudades intermedias que buscan diversificar su base productiva sin depender solo de sectores extractivos o industriales de gran escala. El ecoturismo, el turismo rural y comunitario, o el turismo cultural permiten articular ingresos complementarios y preservar actividades tradicionales, siempre que existan estándares de calidad, capacitación y conectividad adecuados.

CAPITULO III. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Este capítulo analiza las brechas que limitan la innovación, la adopción tecnológica y la productividad en ALC, con el objetivo de explicar por qué la movilización de inversión no siempre se traduce en mejoras sostenidas del crecimiento, el desempeño empresarial y la generación de empleo. Sin capacidades para innovar, adoptar tecnología, escalar procesos productivos y consolidar empresas dinámicas, la inversión pierde efectividad como motor de transformación productiva.

Una visión amplia de la innovación comprende no solo la investigación y desarrollo (I+D), sino también la digitalización, la modernización de procesos, la adopción tecnológica, la mejora organizacional y el fortalecimiento de capacidades empresariales. Desde esta perspectiva, diversos estudios han identificado una paradoja persistente en ALC: la región presenta altos niveles de emprendimiento, pero una baja proporción de empresas dinámicas, innovadoras y escalables. Esta situación responde a restricciones en financiamiento, capital humano, articulación institucional, capacidades tecnológicas y densidad de los ecosistemas de innovación.

El problema, por tanto, no radica únicamente en la disponibilidad de recursos. También se relaciona con la falta de continuidad entre instrumentos, la debilidad de la coordinación institucional, la limitada capacidad de absorción tecnológica de las empresas y la escasa articulación entre innovación, emprendimiento y desarrollo productivo.

3.1. Innovación, adopción tecnológica y productividad: brechas estructurales

ALC enfrenta desde hace varios años un problema de crecimiento que no puede explicarse solo por la volatilidad macroeconómica, la desaceleración del comercio internacional o las restricciones fiscales. En el fondo persiste una dificultad más estructural, vinculada con su baja capacidad para elevar la productividad, diversificar el tejido productivo y generar actividades intensivas en conocimiento. En ese marco, la innovación es una condición central para que las economías de la región puedan romper trayectorias de bajo dinamismo y construir nuevas fuentes de competitividad.

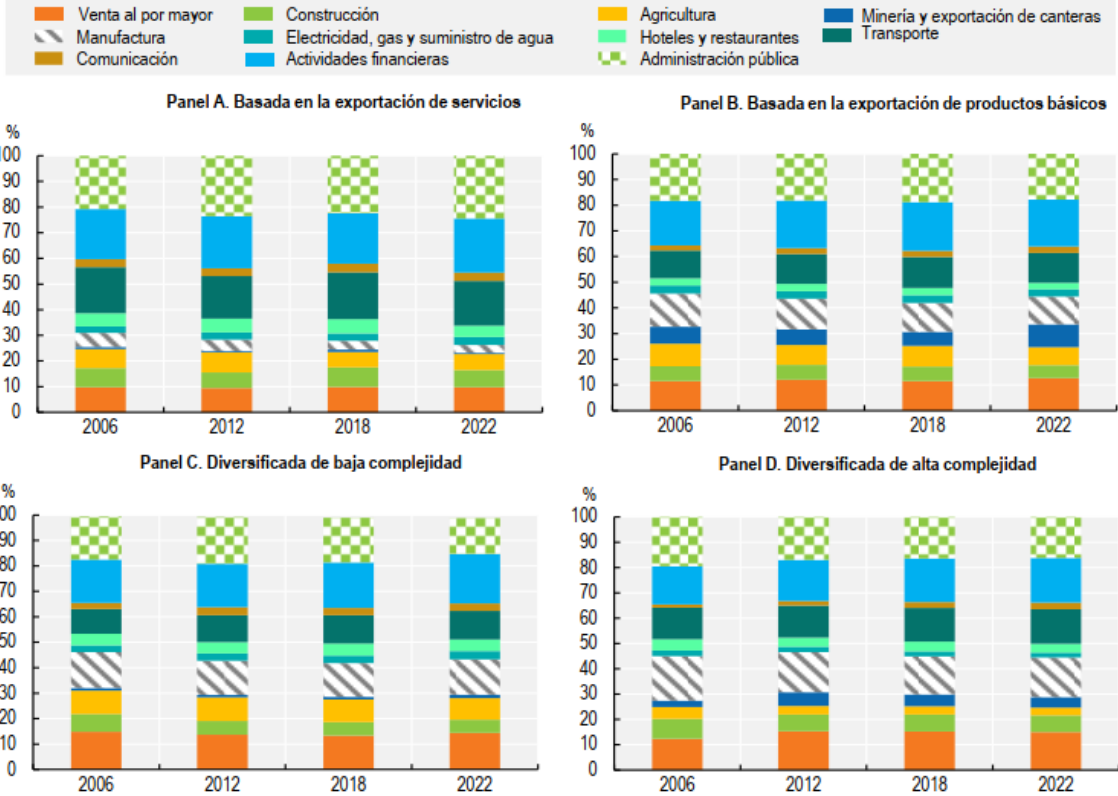
En ALC, la discusión sobre innovación suele asociarse casi automáticamente con la I+D, las patentes o la investigación científica de frontera. Si bien esta dimensión es relevante, se considera insuficiente para entender cómo se generan aumentos de productividad en economías con una fuerte heterogeneidad estructural, elevada presencia de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y con un rezago considerable respecto de la frontera tecnológica global. Diversos trabajos coinciden en que, en países de ingreso medio, concentrarse exclusivamente en la I+D restringe la comprensión del fenómeno innovador.¹⁸

Desde esta perspectiva, se considera que la innovación que interesa para el desarrollo productivo de ALC debe entenderse en sentido amplio. Además de la I+D, debe incluir también la introducción o adopción efectiva de productos, procesos, servicios, modelos de negocio y formas de organización significativamente mejorados. Esta aproximación es especialmente pertinente para ALC, donde la principal restricción no radica únicamente en la escasez de descubrimientos originales, sino en la limitada capacidad para absorber, adaptar, difundir y escalar tecnologías ya existentes (Maloney et al., 2025).

¹⁸ En estos contextos, una parte importante de las mejoras de productividad proviene de la incorporación de tecnologías existentes, adquisición de equipos, reorganización de procesos, digitalización y adopción de mejores prácticas de gestión (Paus y Robinson, 2022).

Esa brecha de adopción tecnológica tiene implicancias directas sobre el patrón de especialización productiva. Como lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2025), buena parte de la canasta exportadora regional continúa concentrada en productos primarios y manufacturas de baja tecnología, con márgenes limitados para elevar el valor agregado y sostener mejoras continuas de productividad. Si bien existen economías con perfiles más diversificados y complejos —como Costa Rica, República Dominicana o México—, la estructura regional sigue reflejando una inserción internacional dominada por actividades de baja sofisticación tecnológica. Ello no solo restringe el potencial de crecimiento, sino que también limita la aparición de sectores más dinámicos, intensivos en conocimiento y con mayor capacidad de arrastre sobre el resto de la economía (OCDE, 2025).

Figura N°16. Estructura Productiva y Complejidad Económica en América Latina



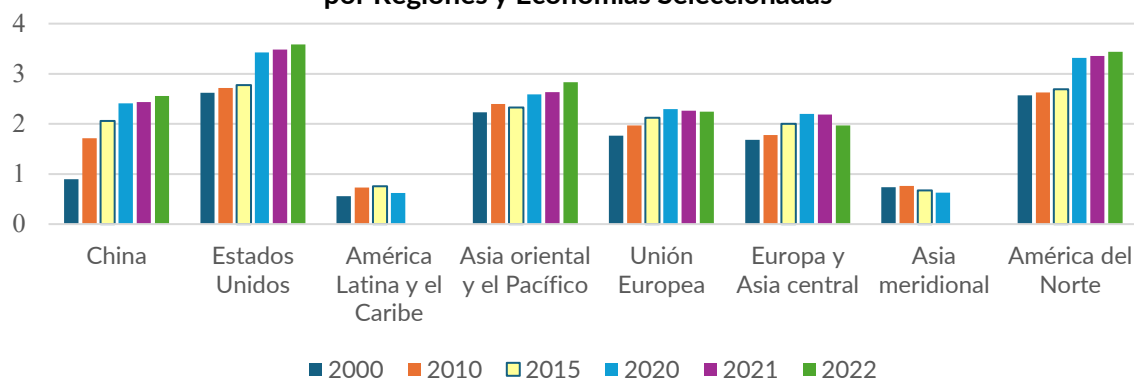
Fuente: CEPAL (2025)

Nota: Las economías se clasifican según su patrón de especialización: basadas en productos básicos (más del 60% de exportaciones de mercancías en commodities), en servicios (más del 45% de exportaciones en servicios), y diversificadas según su nivel de complejidad económica (alta o baja, según el Índice de Complejidad Económica). La agrupación sectorial incluye actividades agregadas de transporte, finanzas, comercio, sector público y agricultura.

En este contexto, la debilidad de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) de ALC no constituyen un rasgo coyuntural, sino un problema acumulativo. La CEPAL destaca que en ALC el bajo desempeño relativo en CTI es una limitación estructural que se ha prolongado por décadas y que incluso ha ampliado la brecha frente a otras regiones en desarrollo y economías más avanzadas. ALC no solo invierte poco en estas áreas, sino que enfrenta fragilidades en sus capacidades institucionales, en la articulación entre actores y en la calidad de los resultados obtenidos. Por ello, el desafío no se agota en aumentar recursos, algo especialmente difícil en un entorno de estrechez fiscal, sino que exige revisar cómo se diseñan, coordinan y evalúan las políticas de innovación (CEPAL, 2025).

La persistencia de esta brecha puede observarse también desde la evidencia sobre I+D. Paus y Robinson (2022) sostienen que ALC necesita elevar su productividad para escapar de la trampa del ingreso medio, y muestra que la región presenta rezagos notorios en los macroindicadores de innovación (Figura N°17). Sin embargo, el argumento más relevante va más allá del bajo esfuerzo en I+D: el problema regional no reside solamente en la falta de relación entre innovación y productividad a nivel de empresa, sino en la insuficiencia de políticas activas que expandan el uso de insumos para innovar y mejoren las condiciones para que estos se traduzcan en resultados.

**Figura N°17. Gasto en Investigación y Desarrollo (% del PIB)
por Regiones y Economías Seleccionadas**



La región no solo invierte poco en innovación, sino que mantiene una brecha estructural frente a economías avanzadas y asiáticas.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco Mundial.

Esta observación desplaza la discusión desde una visión lineal de la innovación hacia una mirada más sistémica. Las empresas innovan con mayor probabilidad cuando operan en entornos donde existen conectividad digital, servicios de extensión tecnológica, certificaciones, infraestructura de calidad, formación de talento, cooperación con universidades y acceso a mercados. En esa línea, informes recientes de la OCDE y otras entidades insisten en que las políticas de adopción tecnológica deben apoyar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), reforzar los servicios público-privados de extensión tecnológica y fortalecer la conectividad. A medida que las economías avanzan, el énfasis debería desplazarse hacia la construcción de ecosistemas de innovación más densos, apoyados en subsidios a la I+D, incentivos fiscales y vínculos más estrechos entre universidades e industria (OCDE, 2025).

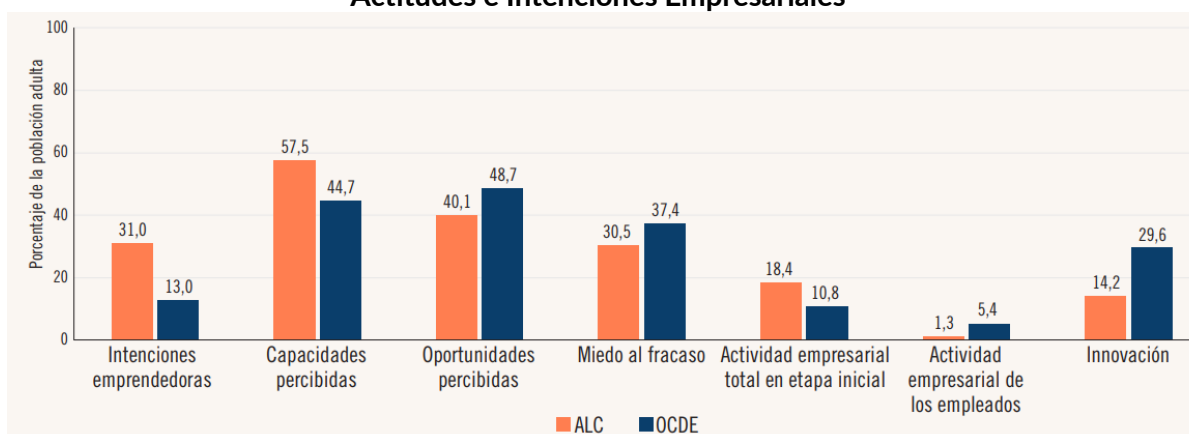
En ALC, la innovación no se limita al ámbito del laboratorio, sino que se despliega principalmente en el espacio productivo, donde se traduce en mejoras de procesos, incorporación de tecnología y fortalecimiento de capacidades empresariales. La CEPAL (2025) muestra que, en la práctica, los instrumentos de política en CTI se distribuyen entre I+D, formación de capital humano y, de manera muy relevante, apoyo a la innovación empresarial. Esta última categoría abarca desde fondos para promover la competitividad de las empresas hasta extensionismo tecnológico, desarrollo de nuevos productos, apoyo al escalamiento de proyectos e impulso al emprendimiento innovador. Esa arquitectura confirma que la frontera entre política de innovación y política de desarrollo productivo es cada vez más difusa.

En este escenario, la adopción tecnológica adquiere un papel particularmente decisivo. Los hallazgos encontrados por Maloney et al. (2025a) sugieren que, para una región alejada de la frontera tecnológica, innovar consiste en gran medida en cerrar brechas intrafrontera. El crecimiento de ALC requiere que los gobiernos entiendan la política de innovación como una estrategia más amplia de “aprender a aprender”, orientada a identificar y explotar oportunidades

tecnológicas. Ello supone desarrollar capacidades tecnológicas y gerenciales, construir instituciones que apoyen la experimentación productiva y facilitar que las empresas, nuevas y existentes, incorporen conocimiento, lo financien, lo implementen y escalen las apuestas exitosas.

Esta lógica se enlaza de manera natural con el emprendimiento. El auge reciente del ecosistema emprendedor tecnológico de ALC no debe entenderse solo como la aparición de un grupo de empresas dinámicas en algunas grandes ciudades, sino como una manifestación de que la innovación puede abrir nuevas rutas de transformación productiva. Sin embargo, este dinamismo convive con una tensión estructural que caracteriza a la región: ALC presenta niveles más altos de intención emprendedora y de capacidades percibidas en comparación con economías de la OCDE (Figura N°18), sin embargo, estas fortalezas no se traducen en mayores niveles de innovación ni en una mayor participación en actividades empresariales dentro de empresas establecidas. Esta brecha sugiere que el desafío regional no radica en la falta de iniciativa emprendedora, sino en la capacidad de transformar dicha iniciativa en emprendimientos más sofisticados, productivos y escalables.

Figura N°18. Las Intenciones Empresariales son Altas en ALC
Actitudes e Intenciones Empresariales



Fuente: Maloney et al. (2025b)

Nota. Intenciones emprendedoras = % adultos (18–64) que planean negocio en 3 años; capacidades percibidas = % que cree tener habilidades; oportunidades percibidas = % que ve buenas oportunidades locales; miedo al fracaso = % que el miedo le impediría emprender; TEA = % empresarios incipientes o dueños de negocios nuevos; actividad empresarial de empleados = tasa de empleados que crean productos/unidades de negocio; innovación = % de TEA con producto novedoso y poca competencia.

Blanco (2024) destaca que los *startups* están adquiriendo un peso creciente en la economía de ALC y que su expansión puede introducir un impulso de innovación y productividad necesario para renovar el tejido empresarial. También señala que este fenómeno puede tener efectos relevantes en inclusión financiera, educación digital y formalización de actividades tradicionalmente informales. Sin embargo, el mismo autor advierte que el ecosistema emprendedor no resolverá por sí solo los problemas estructurales de la región. Su aporte dependerá de que existan condiciones para difundir tecnología, escalar modelos de negocio y ampliar su impacto sobre sectores más amplios del aparato productivo.

En consecuencia, la principal brecha de ALC no debe interpretarse únicamente como insuficiencia de gasto en I+D, aunque esta sigue siendo relevante. Es, sobre todo, una brecha de capacidades para transformar conocimiento en productividad, de instituciones para sostener procesos de aprendizaje, de políticas para articular innovación con estructura productiva y de mecanismos para ampliar la adopción tecnológica en empresas de distinto tamaño.

3.2. De la innovación al emprendimiento: cómo se generan y escalan empresas de alta productividad

La relación entre innovación y emprendimiento ALC no se agota en la creación de nuevas empresas ni en la visibilidad de un conjunto acotado de *startups*. Desde una perspectiva de desarrollo productivo, lo relevante es la capacidad de los emprendimientos para introducir soluciones, escalar, generar empleo de calidad y elevar la productividad. En este punto, la evidencia muestra una brecha persistente. Como señalan Maloney et al. (2025b), ALC presenta altos niveles de intención emprendedora y reconocimiento social hacia el emprendimiento, pero estos no se traducen automáticamente en mejoras sostenidas en productividad ni en una renovación significativa del tejido empresarial. El problema no es la cantidad de emprendimientos, sino su calidad. Las nuevas empresas no son del todo más productivas que las existentes, por lo que la rotación empresarial, por sí sola, no genera un cambio estructural en la economía.

Esta limitación adquiere mayor relevancia en contextos de baja productividad estructural, donde el aumento en el número de firmas tiende a reproducir la fragmentación existente si no viene acompañado de mejoras en capacidades y en la generación de mayor valor agregado. En esa línea, Castellanos (2025) advierte que el crecimiento sostenido depende de la expansión de un segmento más acotado de emprendimientos capaces de innovar, escalar y dinamizar el resto del tejido productivo. Bajo esta óptica, el emprendimiento innovador debe entenderse en un sentido amplio, incorporando tanto iniciativas de base tecnológica como aquellas que adoptan y adaptan tecnologías existentes, reorganizan procesos y generan mejoras en sectores tradicionales. En ALC, donde las ganancias de productividad provienen en gran medida de la adopción tecnológica más que de la invención de frontera¹⁹, la clave radica en construir capacidades que permitan transformar oportunidades en crecimiento empresarial sostenido.

Por ello, la transición desde la innovación hacia el emprendimiento de alta productividad depende menos de una lógica lineal²⁰ y más de la densidad del ecosistema. El reporte GEIAL (2025) aporta una contribución relevante al desplazar la atención desde el relato de casos exitosos hacia el análisis de las condiciones que hacen posible un mayor dinamismo emprendedor. El estudio compara 27 ecosistemas urbanos de ALC y distingue entre inputs, entendidos como condiciones sistémicas, y outputs, entendidos como resultados en dinámica emprendedora. Sus hallazgos muestran que unas pocas ciudades, como São Paulo, Santiago, Medellín y Montevideo, combinan condiciones relativamente favorables con un desempeño sostenido, mientras que otras exhiben una brecha entre potencial y resultados. Córdoba y Querétaro, entre las grandes ciudades, y Manizales entre las intermedias, destacan justamente por mostrar mejores condiciones que desempeño efectivo, lo que sugiere la presencia de cuellos de botella que impiden transformar capacidades en resultados (Quilici, 2025).

La evidencia reciente permite matizar una visión excesivamente optimista del ecosistema emprendedor en ALC. La región no parte de cero. Se observan avances en cultura emprendedora, apoyo institucional y desarrollo de comunidades empresariales, junto con una mayor participación de emprendedores en roles de mentoría e inversión (Kantis y Federico, 2025). Sin embargo, estos progresos coexisten con rezagos persistentes en financiamiento, capital humano emprendedor y calidad del entorno regulatorio. Si bien las condiciones para emprender han mejorado en varios territorios, no lo han hecho con la intensidad necesaria para sostener una expansión significativa de empresas dinámicas. Entonces, medir ecosistemas

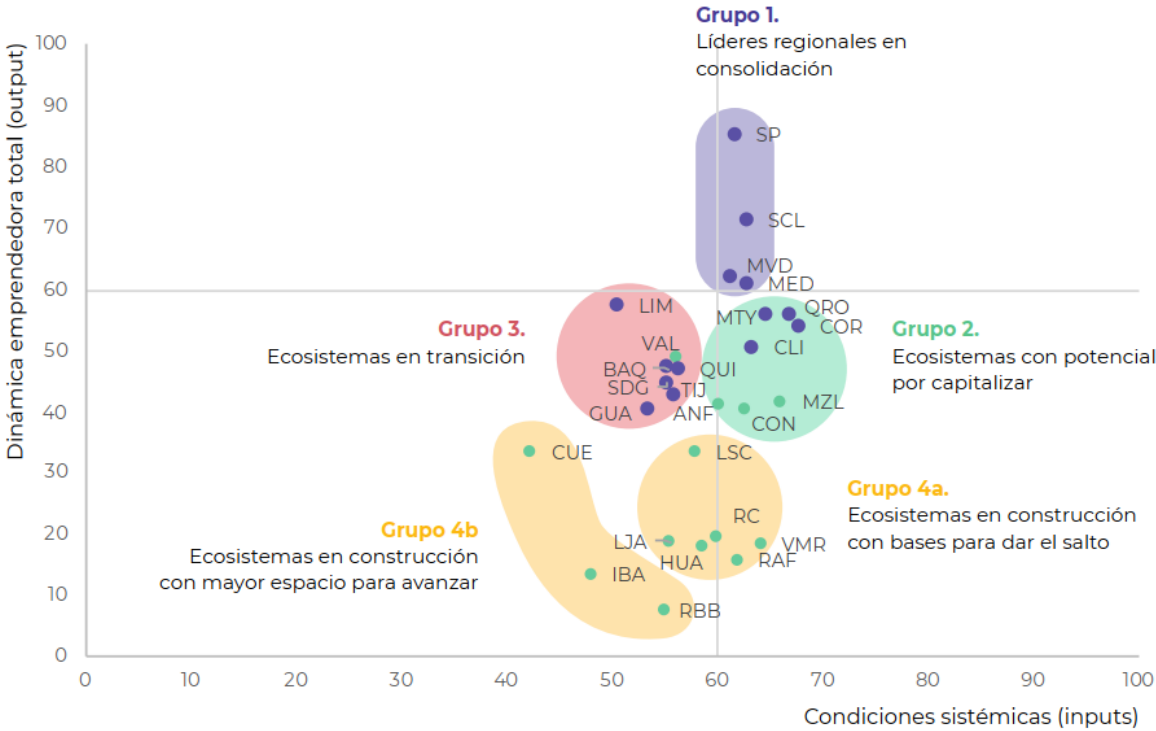
¹⁹ Se refiere a la generación de nuevos conocimientos, tecnologías o productos en la frontera tecnológica global, mediante actividades de investigación y desarrollo que amplían el estado del arte, a diferencia de la adopción o adaptación de tecnologías ya existentes.

²⁰ Entiéndase por un enfoque que asume que la innovación sigue una secuencia ordenada desde la investigación hasta el mercado, donde la generación de conocimiento conduce de manera directa a la creación de empresas y a resultados productivos.

implica ir más allá de la abundancia de programas o relatos de casos de éxito y reconocer que el desarrollo emprendedor depende de la interacción entre capacidades, financiamiento, políticas y resultados, en un proceso acumulativo que exige coordinación y aprendizaje institucional continuo (Kantis, 2025; Quilici, 2025).

Esta constatación resulta clave para entender el vínculo entre innovación y emprendimiento. Las oportunidades empresariales no emergen solo por el talento individual, sino de entornos que logran articular capacidades dispersas a través de redes, clústeres, plataformas de ciencia y tecnología y vínculos entre universidades, empresas y sector público. Los ecosistemas más dinámicos combinan demanda local con conexiones externas, lo que permite ampliar mercados, acceder a conocimiento y sostener procesos de escalamiento (Kantis & Federico, 2025). Cuando estas conexiones son débiles, incluso la existencia de capacidades científicas o empresariales no garantiza la generación de emprendimientos innovadores, lo que explica parte de la brecha entre potencial y resultados observada en la región.

Figura N°19. Condiciones Sistémicas y Desempeño Emprendedor en Ecosistemas Urbanos de América Latina



Fuente: Reporte GEIAL (2025)
 ANF: Antofagasta, BAQ: Barranquilla, CLI: Cali, CON: Concepción, COR: Córdoba, CUE: Cuenca, GUA: Guayaquil, HUA: Huancayo, IBA: Ibarra, LSC: La Serena-Coquimbo, LIM: Lima, LJA: Loja, MZL: Manizales, MED: Medellín, MTY: Monterrey, MVD: Montevideo, QRO: Querétaro, QUI: Quito, RAF: Rafaela, RC: Río Cuarto, RBB: Riobamba, SDG: Santo Domingo, SP: San Pablo, SCL: Santiago, TIJ: Tijuana, VAL: Valparaíso, VMR: Villa María.

A estas restricciones se suma la limitada disponibilidad de capital humano con las competencias necesarias para liderar procesos de crecimiento empresarial. Maloney et al. (2025b) muestran que el emprendimiento transformador está estrechamente asociado a niveles más altos de educación y capacidades gerenciales, lo que refuerza el vínculo entre la agenda de innovación, la formación de talento y el aprendizaje tecnológico. En paralelo, la evidencia sugiere que el financiamiento, aunque necesario, no es suficiente para dinamizar el ecosistema. Rivas (2014) advierte que, en contextos de baja intensidad innovadora, el desarrollo de instrumentos como el capital de riesgo enfrenta restricciones estructurales si no existe un flujo adecuado de proyectos con potencial. Por tanto, el fortalecimiento del emprendimiento dinámico requiere

una estrategia integral que combine financiamiento, desarrollo de capacidades, redes de apoyo, asistencia técnica y conexión efectiva con mercados.

La experiencia de Start-Up Chile, revisada por Rivas (2014), ilustra tanto el potencial como los límites de estas políticas. El programa logró visibilidad internacional, atrajo emprendedores extranjeros, ofreció capital semilla, espacio de trabajo y acceso a mentores e inversionistas, y contribuyó a posicionar a Chile como referente regional en la agenda de emprendimiento innovador. Sin embargo, el mismo análisis sugiere que este tipo de instrumentos alcanza su mayor impacto cuando se inserta en una estrategia más amplia de desarrollo del ecosistema, capaz de generar continuidad entre atracción de talento, incubación, financiamiento temprano, escalamiento e inserción internacional. La lección no es que el capital semilla o los programas emblemáticos sean insuficientes por definición, sino que su efectividad depende de la solidez de los demás eslabones del sistema.

En ALC, estas restricciones se vuelven aún más visibles cuando se observa la estructura empresarial predominante. La mayoría de las firmas son micro y pequeñas empresas (MYPES), y buena parte opera con bajos niveles de productividad y capacidades limitadas de absorción tecnológica. Por ello, el emprendimiento de alto impacto no puede pensarse como una isla desconectada del resto del aparato productivo. Su relevancia depende de que logre irradiar conocimiento, generar encadenamientos, abrir oportunidades de modernización para otras empresas y demostrar nuevas formas de organización productiva. Visto así, la relación entre innovación y emprendimiento no se agota en la creación de *startups* exitosas; implica también su capacidad de influir sobre sectores más amplios y contribuir a una transformación productiva más diversificada y con mayor valor agregado (OECD et al., 2024; Lemuel et al., 2025).

Por tanto, ALC no enfrenta una escasez absoluta de vocación emprendedora, sino una insuficiencia de emprendimientos capaces de transformar innovación en productividad, empleo y valor agregado de manera sostenida. Entonces, el desafío de política no consiste únicamente en promover más emprendimientos, sino en construir las condiciones para que una mayor proporción de ellos se convierta en empresas dinámicas, innovadoras y de alto impacto; dado que, estas limitaciones responden a un conjunto de restricciones de carácter sistémico que afectan de manera simultánea distintas dimensiones del ecosistema emprendedor (Cuadro N°4).

Cuadro N°4. Principales Cuellos de Botella del Emprendimiento Dinámico en América Latina

Dimensión	Restricción clave	Implicancia
Calidad emprendedora	Alta actividad emprendedora, pero baja proporción de empresas de alto impacto	La creación de empresas no se traduce en aumentos sostenidos de productividad
Financiamiento	Escasa profundidad del financiamiento privado y predominio de fondos públicos	Se limita el escalamiento de emprendimientos innovadores
Capital humano	Déficits en capacidades gerenciales, técnicas y de formación emprendedora	Menor capacidad de innovar, gestionar y crecer
Regulación	Entornos regulatorios aún restrictivos y poco adaptados al emprendimiento dinámico	Aumentan los costos de entrada, formalización y expansión
Articulación del ecosistema	Débil coordinación entre actores y ausencia de agendas compartidas	Se reduce la efectividad de políticas y programas
Apoyo al escalamiento	Instrumentos concentrados en etapas tempranas	Muchas empresas nacen, pero pocas escalan

Vinculación con CTI	Insuficiente conexión entre investigación, empresas y emprendedores	El conocimiento no se traduce plenamente en innovación empresarial
Internacionalización	Limitadas redes y conexiones extralocales	Se restringe el acceso a mercados, inversión y aprendizaje

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial (2025) y GEIAL (2025).

Nota: El cuadro sintetiza restricciones de naturaleza sistémica. Algunas operan a nivel regional y otras varían entre ecosistemas, pero ambas fuentes coinciden en que los mayores obstáculos no se localizan solo en la falta de ideas o de vocación emprendedora, sino en las condiciones para transformar esas capacidades en empresas innovadoras y escalables.

La naturaleza de estas restricciones muestra que el desarrollo del emprendimiento dinámico no puede abordarse mediante intervenciones aisladas. Requiere una combinación coherente de instrumentos, capacidades institucionales y mecanismos de coordinación que permitan actuar a lo largo del ciclo de vida empresarial.

3.3. Políticas públicas e instrumentos para promover innovación y emprendimiento en ALC

Dado que el principal reto de ALC no es la ausencia de vocación emprendedora, sino la dificultad para convertir innovación en empresas dinámicas, escalables y capaces de elevar la productividad, la discusión de política debe concentrarse en cómo los países están tratando de cerrar esa brecha. La evidencia reciente sugiere que la región ha avanzado en la creación de instrumentos, agencias y marcos estratégicos, aunque con intensidades distintas y, en muchos casos, dentro de arquitecturas institucionales todavía fragmentadas. En la práctica, el impulso al emprendimiento innovador rara vez descansa en un solo programa. Más bien se articula a través de estrategias de CTI, agendas de productividad, políticas de desarrollo productivo y agencias de fomento que operan con subsidios, asistencia técnica, extensionismo, financiamiento, garantías y mecanismos de articulación institucional (OCDE et al., 2024).

Un rasgo común en ALC es la persistencia de un sesgo hacia instrumentos del lado de la oferta. La evidencia muestra que siguen predominando los fondos no reembolsables para Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), los programas de formación de capital humano y los apoyos a la innovación empresarial mediante fondos concursables (CEPAL, 2025). Este despliegue institucional es relevante porque refleja avances respecto de décadas anteriores, pero también evidencia una limitación: estas políticas no siempre logran traducirse en adopción productiva, acceso a mercados o escalamiento empresarial.

En el ámbito del emprendimiento innovador, este desbalance resulta especialmente crítico. Los instrumentos orientados a la oferta son necesarios para la experimentación y la acumulación de capacidades, pero resultan insuficientes si no se complementan con mecanismos que activen la demanda. En esa línea, la evidencia subraya la importancia de instrumentos como compras públicas innovadoras, regulación proinnovación y esquemas de innovación abierta que permitan crear mercados para nuevas soluciones (Maruyama, 2025).

La experiencia comparada también muestra que los instrumentos no son neutros y que su efectividad depende de la etapa del ciclo empresarial. Los apoyos no reembolsables y el capital semilla tienden a ser más adecuados en fases tempranas, mientras que los incentivos fiscales operan mejor en empresas con cierta capacidad de inversión en I+D. En etapas de crecimiento, adquieren mayor relevancia los préstamos, las garantías y los mecanismos híbridos que permiten financiar expansión sin comprometer excesivamente la estructura de propiedad. A lo largo de este proceso, los servicios no financieros cumplen un rol transversal, al reducir fallas de información, fortalecer capacidades gerenciales y facilitar la conexión con mercados, tecnología y financiamiento. La evidencia sugiere que las intervenciones más efectivas combinan

instrumentos financieros y no financieros, y que sus resultados dependen de la calidad del diseño, la implementación y la adecuación al contexto (Campos et al., 2025).

Estos elementos sugieren que no es lo más recomendable enfoques homogéneos en la política de emprendimiento. En ALC coexisten iniciativas orientadas al autoempleo con otras dirigidas a empresas innovadoras y de alto crecimiento, que enfrentan restricciones de naturaleza distinta. Tratar estos segmentos como si fueran equivalentes tiende a diluir el impacto de la política pública. Como advierte Rivas (2014), el desarrollo del emprendimiento dinámico requiere instrumentos más selectivos, secuencias coherentes y una segmentación más fina según etapa empresarial, intensidad tecnológica y vínculo con cadenas productivas. Cuando estos elementos no se consideran, las políticas pueden contribuir a la creación de empresas, pero no necesariamente a su consolidación ni a su aporte efectivo a la productividad y el crecimiento.

En los últimos cuatro años, varios países han intentado responder a estas limitaciones mediante planes y estrategias más integrales. En Brasil, la evolución reciente es particularmente visible. En paralelo a la actualización de su política de CTI, el país lanzó en enero de 2024 la estrategia Nova Indústria Brasil, que sitúa la innovación, la reindustrialización y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en el centro de la política productiva. Este esfuerzo se apoya en una institucionalidad relativamente más consolidada que la observada en gran parte de la región, con entidades como el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), la Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) y la Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), que combinan financiamiento, apoyo no reembolsable, desarrollo tecnológico y articulación con el sector productivo y académico. Asimismo, el programa Brasil Mais Produtivo se configura como una iniciativa federal con mecanismos claros de implementación y sistemas de monitoreo y evaluación. Así, Brasil dispone de una caja de herramientas sofisticada para promover la innovación empresarial y el emprendimiento, aunque enfrenta el desafío de coordinar estos instrumentos en un entorno institucional complejo y territorialmente heterogéneo (Ferraz et al., 2023; OECD et al., 2024).

En Chile, la articulación entre estrategia, instrumentos y agencias ejecutoras presenta un alto grado de madurez. El país cuenta con la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 2023-2026, cuya implementación se refuerza mediante un Plan de Acción 2023-2026. Esto contribuye a operacionalizar la agenda pública. A ello se suma una orientación explícita hacia el aumento de la productividad, el fortalecimiento de la capacidad innovadora empresarial, la relocalización de actividades estratégicas y la internacionalización, configurando un marco coherente de política productiva. En este entramado, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) cumple un rol central en la articulación de instrumentos de financiamiento, capital de riesgo, apoyo al emprendimiento dinámico y desarrollo productivo, actuando como puente entre diseño e implementación. De manera complementaria, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) fortalece la generación de conocimiento, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación coordina la orientación estratégica del sistema, y ProChile impulsa la internacionalización de empresas innovadoras. Este esquema refleja un énfasis creciente en la transferencia tecnológica y en la articulación entre universidades, centros tecnológicos, empresas y territorios, reforzando la idea de que el emprendimiento innovador depende no solo de la generación de conocimiento, sino también de su traducción en soluciones productivas, adopción tecnológica y escalamiento, lo que incrementa la probabilidad de consolidar empresas innovadoras (Jacques, 2025; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación - MINCTCI, 2025).

En Colombia, el giro más interesante ha sido la adopción de una lógica orientada por misiones que CEPAL (2025) identifica como instrumento estratégico reciente las Políticas de Investigación e Innovación Orientadas por Misiones 2024-2033. Este enfoque vincula la innovación con la resolución de desafíos productivos y sociales y abre espacio a la colaboración

entre Estado, empresas, universidades y ecosistemas emprendedores. A ello se suma el papel de iNNpulsa Colombia, como una entidad con funciones explícitas en materia de emprendimiento, innovación y fortalecimiento empresarial. Aunque el marco de desarrollo productivo colombiano tiene antecedentes, la novedad radica en el intento de alinear instrumentos de innovación con objetivos más concretos de transformación productiva (OECD et al., 2024).

En México, la política de CTI presenta un panorama mixto. Por un lado, la CEPAL (2025) registra la adecuación del Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2021-2024, que actualiza el marco nacional. Por otro lado, el Programa Sectorial de Economía (PROSECO) 2025-2030 y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad (PEPC) 2025-2030 reorganizan la agenda hacia la relocalización productiva, el fortalecimiento del contenido nacional, la inclusión de MIPYMES y la diversificación comercial, junto con el impulso a la innovación. Esta orientación se articula con el Plan México, que actúa como marco estratégico para atraer inversión, fortalecer cadenas de valor y vincular la innovación con oportunidades concretas de producción y escalamiento empresarial. Bajo este enfoque, el emprendimiento innovador se inserta en una estrategia más amplia de desarrollo productivo, con mayor énfasis en la demanda y en la integración con mercados. No obstante, el gasto en CTI sigue concentrado en entidades científicas y educativas, y su vínculo con el escalamiento empresarial es menos claro que en países como Chile o Brasil. En este escenario, instituciones financieras de desarrollo como Nacional Financiera (NAFIN), el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) adquieren un papel clave al canalizar financiamiento hacia sectores estratégicos, facilitar la participación de MIPYMES en cadenas productivas y contribuir a cerrar la brecha entre innovación y desarrollo productivo.

Cuadro N°5. Estrategias Recientes de Innovación y Emprendimiento en Países Seleccionados de América Latina

País	Estrategia o Plan	Enfoque principal	Instituciones clave
Brasil	Nova Indústria Brasil (2024) y políticas de CTI en actualización.	Reindustrialización, innovación tecnológica y fortalecimiento productivo.	BNDES, FINEP, EMBRAPPII.
Chile	Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 2023-2026, Plan de Acción 2023-2026 e insumos para la actualización de la Estrategia Nacional de CTCI 2026.	CTCI para el desarrollo sostenible, articulación interministerial, fortalecimiento de la transferencia tecnológica y conexión entre conocimiento, empresas y territorios.	Ministerio de Ciencia, CORFO, ANID, Consejo Nacional de CTCI.
Colombia	Políticas de Investigación e Innovación Orientadas por Misiones (2024).	Innovación orientada a desafíos productivos y sociales.	iNNpulsa, Ministerio de Ciencia.
México	Plan México, Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (adecuación 2024) y PROSECO 2025-2030 y PEPC 2025-2030.	Relocalización productiva, fortalecimiento de cadenas de valor, desarrollo de MIPYMES, articulación entre innovación y mercado.	Secretaría de Economía, SHCP, SECIHTI*, NAFIN, BANCOMEXT.

Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL (2025), documentos oficiales nacionales, políticas nacionales y planes institucionales.

Nota: En la mayoría de los casos, el emprendimiento innovador se impulsa de manera transversal, a través de estrategias de CTI, agendas de productividad y agencias de fomento, más que mediante planes aislados exclusivos para startups.

Estos casos muestran una convergencia clara, el emprendimiento innovador ya no se aborda solamente mediante programas aislados, sino a través de combinaciones de estrategias

nacionales de CTI, agendas de productividad, políticas de desarrollo productivo y agencias especializadas que ejecutan instrumentos concretos (Cuadro N°5). La diferencia entre países no está tanto en la existencia formal de políticas, sino en la capacidad de coordinarlas, financiarlas, evaluarlas y traducirlas en trayectorias empresariales sostenidas. Chile y Brasil, exhiben una mayor densidad institucional y una combinación más compleja de instrumentos. Otros, como Colombia, muestran intentos recientes de articular mejor la política de innovación con prioridades productivas y ecosistemas empresariales. Y México, por su parte, cuentan con marcos recientes o vigentes que siguen siendo relevantes, aunque con desafíos más visibles en la traducción operativa hacia el escalamiento del emprendimiento innovador (CEPAL, 2025; Ferraz, 2023; PCM, 2025).

Más allá de sus diferencias, la comparación revela tres lecciones de política: i) la región está dejando atrás la idea de que el emprendimiento innovador puede impulsarse solo con capital semilla o incubación. Los países más activos están intentando combinar CTI, productividad, financiamiento, apoyo empresarial y articulación institucional; ii) la calidad de la gobernanza importa tanto como la existencia de instrumentos. Las políticas con mayores posibilidades de impacto son aquellas que cuentan con agencias ejecutoras, presupuestos identificables, coordinación interinstitucional y mecanismos de seguimiento; iii) el emprendimiento innovador se está integrando de forma creciente a agendas más amplias, como la transformación digital, la transición verde, la reindustrialización o la reducción de brechas territoriales (CEPAL, 2025; Ferraz et al., 2023; Braude et al., 2024).

Esto último porque la innovación que hoy se busca promover no es solo digital o tecnológica en sentido estricto. También se orienta hacia la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética, la descarbonización y la transformación de sectores productivos tradicionales. El trabajo de Braude et al. (2024) sobre innovación verde muestra que ALC está desplegando estrategias e instrumentos para vincular innovación con transición productiva sostenible. Esto amplía el horizonte del emprendimiento innovador y refuerza la idea de que las nuevas empresas no deben evaluarse solo por su novedad tecnológica, sino también por su capacidad de responder a desafíos productivos, sociales y ambientales concretos.

Aun así, los límites siguen siendo claros. CEPAL (2025) encuentra que, aunque una alta proporción de las estrategias revisadas declara metas de resultado o impacto, muchas no explicitan adecuadamente mecanismos para informar avances, asignar responsabilidades o sostener presupuestos consistentes. En otras palabras, la región ha mejorado más en la formulación de estrategias que en la institucionalización de su implementación y evaluación. Esta brecha es especialmente crítica en materia de emprendimiento innovador, donde los efectos dependen de la continuidad, la secuencia entre instrumentos y la capacidad de acompañar a las firmas más allá de su etapa inicial.

Por tanto, la región no carece de instrumentos ni de planes; lo que enfrenta es un problema de articulación, continuidad y escala. Las estrategias recientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú muestran que el emprendimiento impulsado por innovación ya ocupa un lugar más visible en la política pública regional. Sin embargo, la efectividad de esa agenda depende menos de la existencia formal de planes que de la capacidad de combinarlos con financiamiento regular, servicios de desarrollo empresarial, coordinación institucional y mecanismos de reducción de riesgo a lo largo del ciclo de vida de las empresas.

CAPITULO IV. INCLUIR: LLEGAR A MÁS PERSONAS Y MÁS TERRITORIOS

Los capítulos anteriores resaltan que la inversión y la innovación son condiciones necesarias para impulsar el desarrollo. Sin embargo, por sí solas no garantizan que sus beneficios lleguen a toda la población. En ALC, las brechas de inclusión persisten precisamente porque el crecimiento, la inversión y el cambio tecnológico no se traducen automáticamente en acceso equitativo a servicios, oportunidades y capacidades. Por ello, este capítulo centra en la inclusión²¹ como una dimensión complementaria de la agenda de desarrollo, entendida no solo como acceso formal, sino como uso efectivo, pertinencia de la oferta y capacidad real de las personas para beneficiarse de ella. Desde esta perspectiva, la inclusión se analiza a partir de tres dimensiones principales:

- **Social:** asociada a pobreza, desigualdad, educación, empleo juvenil, brechas de género y situación de grupos históricamente excluidos.
- **Territorial:** vinculada con las diferencias entre zonas urbanas y rurales, las brechas de conectividad y el acceso a infraestructura básica, como agua, saneamiento, transporte, energía y servicios digitales.
- **Financiera:** relacionada con el acceso y uso efectivo de servicios financieros por parte de hogares, pequeños productores y unidades económicas de menor escala.

Figura N°20. Dimensiones de la Inclusión



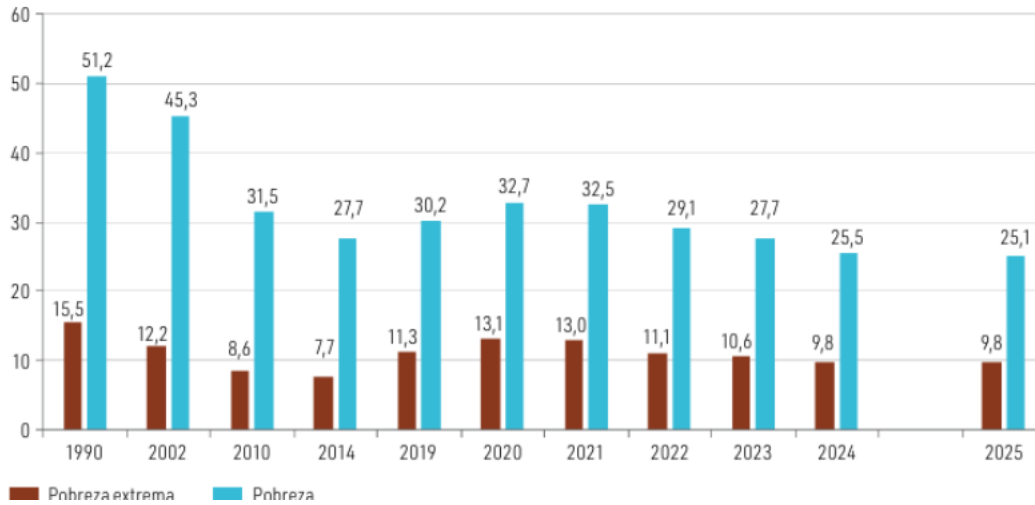
Fuente: Elaboración propia.

4.1. Inclusión social

De acuerdo con la CEPAL, en 2023 el 27.7% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza y un 10.6% en pobreza extrema; y si bien en 2024 estas tasas descendieron a 25.5% y 9.8%, los niveles siguen siendo elevados y reflejan que una parte importante de la población continúa enfrentando restricciones severas para acceder a ingresos suficientes y condiciones adecuadas de bienestar.

²¹ La inclusión puede definirse como el proceso de mejorar las condiciones en que las personas y los grupos participan en la sociedad, fortaleciendo la capacidad, las oportunidades y la dignidad de quienes se encuentran en desventaja por su identidad, origen o condición.

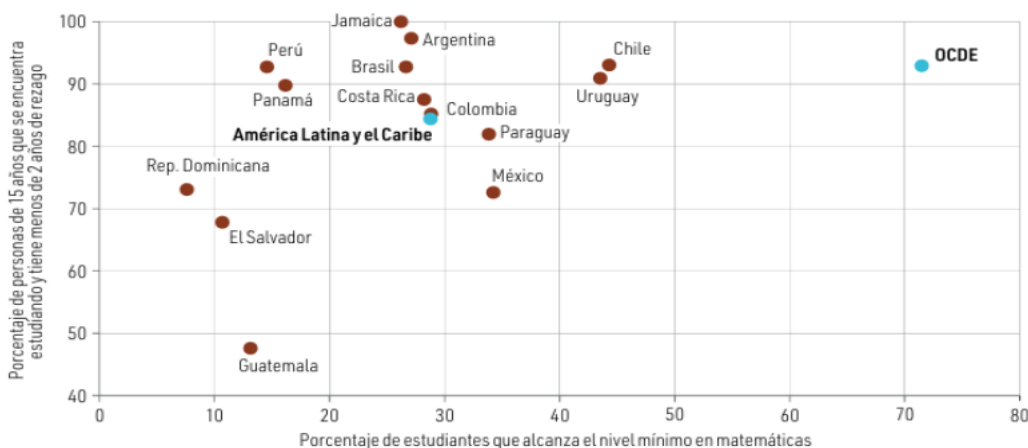
Figura N°21. América Latina (18 países): Población en Situación de Pobreza Extrema y de Pobreza, 1990-2024 y Proyecciones para 2025 (%)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). ^aPromedio ponderado. Países incluidos de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Sin embargo, la desigualdad en ALC no se expresa únicamente en la distribución del ingreso. También se manifiesta en el acceso desigual a educación, empleo, infraestructura, servicios básicos y oportunidades de desarrollo. En el ámbito educativo, el promedio regional se ubica por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tanto en permanencia escolar como en niveles de aprendizaje. En 2022, alrededor del 85% de los jóvenes de 15 años de la región se encontraba escolarizado y con menos de dos años de rezago, frente a cerca del 93% en la OCDE. Al mismo tiempo, solo alrededor del 29% de los estudiantes de la región alcanzaba el nivel mínimo en matemáticas, muy por debajo del 71% observado en la OCDE.

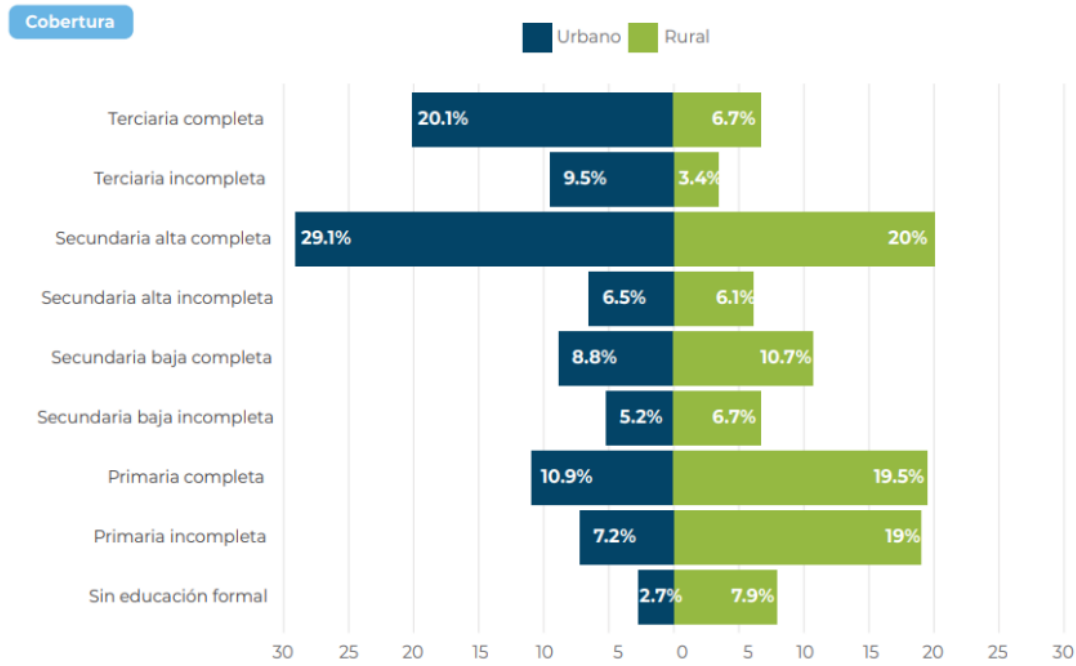
Figura N°22. América Latina y el Caribe (14 países) y OCDE (33 países): Escolarización y Desempeño Mínimo en Matemáticas, 2022 (%)



Fuente: CEPAL, sobre la base de OCDE. (2023). PISA 2022 Results. OECD Publishing. ^aPromedio simple. Países incluidos de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Países incluidos de la OCDE: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Lituania, Letonia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Suecia, Suiza y Türkiye. ^bEl nivel mínimo es el nivel 2 de logro en la prueba de matemáticas.

Por otro lado, las desigualdades educativas presentan, además, un marcado sesgo territorial. En promedio, la mitad de los adultos de 25 a 64 años no ha completado la educación secundaria alta y, en las zonas rurales, el 26.9% ni siquiera completó la educación primaria, frente al 9.9% en zonas urbanas. La continuidad educativa también muestra brechas persistentes: en áreas urbanas, cerca del 90% de los estudiantes completa la secundaria baja y el 76% la secundaria alta, mientras que en zonas rurales estas proporciones descienden a 79.5% y 60.1%, respectivamente. El acceso a educación superior también es significativamente menor: 22.5% en zonas urbanas y apenas 9.4% en zonas rurales (Banco Interamericano de Desarrollo - BID, 2026).

Figura N°23. Distribución de la Población Adulta (25-64 años) Según Máximo Logro Educativo, Promedio ALC (2023)



Fuente: CIMA (2025) con base en encuestas continuas de hogares. Extraído de: BID (2026).

En educación secundaria, el 55% de los estudiantes de ALC presenta bajo desempeño en lectura, el 75% en matemáticas y el 5% en ciencias. Entre los estudiantes rurales, la situación es aún más crítica: el 75% no alcanza niveles mínimos en lectura y ciencias, y casi el 90% no lo hace en matemáticas. A ello se suma que solo el 24% de los estudiantes rurales asiste a centros educativos con recursos digitales adecuados, frente al 57% en zonas urbanas. En términos de culminación del grado académico, solo el 68.2% de los jóvenes logra completar el nivel secundario (BID, 2026).

En este contexto, la inclusión social requiere una mirada amplia. No se trata únicamente de reducir la pobreza monetaria, sino de cerrar brechas persistentes en ingresos, logros educativos, inserción laboral, vivienda, acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Por ello, avanzar hacia una mayor inclusión social exige políticas sostenidas que actúen simultáneamente sobre la pobreza y la desigualdad rural, la vivienda social, el rezago educativo y su relación con el empleo.

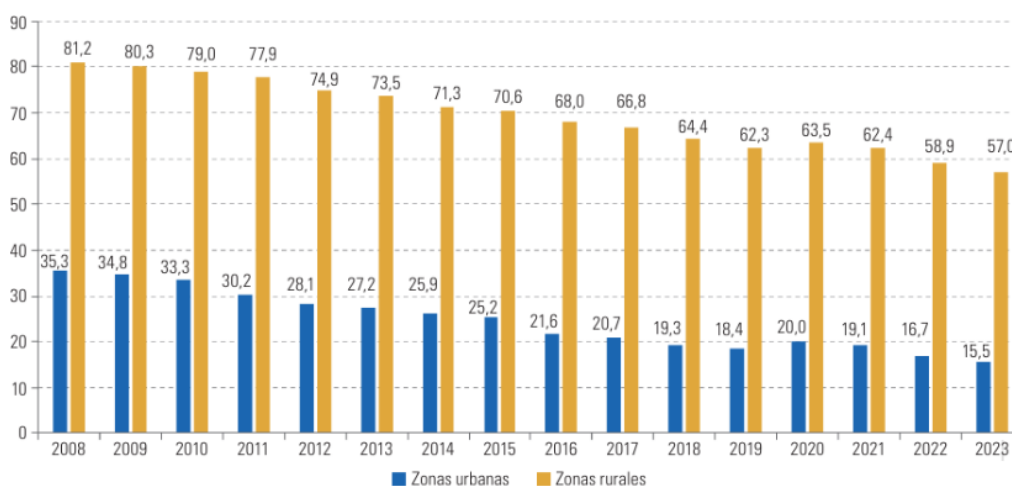
- **Apoyo al sector rural**

La inclusión rural es una de las áreas donde se puede generar un mayor impacto sobre los niveles de pobreza y la desigualdad. Esto se debe a que en las zonas rurales suelen concentrarse varios factores de vulnerabilidad de manera simultánea, tales como, menores ingresos, menor acceso a servicios básicos, mayor empleo informal, menos conectividad y mayores dificultades para acceder a financiamiento. En ese sentido, el problema de sector rural no se limita a la producción agrícola, sino que involucra condiciones más amplias de bienestar, acceso a oportunidades y desarrollo territorial.

Dentro de este escenario, la brecha en agricultura ocupa un lugar central, porque una proporción significativa de los hogares rurales depende de actividades agropecuarias para sostener sus ingresos, pero lo hace en condiciones de fuerte desventaja frente a otros sectores y frente a productores de mayor escala. Estas brechas se expresan en menores posibilidades de inversión, acceso limitado a infraestructura y servicios, baja incorporación tecnológica y mayores dificultades para mejorar productividad, estabilizar ingresos y acceder a mercados.

En 2023, la pobreza multidimensional²² afectó a 57% de la población rural, mientras que en las áreas urbanas la incidencia fue de 15.5%. Asimismo, alcanzó al 50.6% de la población indígena, frente al 18.5% de la población no indígena (CEPAL, 2025a). Con lo cual, ciertos grupos enfrentan barreras adicionales vinculadas no solo a su situación económica, sino también a su ubicación territorial, a la falta de servicios públicos adecuados y a procesos históricos de exclusión. Y, aunque la escala de los programas orientados a cerrar esta brecha aún es limitada, su incorporación en la agenda de inclusión representa un avance importante, porque implica transitar desde una oferta general de servicios hacia instrumentos más focalizados, con mayor atención a las realidades territoriales, productivas y sociales de estos grupos.

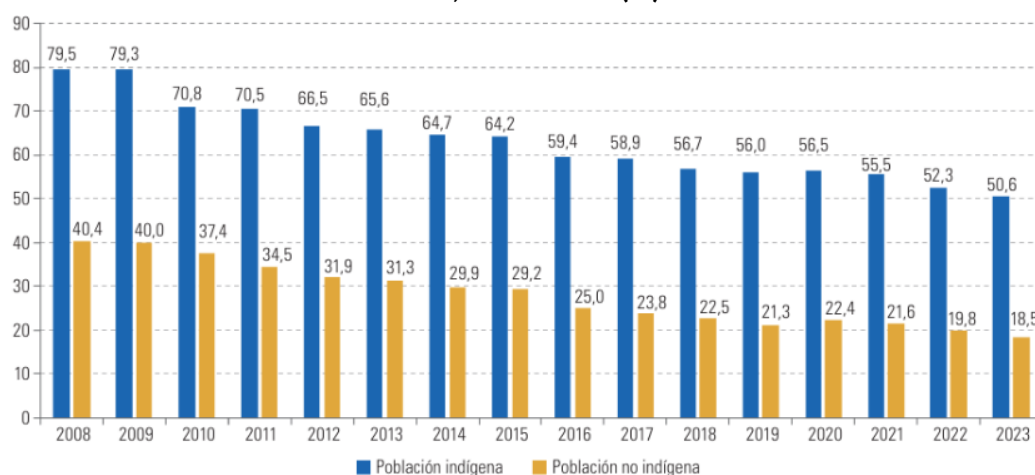
Figura N°24A. América Latina (14 países)^a: incidencia de la pobreza multidimensional, por zona de residencia, 2008-2023 (%)



Nota: Las cifras corresponden al promedio ponderado de la región. ^aBolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

²² La CEPAL define la pobreza multidimensional como una medida no monetaria que identifica privaciones simultáneas en dimensiones clave del bienestar. Su Índice de Pobreza Multidimensional para América Latina se organiza en cuatro dimensiones, vivienda, salud, educación y empleo y pensiones.

Figura N°24B. América Latina (9 países)^a: Incidencia de la Pobreza Multidimensional, por Etnia, 2008-2023 (%)



Nota: ^aBolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2025a).

- **Infraestructura y Vivienda social**

La infraestructura social puede definirse como el conjunto de activos físicos y digitales que sostienen la provisión de servicios necesarios para satisfacer necesidades básicas de la población. Esta infraestructura no es un componente accesorio del desarrollo, sino una base material para elevar productividad, fortalecer resiliencia y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Actualmente, a escala global, la brecha anual de financiamiento para alcanzar los ODS vinculados con salud, educación, agua y saneamiento asciende a aproximadamente US\$800,000 millones por año hasta 2030. Siendo que, entre 2019 y 2023, los bancos multilaterales de desarrollo asignaron en promedio alrededor del 22% de su cartera a sectores sociales centrales —como salud, educación, vivienda y agua y saneamiento—, alcanzando en 2023 dichos compromisos los US\$52 mil millones²³.

En ALC, esta labor se complementa mediante la acción de los Banco Nacionales de Desarrollo (BND), que constituyen una fuente relevante de financiamiento para infraestructura social y movilización de capital privado hacia sectores con alto impacto social. Desde esta perspectiva, la experiencia regional muestra que los BND cumplen al menos cuatro funciones estratégicas:

- Proveer financiamiento de largo plazo y condiciones compatibles con la naturaleza de los activos sociales;
- Territorializar la inversión, llegando a municipios, entidades subnacionales, empresas públicas locales, asociaciones comunitarias y constructoras que ejecutan proyectos con fuerte impacto social;
- Combinar instrumentos financieros y no financieros, incluyendo redescuento, crédito directo, garantías, estructuración y asistencia técnica; y,
- Articular la inversión con objetivos de calidad del servicio, inclusión y resiliencia.

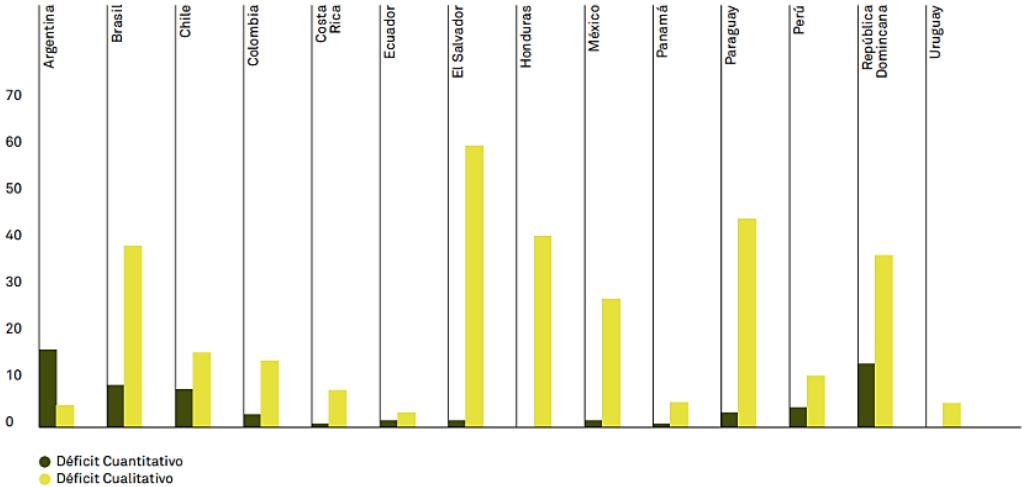
En materia habitacional, el panorama regional de 2024 muestra que el problema sigue teniendo un carácter estructural. El déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, continúa siendo una de las brechas más relevantes de ALC y, en promedio, el 20% de los hogares urbanos presenta carencias severas. Aunque se observa una reducción lenta del déficit cuantitativo, persiste un peso mayor del déficit cualitativo, asociado a la precariedad del parque habitacional

²³ Social Infrastructure in Focus: The Role of Multilateral Development Banks (2025). [https://coebank.org/documents/1744/Social Infrastructure in Focus-The Role of MDBs.pdf?expires=1773155796](https://coebank.org/documents/1744/Social%20Infrastructure%20in%20Focus-The%20Role%20of%20MDBs.pdf?expires=1773155796).

existente y al crecimiento de la autoconstrucción informal como respuesta a la crisis de asequibilidad (CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, e Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, 2025).

A ello se suma que la región es crecientemente urbana, 81.2% de su población vive en ciudades, por lo que las carencias de vivienda y servicios urbanos adquieren una escala estructural y afectan de manera directa la integración territorial, la cohesión social y la productividad urbana (CEPAL, 2024). Y que, esta situación se ve agravada por la focalización insuficiente de los subsidios hipotecarios y la ausencia o debilidad de instrumentos estatales intermedios, como garantías, seguros de crédito o mecanismos de fondeo de largo plazo, particularmente necesarios para ampliar el acceso de hogares de bajos ingresos e ingresos informales.

Figura N°26. Déficit/Stock de Viviendas Urbanas (2024)



Fuente: CAF. Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025.

Desde esta perspectiva, la exclusión social también se expresa en la falta de infraestructura y servicios esenciales, especialmente en los territorios más rezagados. De acuerdo con la base de datos del Banco Mundial, en 2024 ALC alcanzó 79% de cobertura de agua potable gestionada de forma segura y 51% de cobertura de saneamiento gestionado de forma segura. Aunque estas cifras muestran avances, también revelan déficits importantes. Una parte significativa de la población todavía no accede a servicios básicos en condiciones adecuadas, lo que afecta directamente su salud, bienestar y productividad. En el caso de la vivienda, el problema se agrava porque la escasa oferta de soluciones asequibles y el limitado acceso al crédito excluyen a amplios sectores de bajos ingresos del mercado formal de suelo y vivienda. Esto obliga a muchas familias a resolver sus necesidades habitacionales mediante mecanismos informales o en entornos urbanos precarios (BID, 2024).

La falta de infraestructura básica y de vivienda adecuada tiene efectos acumulativos. Cuando un hogar no cuenta con agua segura, saneamiento, conectividad o una vivienda localizada en entornos con acceso efectivo a servicios y oportunidades, aumentan los riesgos sanitarios y se reducen las posibilidades de desarrollo, especialmente para niñas, niños, mujeres y personas mayores. Asimismo, cuando un territorio carece de infraestructura educativa, transporte o vivienda integrada al tejido urbano, las oportunidades de movilidad social son menores. Por ello, la inversión social en infraestructura y vivienda no es solo una cuestión de obras públicas, sino una forma concreta de ampliar inclusión. En esa dirección, la evidencia subraya la necesidad de integrar las políticas de vivienda con planificación urbana, movilidad, desarrollo productivo y

adaptación al cambio climático, de modo que la vivienda social deje de tratarse como un componente aislado y pase a concebirse como parte de una estrategia de desarrollo territorial inclusivo (CEPAL, 2024; BID, 2024).

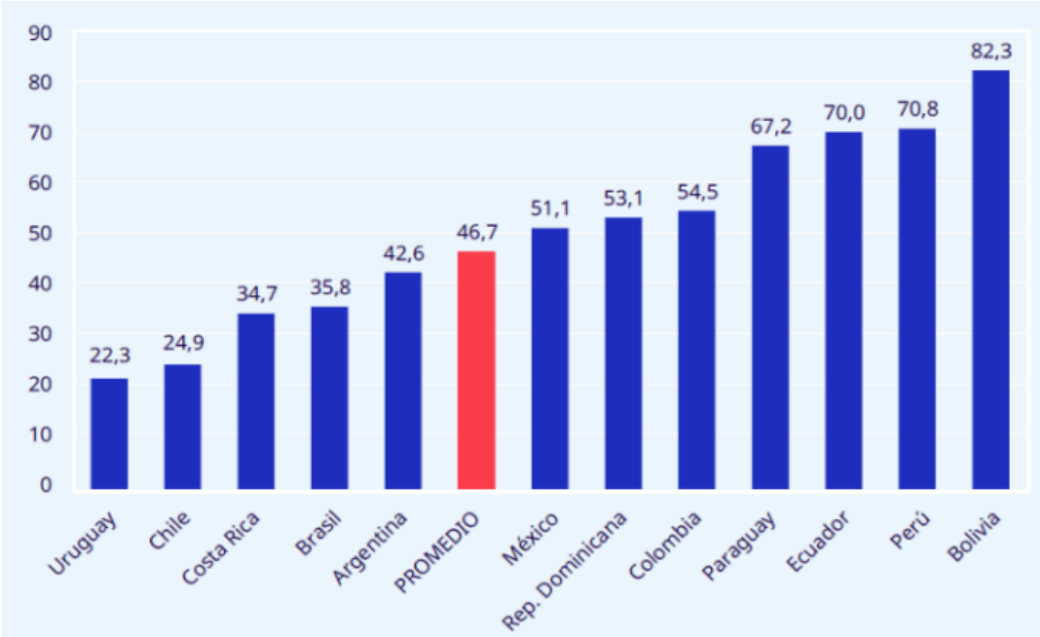
- **Educación y empleo**

La educación también forma parte central de la agenda de inclusión. Las brechas educativas siguen siendo profundas en ALC, especialmente entre áreas urbanas y rurales. Según CEPALSTAT, en 2024 persistían diferencias marcadas en la culminación de la educación secundaria. En áreas urbanas, el 77.9% de las mujeres y el 71.5% de los hombres de 20 a 24 años había completado este nivel educativo, mientras que en áreas rurales las tasas descendían a 59.6% y 53.5%, respectivamente.

El empleo juvenil es otra dimensión clave de la inclusión social, porque las dificultades que enfrentan los jóvenes al inicio de su vida laboral suelen tener efectos duraderos sobre sus ingresos futuros y sus posibilidades de desarrollo. En ALC, muchos jóvenes no solo enfrentan mayores dificultades para encontrar empleo, sino que además suelen insertarse en ocupaciones inestables, informales y de baja productividad. Dichas brechas se relacionan con un rasgo estructural del mercado laboral de la región: la informalidad. Esto limita, por una parte, los ingresos estables y el historial crediticio de las personas, y, por otro lado, el acceso a los mecanismos contributivos de protección social. En el primer semestre del año 2025, la tasa de informalidad se ubicó en 46.7% para ALC, con una participación laboral cercana a 63% y una tasa de empleo de 60% (OIT, 2025).

Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reporta que las tasas de participación y de empleo de los hombres sobrepasan en 22 puntos porcentuales (p.p.) a las de las mujeres; que el desempleo femenino es 2 p.p. mayor; y que el desempleo juvenil, entre 15 y 24 años, es casi tres veces superior al de las personas adultas. Asimismo, la informalidad alcanza el 56% entre los jóvenes, frente al 43% entre los adultos.

Figura N°27. Tasa de Informalidad por País. 1S 2025 (%)



Fuente: OIT (2025), sobre la base de SIALC/OIT.

Estas tendencias tienen implicaciones relevantes para la política pública. Si los jóvenes ingresan al mercado laboral en condiciones de precariedad, o si las mujeres continúan enfrentando barreras para participar y mantenerse en el empleo, se reduce la posibilidad de acumular experiencia, ingresos, ahorro, estabilidad e historial financiero. Por ello, la inclusión social requiere políticas más amplias que intervenciones aisladas. Se necesitan programas que combinen financiamiento, capacitación, apoyo al emprendimiento, asistencia técnica, educación y mecanismos que faciliten una inserción productiva más estable, con especial atención a las brechas por edad, género y territorio.

4.2. Inclusión territorial

La infraestructura económica y social opera como un habilitador de inclusión porque reduce costos de acceso a servicios básicos, articula territorios, incrementa productividad y amplía oportunidades, especialmente para hogares vulnerables y MIPYMES. En ALC, el déficit no es solo de cobertura, sino también de calidad, continuidad del servicio, mantenimiento, resiliencia y asequibilidad.

La región debería invertir al menos 3.12% del producto interno bruto (PIB) cada año para ampliar y mantener infraestructura. De ese total, el 41% debería destinarse a mantenimiento y reposición, lo que refleja la magnitud del rezago en preservación de activos y continuidad operativa (CAF, 2024). En paralelo, el déficit de financiamiento para los ODS en ALC se estima en US\$99,000 millones por año, lo que refuerza el carácter estructural de la brecha fiscal y la necesidad de priorización, movilización de recursos y uso más eficiente del financiamiento disponible (OCDE et al., 2024).

En ese sentido, la infraestructura cambia vidas cuando se traduce en mejoras verificables de bienestar y productividad —como, menores tiempos de transporte, acceso seguro al agua y saneamiento, energía confiable y asequible, conectividad digital efectiva, y provisión estable de servicios públicos—, y mejoras tienen efectos directos sobre salud, empleo, ingresos, educación y resiliencia, ya que la continuidad de los servicios es un determinante central de la capacidad de los hogares y territorios para enfrentar choques económicos, sociales y climáticos (BID, 2025).

- **Agua y saneamiento**

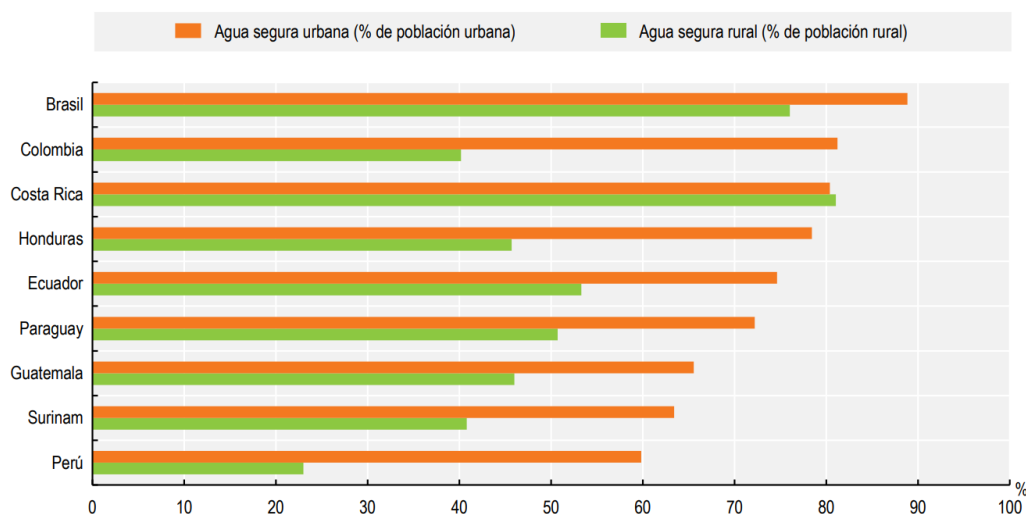
En ALC, la brecha de infraestructura hídrica no se manifiesta únicamente en falta de cobertura. También se expresa, de manera creciente, en desigualdad en calidad, continuidad y seguridad de los servicios. Aunque la región ha registrado avances en cobertura básica durante las últimas décadas, persisten rezagos significativos en acceso seguro al agua potable y saneamiento gestionado de manera adecuada, especialmente en zonas rurales, periferias urbanas y territorios expuestos a alta vulnerabilidad climática.

Alrededor de 161 millones de personas, es decir, una de cada cuatro en ALC, carecen de servicios de agua potable gestionados de forma segura, mientras que cerca de 431 millones, equivalentes a siete de cada diez habitantes, no cuentan con servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Estas brechas presentan además un marcado sesgo territorial. En 2022, apenas 23% de la población rural de Perú tenía acceso a agua potable gestionada de forma segura, frente a 60% en las zonas urbanas; en Colombia, la relación fue de 40% frente a 81%, y en Surinam, de 41% frente a 63% (OECD et al., 2026).

A ello se suma que la infraestructura hídrica de ALC sigue mostrando debilidades estructurales; el almacenamiento de agua superficial representa solo 7% de los recursos hídricos renovables, muy por debajo de 24% en Estados Unidos y 29% en China, y en varios países el envejecimiento

e insuficiencia de la infraestructura contribuyen a pérdidas de agua de hasta 60%, afectando la confiabilidad y seguridad del servicio (OECD et al., 2026).

Figura N°28. Población con Acceso a Servicios de Agua Potable Gestionados de forma Segura, Zonas Urbanas Frente a Zonas Rurales (%), En Algunos Países de ALC, 2022



Nota: % de la población con acceso a agua potable gestionada de forma segura proveniente de fuentes mejoradas, que están disponibles en los hogares, son accesibles cuando se necesitan y están libres de contaminación fecal y química prioritaria. Las fuentes de agua mejoradas incluyen agua corriente, pozos perforados, pozos entubados, pozos excavados protegidos, manantiales protegidos y agua envasada o suministrada.

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Comisión Europea. (2026). *Perspectivas económicas de América Latina 2025: Impulsando y financiando la transformación productiva*. OECD Publishing.

En la actualidad, por tanto, el desafío no consiste solo en extender redes, sino en garantizar que el servicio sea continuo, de calidad y resiliente frente a interrupciones y eventos extremos. En este contexto, se estima que ALC necesita movilizar alrededor de US\$372.000 millones adicionales en los próximos cinco años para alcanzar el acceso universal a agua y saneamiento hacia 2030, monto equivalente a una inversión anual inferior a 1,3% del PIB regional. Esta cifra, aunque elevada, sigue siendo menor que los costos económicos recurrentes asociados a la escasez hídrica, las pérdidas de productividad, los impactos en salud pública y los daños derivados de desastres relacionados con el agua (Sanitation and Water for All, 2024).

En este aspecto, la expansión de infraestructura no puede limitarse al aumento del número de conexiones domiciliarias. La infraestructura inclusiva en agua y saneamiento debe asegurar agua continua y segura, saneamiento con gestión adecuada y capacidad de respuesta frente a sequías, inundaciones y otras perturbaciones que afectan la prestación de servicios. Esto incluye inversiones en redes de distribución, tratamiento, almacenamiento, drenaje, reducción de pérdidas, protección de fuentes y soluciones descentralizadas en territorios donde las alternativas convencionales no son viables. La relevancia de estas inversiones radica en que el acceso efectivo a agua potable y saneamiento define condiciones básicas para la salud, la asistencia escolar, la productividad del trabajo y la sostenibilidad de las actividades económicas cotidianas. Las brechas en este sector tienen efectos desproporcionados sobre hogares de menores ingresos, asentamientos informales y comunidades rurales, donde la exposición a interrupciones del servicio y a riesgos sanitarios tiende a ser mayor (SWA, 2024; IDB, 2025).

Además, ALC concentra 22% de las inundaciones más severas del mundo, proporción equivalente a tres veces su frecuencia a escala global. Asimismo, desde 2000 ALC ha registrado 1,632 desastres naturales, con más de 260,000 muertes, más de 200 millones de personas

afectadas y pérdidas superiores a US\$398,000 millones. Estos datos evidencian que la infraestructura hídrica debe diseñarse y gestionarse no solo para ampliar cobertura, sino también para resistir choques climáticos y sostener la continuidad del servicio en contextos de creciente variabilidad hidrológica. En consecuencia, la inclusión en agua y saneamiento no depende exclusivamente de la existencia de obras, sino de su capacidad para garantizar acceso seguro, continuo y resiliente, particularmente en los territorios y grupos poblacionales más expuestos a riesgos y carencias estructurales (BID, 2025).

Figura N°29. Infraestructura Inclusiva en Agua y Saneamiento



Fuente: Elaboración propia.

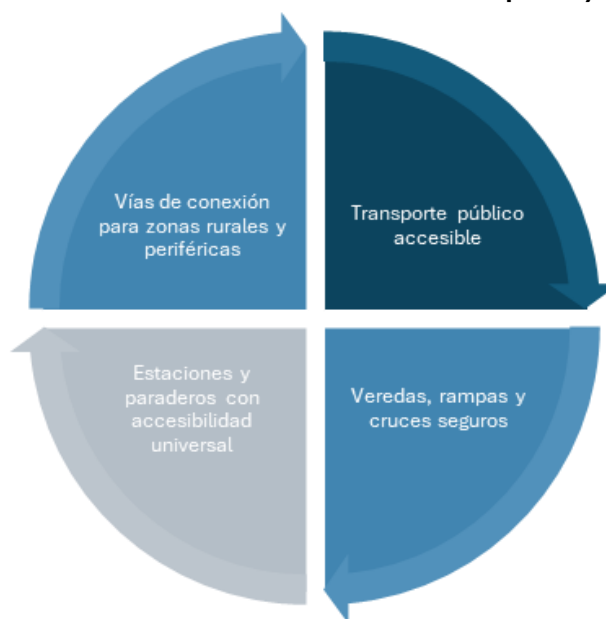
- **Transporte y movilidad**

La inversión en infraestructura de transporte tiene efectos sociales directos en la medida en que mejora la seguridad vial, reduce tiempos y costos de desplazamiento, y amplía el acceso de la población al empleo, la educación, la salud y otros servicios urbanos esenciales. Esta dimensión es especialmente relevante en ALC, una región marcadamente urbana, donde competitividad e inclusión dependen en gran parte de la confiabilidad del transporte, la energía y la conectividad. En este contexto, la infraestructura de transporte no solo facilita la movilidad de personas y mercancías, sino que también reduce costos de transacción y fortalece la integración territorial y productiva.

El desafío, sin embargo, no se limita a expandir la cobertura. ALC mantiene una brecha estructural de infraestructura que restringe tanto la productividad como la inclusión. Durante la última década, la inversión en infraestructura en ALC representó en promedio apenas 1.8% del PIB, cuando para cubrir las necesidades mínimas de agua y saneamiento, electricidad, transporte y telecomunicaciones se requeriría una inversión anual equivalente a 3.12% del PIB hasta 2030. Solo en transporte, electricidad y telecomunicaciones, las necesidades acumuladas ascienden a US\$577,000 millones, US\$971,000 millones y US\$293,700 millones, respectivamente (OCDE et al., 2026). Este rezago afecta la competitividad, pero también tiene consecuencias distributivas. Los hogares de menores ingresos dependen más de la infraestructura pública y destinan una mayor proporción de sus ingresos a servicios de menor calidad (16%, frente a 13.5% en los hogares de mayores ingresos).

En materia ambiental, la relevancia del transporte urbano es aún mayor. En las áreas urbanas de ALC, la flota de vehículos privados genera cerca de 75% de las emisiones de dióxido de carbono y 82% de las partículas finas en suspensión (PM10)²⁴, ambas asociadas a efectos adversos sobre la salud. Esto refuerza la importancia de avanzar en sistemas de transporte masivo, electrificación de la movilidad y soluciones urbanas menos intensivas en carbono (OCDE et al., 2026). A la vez, ALC enfrenta una creciente exposición a desastres naturales relacionados con el clima, que aumentaron de forma considerable entre 1975 y 2024 y afectan directamente la continuidad de servicios de transporte, energía y agua. En este marco, la resiliencia de la infraestructura deja de ser un atributo complementario y se convierte en una condición básica para sostener la inclusión territorial, especialmente en contextos urbanos vulnerables.

Figura N°30. Infraestructura inclusiva en transporte y movilidad



Fuente: Elaboración propia.

- **Energía asequible**

La energía, cuando es confiable y asequible, sostiene la actividad económica, la seguridad alimentaria, los sistemas de salud, la conectividad digital y la continuidad de los servicios públicos. En el contexto de la transición energética, el desafío no se limita a aumentar la generación renovable, sino que también implica expandir y modernizar las redes para garantizar confiabilidad y flexibilidad. En este marco, los desafíos estructurales, junto con las restricciones regulatorias y financieras, ralentizan la expansión oportuna de este tipo de infraestructura, que resulta fundamental para evitar interrupciones y problemas de calidad del suministro que afectan de manera desproporcionada a los hogares vulnerables y a MIPYMES, las cuales suelen carecer de respaldo energético y de capacidad para absorber pérdidas (BID, 2024b).

La principal restricción regional no radica únicamente en la capacidad de generación, sino en la insuficiente expansión y modernización de las redes. El BID estima que ALC requeriría entre US\$6,000 millones y US\$8,000 millones anuales hasta 2030 para expandir y modernizar su infraestructura de transmisión, mientras que la inversión observada en los últimos años se ha situado entre US\$2,000 millones y US\$4,000 millones anuales. En 2022, la inversión regional

²⁴ Son contaminantes atmosféricos con un diámetro menor o igual a 10 micrómetros, capaces de ingresar al sistema respiratorio y generar efectos negativos sobre la salud.

en transmisión fue de aproximadamente US\$3,300 millones, todavía por debajo de las necesidades estimadas (BID, 2025b).

Este rezago es especialmente relevante en una región donde más del 60% de la generación eléctrica ya proviene de fuentes renovables, principalmente hidroelectricidad, con una participación creciente de energía solar y eólica, lo que exige redes más robustas, flexibles y resilientes para integrar esa oferta de manera eficiente. Esto afecta la confiabilidad y continuidad del suministro, con consecuencias más severas para hogares vulnerables y MIPYMES, que suelen carecer de respaldo energético y de capacidad de absorción de pérdidas. A ello se suma que las interrupciones climáticas y los eventos extremos también afectan de forma creciente los servicios de infraestructura, incluidos los energéticos, amplificando los costos económicos y sociales de la baja resiliencia (BID, 2025a).

Figura N°31. Infraestructura Inclusiva en Energía



Fuente: Elaboración propia.

- **Conectividad digital efectiva**

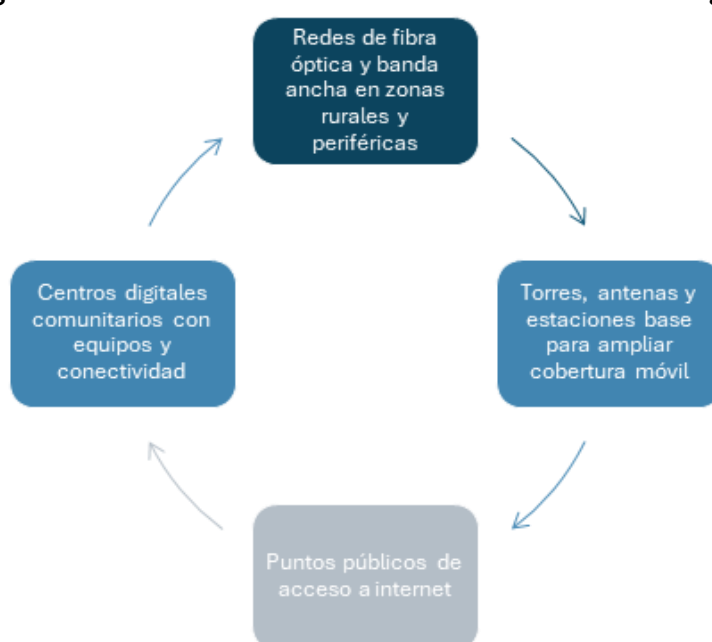
La infraestructura digital se ha convertido en un habilitador transversal de inclusión, al determinar el acceso a información, educación, servicios financieros, trámites públicos, mercados y oportunidades productivas. Sin embargo, el problema central en ALC no es únicamente la falta de red, sino es la brecha entre cobertura y uso. La Asociación GSM (GSMA) reporta que el *coverage gap* afecta a 7% de la población regional, equivalente a 44 millones de personas, mientras que el 28%, equivalente a 174 millones, vive en áreas con cobertura de banda ancha móvil, pero no usa internet móvil por barreras de asequibilidad, habilidades digitales o desconfianza (GSMA, 2024a).

Esta evidencia sugiere que la expansión de infraestructura digital, aunque necesaria, no resulta suficiente para cerrar las brechas de inclusión digital. La disponibilidad de cobertura no garantiza, por sí sola, apropiación ni uso productivo de la conectividad. En consecuencia, el diseño de políticas e inversiones debe ir más allá de la extensión física de redes y considerar intervenciones complementarias orientadas a transformar conectividad potencial en conectividad efectiva. Ello implica promover el acceso a dispositivos adecuados, fortalecer la alfabetización digital, mejorar los estándares de ciberseguridad y desarrollar contenidos y

servicios pertinentes para las necesidades de la población. Del mismo modo, resulta fundamental que los servicios públicos digitales sean accesibles, confiables y sencillos de utilizar, de forma que la infraestructura digital se traduzca en una mejora concreta del bienestar y de las oportunidades económicas y sociales (GSMA, 2024a).

Desde esta perspectiva, la infraestructura inclusiva en conectividad digital no debe entenderse únicamente como despliegue de fibra óptica, redes móviles o centros de acceso, sino como un ecosistema habilitante que permite a personas, empresas y comunidades utilizar de manera efectiva las tecnologías disponibles. Esto es particularmente importante en zonas rurales, periurbanas y de menor ingreso, donde las brechas de conectividad se superponen con rezagos en educación, bancarización y acceso a servicios públicos. Por ello, una estrategia de inclusión digital requiere combinar inversión en infraestructura con medidas de demanda y fortalecimiento institucional, de modo que la conectividad sea una herramienta real de integración social, territorial y productiva.

Figura N°32. Infraestructura Inclusiva en Conectividad Digital



Fuente: Elaboración propia.

- **“Calidad” como criterio de inclusión**

El énfasis en mantenimiento y resiliencia es central porque, cuando la infraestructura falla, el costo es regresivo: recae con mayor intensidad sobre hogares, empresas y territorios con menor capacidad de adaptación. Una falla de infraestructura no solo implica afectación temporal del servicio, sino también mayores costos de movilidad, menor acceso a salud y educación, interrupciones productivas y deterioro de las condiciones de bienestar. Desde esta perspectiva, la resiliencia no es un atributo accesorio, sino un componente esencial de la función social y económica de la infraestructura, en la medida en que reduce costos de ciclo de vida, protege la continuidad operativa y disminuye la exposición de la población a pérdidas recurrentes.

Una parte sustantiva de las necesidades de financiamiento no se explica por la falta de infraestructura nueva, sino por la insuficiencia de recursos destinados al mantenimiento, reposición de activos y rehabilitación de sistemas existentes. En otras palabras, el desafío no consiste solo en expandir cobertura, sino en preservar y modernizar la infraestructura instalada para evitar su deterioro funcional y su pérdida de capacidad de servicio. Esto es particularmente

importante en ALC, donde amplios segmentos de infraestructura física operan con rezagos de conservación, obsolescencia tecnológica o exposición creciente a amenazas climáticas. Incorporar el mantenimiento desde la etapa de diseño y garantizar esquemas sostenibles de operación y reposición resulta indispensable para evitar que la inversión inicial pierda efectividad en el tiempo y para asegurar que la infraestructura mantenga su valor económico y social (BID, 2024).

La infraestructura no solo presenta déficits en cantidad o calidad, sino también en distribución espacial. La evidencia disponible muestra que, dentro de un mismo país, pueden persistir diferencias muy significativas entre áreas urbanas y rurales en el acceso a servicios de conectividad, con brechas cercanas a 50 p.p. en acceso a internet. Esto implica que la calidad de la infraestructura, la continuidad del servicio y la resiliencia frente a interrupciones también están desigualmente distribuidas en el territorio. En consecuencia, los costos asociados a fallas o falta de infraestructura tienden a concentrarse en zonas rezagadas, donde las alternativas de provisión son más escasas, los tiempos de desplazamiento son mayores y el costo económico y social de una interrupción resulta relativamente más alto. La desigualdad territorial, por tanto, no es un resultado marginal, sino una dimensión estructural del problema de infraestructura en ALC (CEPAL, 2024).

Por lo cual, se puede decir que la infraestructura cambia vidas cuando combina cuatro atributos de manera simultánea:

- **expansión**, necesaria para incorporar nuevos usuarios y territorios, aunque insuficiente si el servicio permanece sujeto a fallas frecuentes, costos prohibitivos o baja calidad;
- **confiabilidad**, permite que la infraestructura cumpla de manera efectiva su función económica y social;
- **resiliencia**, asegura que dicha función se mantenga frente a perturbaciones y *shocks*; y,
- **asequibilidad**, determina que los beneficios del servicio sean efectivamente accesibles para hogares, empresas y comunidades con menores recursos.

4.3. Inclusión financiera

La inclusión financiera²⁵ se ha convertido en una herramienta relevante para promover inclusión social y productiva. Su importancia radica en que permite a hogares y unidades económicas gestionar mejor sus recursos, enfrentar emergencias, invertir, impulsar pequeños negocios y reducir la dependencia de mecanismos informales o costosos. Sin embargo, para que contribuya efectivamente al desarrollo, no debería limitarse a entenderse solo como la apertura de cuentas, sino como el acceso y uso efectivo de productos financieros adecuados, asequibles, seguros y pertinentes.

En 2024, el 69.7% de las personas adultas de ALC reportó tener una cuenta bancaria, lo cual si bien representa un crecimiento de 32.2 p.p. frente a 2011 y 2.6 p.p. de 2021, esto aún implica una brecha importante para alcanzar una población adecuadamente bancarizada. Esta brecha se acentúa aún más en función del género y la condición socioeconómica de las personas. La tenencia de cuentas alcanza el 65.9% en mujeres, un 59.5% en los adultos de hogares con menores ingresos²⁶, 58.4% entre quienes están fuera de la fuerza laboral y un 65% en los lugares rurales (World Bank, 2025c).

²⁵ En términos sencillos, significa que las personas puedan acceder y usar servicios financieros básicos, como cuentas, medios de pago, ahorro, crédito o dinero móvil, de manera segura y adecuada a sus necesidades.

²⁶ Debajo del percentil 40.

En este sentido, el paso desde el acceso hacia el uso es clave para hacer que la inclusión financiera se convierta en inclusión social. En 2024, el 59.4% de las personas adultas de ALC realizaron o recibieron pagos digitales y el 42.5% hicieron pagos digitales a comercios; lo cual denota una notable adopción de medios de pago electrónicos, en especial para las transacciones cotidianas. Aun así, la inclusión mediante digitalización tiene un camino por recorrer tanto en el sector público y el privado, dado que menos del 20% de las personas adultas recibieron pagos del gobierno (18.8%) o salarios del sector privado (17.4%) en una cuenta; por lo que existen espacios para profundizar la bancarización vinculada a transferencias públicas, nómina y pagos recurrentes (World Bank, 2025c).

Por otro lado, el acceso a ahorro y crédito formales sigue siendo comparativamente bajo, aun cuando se constituyen como fundamental para contrarrestar *shocks* y llevar a cabo procesos de inversión para la movilidad social. En 2024, el 45.4% de las personas adultas de ALC ahorró formal o informalmente y el 53.4% recurrió a algún tipo de endeudamiento formal o informal; en contraste, solo el 28.8% ahorró formalmente mediante el uso de una cuenta—en comparación con el 17.9% en 2021—, y el 28.5% obtuvo crédito formal (World Bank, 2025c).

En este contexto, evidencia reciente para ALC apuntaría una clara posibilidad de que los sistemas de pago inmediato (SPI) ayuden a cerrar dichas brechas. Siendo que, luego de la introducción de un SPI, la proporción de personas que toma préstamos de una institución financiera podría aumentar en 3.9 p.p., al tiempo que la proporción de personas que ahorra formalmente aumentaría en 3.0 p.p. (Aurazo et al., 2025). Esto cobra particular relevancia para la banca nacional de desarrollo, dado que parte de su contribución a la inclusión financiera puede consistir en apoyar infraestructura de pagos interoperable, reducir costos de transacción y promover productos sencillos, seguros y adecuados para que el crédito y el ahorro formales — tanto para el sector público como privado—, sean más accesibles y frecuentes.

Cuadro N°6. Inclusión Financiera en ALC (2024)

Categoría	Indicador	Valor (%)
Cuenta	Adultos	69.7
Cuenta por tipo	Cuenta en banco o institución financiera similar	66.4
	Cuenta de dinero móvil	37.3
	Cuenta con acceso digital (uso con tarjeta o teléfono)	54.1
Cuenta por características	Mujeres	65.9
	Hogares de menores ingresos	59.5
	Fuera de la fuerza laboral	58.4
	Rural	65.0
Pagos digitales	Realizó o recibió pagos digitales	59.4
	Pago digital a comercios	42.5
	Pago de servicios en línea	34.8
	Recibió pagos del gobierno en una cuenta	18.8
	Recibió salario del sector privado en una cuenta	17.4
Ahorro y Crédito	Ahorró formal o informalmente	45.4
	Pidió prestado formal o informalmente	53.4
Resiliencia financiera	No sería difícil acceder a dinero en 30 días (adultos)	54.6
	Mujeres	47.5
	Hogares de menores ingresos	38.6
Conectividad móvil	Tiene teléfono móvil	88.7
	Mujeres	88.3
	Hogares de menores ingresos	84.5
	Tiene smartphone	69.8

	Mujeres	67.6
	Hogares de menores ingresos	61.1

Fuente: Banco Mundial, 2025

La inclusión financiera también se expresa como resiliencia financiera, entendida como la capacidad de los hogares para hacer frente a imprevistos sin recurrir a estrategias de alto costo. En ALC, el 54.6% de las personas adultas afirma que no le resultaría difícil conseguir dinero adicional en un plazo de 30 días. Sin embargo, esta proporción se reduce al 47.5% entre mujeres y al 38.6% en hogares de bajos ingresos.

Lo cual también va de la mano con la conectividad, pues esto condiciona el alcance de la digitalización y bancarización. Siendo que, si bien el 69.8% de la población tiene teléfono inteligente—cifra que se reduce al 61.1% en los hogares con menores ingresos—, aún persiste una brecha, lo que implica la necesidad de incorporar un enfoque mixto para abordarla, que combine innovación digital, canales presenciales o híbridos, y la alfabetización financiera —como medida de protección del consumidor—, para evitar que la transformación tecnológica reproduzca desigualdades (World Bank, 2025c).

Por ello, la inclusión financiera no puede entenderse solo como apertura de cuentas. Para que realmente contribuya a la inclusión social, debe ir acompañada de productos adecuados, presencia territorial, costos accesibles y educación financiera. De lo contrario, el acceso formal puede no traducirse en un uso efectivo o beneficioso. En este punto, la BND tiene una ventaja importante, ya que puede operar con criterios de cobertura social y territorial más amplios que la banca comercial.

Por otro lado, la inclusión financiera también se incorpora como un componente de la inclusión productiva, dado que el acceso a financiamiento permite determinar la capacidad de inversión, escalamiento y creación de empleo que puede tener una empresa, especialmente en unidades de menor tamaño. En ALC, las Mipymes representan el 99.5% de las empresas, 60% de la población empleada y alrededor de 25% del PIB regional (Altman & Sabato, 2023). Sin embargo, persisten restricciones significativas para el acceso a financiación. Se estima una brecha de financiamiento de US\$1.8 billones, que corresponden a 35% del PIB regional, para un conjunto de barreras vinculadas al bajo el acceso a instrumentos como garantías, y a restricciones de capacidades contables y de planificación en las mismas empresas (Altman & Sabato, 2023).

En la misma línea, la financiación alternativa²⁷ en ALC ascendió a US\$5,270 millones en 2020, siendo 86% de esa financiación destinada a MIPYMES, mostrando la importancia de los instrumentos de financiación innovadores y de marcos regulatorios proporcionales para ampliar opciones de fondeo (Altman & Sabato, 2023).

²⁷ Conjunto de instrumentos y canales de financiamiento no tradicionales, distintos al crédito bancario convencional, que permiten a personas y empresas —especialmente mipymes— acceder a recursos a través de plataformas digitales, inversionistas privados u otros mecanismos innovadores, como el *crowdfunding*, el *lending Fintech* o el *factoring* electrónico.

CAPITULO V. ACCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO

5.1. Banca de desarrollo y movilización de inversión hacia sectores estratégicos

Eslabón habilitante para transformar potencial productivo en inversión

La identificación de sectores estratégicos con alto potencial de crecimiento no garantiza, por sí sola, que la inversión se materialice. Numerosos proyectos vinculados a esas actividades enfrentan restricciones financieras importantes. Entre ellas destacan horizontes de maduración largos, elevados requerimientos de capital inicial, incertidumbre tecnológica o regulatoria y riesgos de mercado que superan los parámetros habituales del financiamiento bancario privado. Estas limitaciones son particularmente visibles en sectores como infraestructura, transición energética, manufactura avanzada e innovación tecnológica, donde la magnitud de las inversiones y la complejidad de los proyectos tienden a desbordar la capacidad de financiamiento tradicional.

Los bancos nacionales de desarrollo aportan capacidades que permiten cerrar brechas entre oportunidades productivas y financiamiento disponible. Operan con acceso a recursos de largo plazo, mandatos explícitos orientados al desarrollo económico y mayor disposición para asumir riesgos iniciales asociados a procesos de transformación productiva. Facilitan la canalización de financiamiento hacia proyectos con externalidades económicas o tecnológicas significativas, aunque todavía no reúnan condiciones suficientes para atraer capital privado en etapas tempranas (Ferraz, 2022). A partir de información reciente y considerando experiencias puntuales ilustrativas —**sin pretender un inventario exhaustivo de instituciones**—, se observa que esta contribución alcanza escalas relevantes. En 2024, el BNDES aprobó operaciones por US\$44 mil millones y canalizó recursos adicionales por US\$14 mil millones mediante garantías, con un énfasis creciente en infraestructura, industria, innovación, transición energética y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. Este tipo de intervenciones no solo amplía la disponibilidad de crédito, sino que también contribuye a dinamizar sectores estratégicos mediante instrumentos que combinan financiamiento directo e indirecto.

La contribución de los BND no se limita a la provisión directa de crédito. Sus intervenciones suelen abarcar la estructuración financiera de proyectos, la incorporación de instrumentos de mitigación de riesgos y la generación de condiciones que amplían la participación de inversionistas privados. En Brasil, es el caso del BNDES que ha complementado su acción crediticia con el uso de fondos de inversión y participación como inversionista ancla, movilizand recursos adicionales hacia infraestructura, innovación y cadenas productivas vinculadas a minerales estratégicos y transición energética. Este tipo de esquemas permite multiplicar el impacto del financiamiento público al apalancar capital privado en etapas donde la incertidumbre es más elevada.

Experiencias en otros países refuerzan esta lógica. En Colombia, la Financiera de Desarrollo Nacional ha participado en más de 50 procesos de estructuración desde su creación, asociados a un potencial de inversión cercano a US\$23 mil millones, y ha acumulado compromisos de financiamiento por US\$4 mil millones. Su intervención se extiende a lo largo del ciclo de los proyectos, desde la preinversión hasta la operación, mediante instrumentos de project finance, garantías, líneas de liquidez y soluciones financieras a medida, contribuyendo a transformar iniciativas en carteras financiables y atractivas para inversionistas. De manera similar, Banobras en México orienta su acción al financiamiento y refinanciamiento de proyectos de infraestructura y servicios públicos, en un contexto donde las brechas de inversión siguen siendo significativas y donde la infraestructura actúa como un habilitador clave de productividad, competitividad e integración territorial.

Estas experiencias muestran que los BND actúan como un eslabón habilitante entre el potencial productivo y la inversión efectiva. Su valor agregado reside en la capacidad de combinar financiamiento de largo plazo, estructuración técnica, mitigación de riesgos y coordinación con actores públicos, privados y multilaterales. Mediante estas acciones se fortalece la bancabilidad de iniciativas productivas vinculadas a sectores emergentes o en transición tecnológica, permitiendo que oportunidades identificadas a nivel sectorial se transformen gradualmente en inversiones concretas y sostenibles en el tiempo.

Funciones en la promoción de inversión productiva

Los BND apoyan de diversas maneras el financiamiento de sectores estratégicos. Una de sus contribuciones más relevantes es la provisión de financiamiento de largo plazo, condición indispensable para actividades intensivas en capital cuya rentabilidad se materializa en horizontes prolongados. Infraestructura energética, modernización industrial, infraestructura digital o proyectos asociados a nuevas tecnologías requieren estructuras financieras que difícilmente pueden ser cubiertas por intermediarios financieros tradicionales bajo condiciones de mercado.

A partir de experiencias ilustrativas, se observa que esta función alcanza escalas significativas. En México, Banobras canalizó entre 2018 y 2024 financiamiento por más US\$46 mil millones, con una cartera que superó los US\$40 mil millones y un crecimiento cercano al 38%. Adicionalmente, destinó más de US\$15 mil millones a proyectos de infraestructura en sectores como transporte, energía y conectividad, y brindó asistencia técnica a más de 1,500 municipios. Este tipo de intervenciones no solo amplía el acceso a financiamiento de largo plazo, sino que permite sostener procesos de inversión en sectores donde la escala y los plazos exceden la capacidad del sistema financiero comercial.

La intervención de los BND también permite abordar incertidumbres asociadas a tecnologías emergentes o sectores en transición. Proyectos vinculados a nuevas fuentes de energía, digitalización industrial, movilidad sostenible o cadenas productivas basadas en recursos naturales estratégicos enfrentan riesgos tecnológicos, regulatorios y de mercado que reducen la disposición del capital privado a participar en etapas iniciales. En este plano, CORFO ofrece un caso ilustrativo. Su Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, financiado con recursos provenientes de contratos de litio en el Salar de Atacama, contó en 2024 con un presupuesto de US\$114 millones, orientado a descarbonización, resiliencia climática y diversificación productiva sostenible. Asimismo, destinó US\$5 millones a iniciativas de adaptación al cambio climático, apalancando cerca de US\$14 millones de inversión privada, y financió 37 operaciones de crédito por alrededor de US\$34 millones, en su mayoría asociadas a electromovilidad.

En sectores emergentes, como el hidrógeno verde, la contribución de estas instituciones adquiere una dimensión adicional, ya que no se limita a financiar activos, sino que apunta a crear condiciones para el desarrollo del mercado. CORFO impulsó en 2024 un Centro Tecnológico para la Innovación en Hidrógeno Verde en Magallanes, con una inversión pública de US\$7 millones entre 2024 y 2029, complementada con un apalancamiento de US\$10.5 millones por parte de los participantes del proyecto. La implicancia de estas intervenciones es que permiten reducir riesgos, generar capacidades tecnológicas y productivas, y acelerar la maduración de nuevas industrias, facilitando la entrada progresiva de capital privado.

La capacidad de apoyar la preparación y estructuración de proyectos constituye otro elemento clave. Numerosas oportunidades de inversión no avanzan debido a la ausencia de estudios de factibilidad, análisis ambientales o estructuración contractual adecuada. En este ámbito, los BND desempeñan un rol central mediante asistencia técnica, estructuración financiera y diseño de proyectos. Banobras, por ejemplo, complementa su financiamiento con servicios fiduciarios

y la operación de instrumentos como el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), a través del cual se han canalizado cerca de US\$8,300 millones en apoyos para proyectos estratégicos. Esto contribuye a reducir la incertidumbre, mejorar la calidad de los proyectos y aumentar su probabilidad de alcanzar cierre financiero.

Además de facilitar financiamiento y estructuración, los BND pueden impulsar procesos de creación de mercado en sectores emergentes. En algunos casos, esto se traduce en la promoción de plataformas de inversión, fondos especializados o esquemas de coinversión que permiten desarrollar carteras de proyectos y movilizar capital privado a mayor escala. Experiencias recientes muestran que este tipo de instrumentos amplía el conjunto de oportunidades invertibles en áreas donde el ecosistema empresarial aún se encuentra en consolidación (Gregory et al., 2025). En esta línea, CORFO ha financiado 72 fondos de capital de riesgo entre 1998 y 2024, con inversiones evaluadas en más de US\$1,000 millones para cerca de 500 empresas, consolidando un ecosistema de financiamiento para innovación y emprendimiento. La implicancia es que estos mecanismos permiten transformar iniciativas dispersas en portafolios de inversión escalables, generando señales de mercado y reduciendo barreras de entrada para inversionistas privados.

Adicionalidad y movilización de capital privado como principios de intervención

Las intervenciones de los BND suelen guiarse por el principio de adicionalidad, entendido como el valor agregado que estas entidades aportan cuando el financiamiento privado resulta insuficiente para sostener inversiones con impacto económico, social o ambiental relevante. Esta adicionalidad financiera se manifiesta cuando los BND ofrecen condiciones que el mercado no provee adecuadamente, como plazos más extensos, fondeo en moneda local, cobertura parcial de riesgos, líneas con mejores condiciones o instrumentos orientados a segmentos excluidos. A ello se suma una dimensión no financiera que incluye asistencia técnica, fortalecimiento institucional, apoyo en la estructuración de proyectos, medición de impacto y adopción de estándares ambientales y sociales. En sectores vinculados a procesos de modernización productiva, estas intervenciones facilitan la adopción de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de capacidades empresariales y la integración en cadenas de valor más sofisticadas (Ferraz, 2022).

Tomando en cuenta desarrollos y aplicaciones concretas esta adicionalidad se observa en instituciones que combinan financiamiento, asistencia técnica e instrumentos de mitigación de riesgos. COFIDE, por ejemplo, aprobó en 2025 un Programa de Garantía de Cartera concebido como instrumento sostenible y sin subsidio fiscal para ampliar el acceso al crédito productivo y compartir riesgos con el sistema financiero. Además, administró más de US\$5,700 millones en fideicomisos y aprobó US\$969 millones en líneas de financiamiento, con participación mayoritaria de instituciones especializadas en microfinanzas. En Bolivia, el BDP combina financiamiento directo e indirecto con asistencia técnica e inteligencia productiva. En el 2023 reportó que la asistencia técnica contribuyó a incrementos de rendimientos agrícolas entre 10% y 25%, mejora de ingresos de 25%, reducción de costos de producción de 20% y optimización de insumos de 35%, lo que muestra una adicionalidad no financiera orientada a mejorar productividad y capacidad de repago.

La movilización de capital privado constituye otro componente central. En lugar de sustituir al financiamiento comercial, la intervención de los BND busca ampliar el espacio de inversión disponible mediante estructuras que mejoren la relación riesgo-retorno de los proyectos. Garantías parciales de crédito, financiamiento combinado, fondos de inversión, bonos temáticos y estructuras de capital subordinado permiten atraer inversionistas privados hacia sectores donde la inversión aún es baja o percibida como riesgosa. COFIDE, en esa línea, realizó una emisión sostenible por US\$400 millones, aprobó un programa de inversión en bonos sostenibles

por hasta US\$300 millones y otro de participación en fondos de inversión por US\$100 millones, instrumentos dirigidos a profundizar el mercado de capitales y canalizar recursos hacia infraestructura, MIPYMES, transición energética e inversión productiva.

En Colombia, Bancóldex muestra cómo la adicionalidad puede operar mediante alianzas con entidades públicas y condiciones financieras diferenciadas. En 2025 gestionó aportes²⁸ por US\$30 millones, lo que permitió lanzar 20 líneas de crédito en mejores condiciones para reactivación empresarial, modernización, internacionalización, desarrollo sostenible e inclusión financiera. A través de este portafolio desembolsó US\$300 millones y benefició a más de 44,000 empresas. Asimismo, destinó US\$77 millones a proyectos verdes en 402 empresas, de las cuales 298 desarrollaron proyectos de descarbonización. Esta actuación permite que recursos públicos relativamente acotados amplifiquen el financiamiento disponible y orienten crédito hacia objetivos productivos y ambientales.

Este tipo de mecanismos adquiere especial relevancia en áreas como los sistemas alimentarios sostenibles, donde la transición hacia modelos productivos más resilientes requiere inversiones significativas y nuevas estructuras de financiamiento. FIRA ofrece un caso ilustrativo. En 2024, su cartera total de proyectos sostenibles y de adaptación y resiliencia al cambio climático ascendió a US\$2,500 millones, 30.9% más que en 2023. Además, colocó su primer bono azul por US\$300 millones, su quinto bono verde por US\$400 millones y su segundo bono social de inclusión financiera por US\$100 millones. Entre 2018 y 2024, acumuló 12 emisiones temáticas por más de US\$2,200 millones, canalizando recursos del mercado hacia proyectos con impacto ambiental y social en el sector agroalimentario y rural.

La experiencia de bancos subnacionales también muestra que la adicionalidad puede expresarse en la orientación territorial del crédito y en la medición de impactos. En 2024, BDMG desembolsó US\$ 730 millones, casi 20% más que en 2023, y estimó que esos recursos contribuyeron a impulsar más de 87,000 empleos, inyectar US\$650 millones en el ecosistema productivo de Minas Gerais y generar US\$25 millones en ICMS.²⁹ Además, 54.5% de sus desembolsos se destinaron a iniciativas alineadas con al menos un ODS, mientras que las líneas de innovación alcanzaron US\$80 millones y las de energías renovables US\$50 millones.

En este marco, adicionalidad y movilización de capital privado se articulan como principios complementarios. La primera permite justificar la intervención pública allí donde existen brechas de financiamiento, riesgos no internalizados o beneficios sociales que el mercado no captura plenamente. La segunda amplía el alcance de esa intervención mediante instrumentos capaces de atraer recursos privados, multilaterales e institucionales. De esta manera, ambas dimensiones permiten que los BND no solo financien proyectos, sino que ayuden a crear condiciones para que sectores estratégicos se vuelvan invertibles, escalables y sostenibles en el tiempo.

Instrumentos financieros y no financieros para impulsar sectores estratégicos

Los BND disponen de una variedad de instrumentos que pueden adaptarse a las características de los sectores estratégicos y a las barreras específicas que enfrentan los proyectos de inversión. Entre los mecanismos más utilizados se encuentran los instrumentos de financiamiento de largo plazo, que incluyen préstamos de inversión, líneas de crédito para modernización productiva y esquemas de financiamiento a través de intermediarios financieros. Estos instrumentos

²⁸ Recursos que provienen de entidades públicas (ministerios, gobiernos, fondos).

²⁹ Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y sobre Prestaciones de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de Comunicación

permiten sostener proyectos intensivos en capital en sectores como infraestructura energética, manufactura avanzada o desarrollo tecnológico.

Cuadro N°7. Instrumentos de la banca nacional de desarrollo para movilizar inversión estratégica

Tipo de instrumento	Modalidad operativa	Restricción que atiende	Aplicaciones frecuentes
Crédito de largo plazo	Crédito directo, segundo piso, redescuento, leasing, financiamiento de inversión	Insuficiencia de plazos y fondeo compatible con proyectos intensivos en capital	Infraestructura, energía, manufactura, digitalización, transporte, vivienda
Garantías y coberturas	Garantías parciales, fondos de garantía, coberturas de riesgo	Baja disposición del sistema financiero privado a asumir riesgos	MIPYMES, innovación, proyectos verdes, agricultura, exportación
Financiamiento combinado	Recursos concesionales y no concesionales, cofinanciamiento multilateral, fondos climáticos	Brecha entre retorno privado y retorno social	Transición energética, agua y saneamiento, electromovilidad, adaptación climática
Capital y cuasicapital	Fondos de inversión, fondos de fondos, coinversión, participación accionaria, deuda subordinada	Falta de capital paciente y financiamiento para crecimiento	Startups, empresas innovadoras, infraestructura, capital emprendedor
Subvenciones y recursos no reembolsables	Subsidios, cofinanciamiento, convocatorias tecnológicas, aportes para I+D+i	Alto riesgo tecnológico o baja apropiabilidad privada de beneficios	Innovación, prototipos, investigación aplicada, tecnologías limpias
Asistencia técnica	Preparación de proyectos, estudios de factibilidad, estructuración contractual, fortalecimiento institucional	Débil capacidad de originación y estructuración	Infraestructura social, transporte, agua, proyectos municipales, innovación
Plataformas y canales digitales	Plataformas de crédito, pagos, educación financiera, preestructuración de proyectos	Altos costos de transacción, baja cobertura territorial, falta de información	Inclusión financiera, crédito verde, agricultura, microempresas
Bonos temáticos y mercado de capitales	Bonos verdes, sociales, sostenibles, titulización, fondos especializados	Necesidad de atraer inversionistas institucionales	Vivienda, infraestructura social, transición energética, MIPYMES

Fuente: Elaboración propia con base en experiencias de BND de ALC sistematizadas por ALIDE.

Los instrumentos de mitigación de riesgos constituyen otro componente relevante. Garantías parciales de crédito, facilidades de reparto de riesgos y esquemas de financiamiento combinado contribuyen a mejorar las condiciones de acceso al crédito para proyectos que presentan niveles elevados de incertidumbre. En cadenas productivas agroalimentarias estos mecanismos han permitido ampliar la participación de instituciones financieras privadas en el financiamiento de productores y empresas vinculadas a sistemas alimentarios sostenibles (UNEP, 2023).

La preparación de proyectos representa otra dimensión fundamental. Programas de asistencia técnica, estudios de prefactibilidad y apoyo en la estructuración contractual contribuyen a reducir las barreras que impiden que oportunidades de inversión avancen hacia etapas de financiamiento. En sectores emergentes, como el desarrollo de hidrógeno verde, este tipo de instrumentos resulta relevante para facilitar la estructuración de proyectos y el desarrollo de infraestructura asociada (Sessele, 2024).

El desarrollo de instrumentos verdes asociados al mercado de capitales también ha comenzado a adquirir mayor relevancia en las estrategias de los BND. Bonos verdes, bonos vinculados a sostenibilidad y estructuras de titulización permiten ampliar el acceso a financiamiento y movilizar recursos de inversionistas institucionales. Estos instrumentos se complementan con marcos de medición y verificación que aseguran la integridad de los objetivos ambientales o sociales asociados a las operaciones financiadas.

Finalmente, algunos BND impulsan esquemas de coinversión y plataformas sectoriales destinadas a generar carteras de inversión en sectores emergentes. Este enfoque busca ampliar el conjunto de oportunidades financiables mediante la creación de vehículos especializados capaces de atraer capital privado hacia nuevas actividades productivas (UNEP, 2023).

Aplicaciones sectoriales de la banca de desarrollo para movilizar inversión y construir mercados

La evidencia reciente muestra un desplazamiento gradual desde intervenciones financieras predominantemente horizontales hacia esquemas más focalizados en sectores con alto potencial de transformación productiva. Las operaciones identificadas indican que los BND no actúan únicamente como proveedores de crédito de largo plazo. En varios casos participan en la estructuración de mercados emergentes, reducen riesgos tecnológicos, amplían horizontes de inversión, movilizan capital privado y facilitan la coordinación entre actores públicos y privados.

Este cambio responde a una transformación del entorno internacional. La reorganización de las cadenas globales de suministro, la presión por descarbonizar los sistemas energéticos y productivos, la digitalización acelerada y la competencia por atraer inversiones tecnológicas han ampliado el campo de acción de la banca de desarrollo. En este escenario, la capacidad de movilizar financiamiento hacia sectores estratégicos se vuelve un componente central de las estrategias nacionales de desarrollo productivo.

La manufactura de nueva generación constituye uno de los campos donde esta dinámica se vuelve más evidente. La relocalización industrial asociada al comercio regional de América del Norte ha impulsado programas de financiamiento dirigidos a fortalecer la base manufacturera en sectores como autopartes, aeroespacial, dispositivos médicos y electrónica avanzada. Por ejemplo, Bancomext y NAFIN han desarrollado esquemas que combinan crédito de inversión, arrendamiento financiero, factoraje internacional y seguros de crédito a la exportación para facilitar la inserción de empresas mexicanas en cadenas regionales de valor vinculadas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este tipo de intervención no se limita a financiar capital físico. También contribuye a ampliar la base de proveedores locales capaces de integrarse en sistemas productivos tecnológicamente complejos.

La política de infraestructura productiva vinculada al fenómeno del nearshoring también muestra el papel de la banca de desarrollo como plataforma financiera para la expansión industrial. A diciembre 2023, Banobras ha canalizado créditos por alrededor de US\$9,200 para detonar inversiones en 11 estados asociadas a la relocalización de empresas y cadenas de suministro. Asimismo, para el corto plazo ha identificado proyectos adicionales por más de

US\$1,100 millones, que abarcan desde infraestructura básica hasta obras de mayor escala.³⁰ Estas intervenciones incluyen infraestructura logística, provisión de servicios industriales y desarrollo urbano vinculado a polos productivos, contribuyendo a generar condiciones habilitantes para la instalación y expansión de actividades manufactureras. Paralelamente, Banobras ha movilizado entre 2018-2024 financiamiento por más de US\$27 mil millones en proyectos estratégicos de transporte, energía y conectividad que fortalecen la base logística necesaria para la integración de nuevas cadenas industriales (Hernández, 2024).

El impacto de estas operaciones no se limita al financiamiento directo de proyectos. La expansión de infraestructura logística y de transporte reduce costos de comercio, facilita la localización de nuevas inversiones industriales y amplía la competitividad de las cadenas productivas regionales.

La transición hacia vehículos eléctricos y transporte sostenible muestra otra dimensión del papel catalizador de la banca de desarrollo. Bancóldex canaliza un programa financiado por el BID que moviliza alrededor de US\$50 millones para apoyar proyectos de movilidad eléctrica, infraestructura de carga y centros de homologación tecnológica. El programa incluye recursos de cofinanciamiento y asistencia técnica provenientes de mecanismos internacionales de financiamiento climático. La extensión de plazos hasta 20 años modifica significativamente el perfil financiero de estas inversiones y permite absorber parte de los riesgos asociados a tecnologías emergentes (Mobility, 2022).

Brasil ha desarrollado intervenciones similares desde una perspectiva industrial. El BNDES participa en operaciones vinculadas a la electrificación del transporte y al desarrollo tecnológico de la industria automotriz. El financiamiento se orienta tanto a la adopción de buses eléctricos en ciudades brasileñas como al fortalecimiento de capacidades industriales en proveedores y fabricantes asociados a la cadena automotriz. Esta estrategia combina objetivos ambientales con políticas de desarrollo industrial orientadas a fortalecer capacidades tecnológicas domésticas. Solo entre 2023-2025 el Banco aprobó créditos por encima de los US\$720 millones para apoyar la producción brasileña de chasis, carrocerías, piezas y baterías de buses eléctricos, además de haber financiado con cerca de US\$230 millones las diferentes fases del desarrollo del vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), incluida la construcción de la fábrica en Taubaté, Sao Paulo (BNDES, 2025; Gil, 2025).

La transición energética aparece también como un área de intervención creciente. El programa Crédito Verde de (CORFO financia proyectos de energías renovables, eficiencia energética y electromovilidad mediante líneas de crédito de largo plazo. El programa ha financiado más de veinte proyectos por alrededor de US\$83 millones. La ampliación reciente elevó el financiamiento máximo por empresa a US\$30 millones y extendió los plazos de financiamiento hasta 20 años, con mayor énfasis en proyectos vinculados a hidrógeno verde y almacenamiento energético (CORFO, 2024). Asimismo, CORFO apoyará con más de US\$25 millones a tres consorcios empresariales de Chile, China y España para la puesta en marcha de las primeras fábricas de electrolizadores destinadas a la producción de hidrógeno verde (NME, 2025).

Las cadenas de minerales estratégicos asociadas a la transición energética también muestran intervenciones financieras orientadas a fortalecer capacidades tecnológicas. CORFO lanzó una convocatoria de desafíos tecnológicos orientados al desarrollo de litio metálico, reutilización avanzada de baterías de vehículos eléctricos y reducción de emisiones en el procesamiento de concentrados de cobre. El programa moviliza hasta US\$30 millones en financiamiento para investigación y desarrollo tecnológico vinculado a estas industrias (NME, 2026). Esta experiencia muestra que la banca y las agencias de desarrollo pueden intervenir no solo en la

³⁰ De acuerdo con declaraciones de Banobras en el Foro Fitch on México 2023.

etapa de inversión productiva, sino también en fases previas de investigación aplicada, validación tecnológica y creación de capacidades industriales.

El sector agroalimentario presenta otro tipo de intervención vinculada a la bioeconomía. Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) implementan el programa Sustenta+, que incentiva la adopción de bioinsumos agrícolas en cultivos como maíz y caña de azúcar mediante incentivos financieros dirigidos a intermediarios rurales. El programa busca reducir hasta 30 % el uso de fertilizantes químicos y disminuir emisiones asociadas a prácticas agrícolas convencionales. Este tipo de intervención muestra que la transición tecnológica en sistemas productivos dispersos requiere instrumentos distintos al crédito directo tradicional, orientados a facilitar la adopción masiva de nuevas tecnologías, reducir riesgos de aprendizaje y adaptar la oferta financiera al ciclo productivo rural (Martínez, 2025).

La expansión de la infraestructura digital constituye otra dimensión relevante del nuevo campo de acción de la banca de desarrollo. El BNDES aprobó una línea de financiamiento de US\$35 millones para la empresa Scala Data Centers destinada a expandir infraestructura tecnológica asociada a servicios de computación en la nube e inteligencia artificial (BNDES, 2025b). Aunque esta operación es específica, forma parte de un conjunto más amplio de inversiones en infraestructura digital que sostienen la expansión de la economía de datos, la inteligencia artificial y los servicios digitales avanzados en América Latina.

La experiencia de Costa Rica muestra una modalidad diferente, basada en la movilización de recursos del mercado de capitales. El Banco Nacional de Costa Rica participó en la estructuración de un fondo de inversión verde destinado a financiar la construcción de un centro de datos (Bolsa CR, 2022). Este tipo de instrumentos permite canalizar capital institucional hacia infraestructura tecnológica mediante vehículos financieros que amplían la base de financiamiento disponible para proyectos digitales.

Las operaciones observadas permiten identificar patrones consistentes³¹ (en la forma en que la BND interviene en sectores estratégicos. Los bancos utilizan crédito de largo plazo, financiamiento combinado, fondos de inversión temáticos, incentivos a intermediarios y programas de investigación tecnológica para reducir riesgos iniciales y movilizar capital privado hacia actividades de mayor complejidad tecnológica (Cuadro N°8).

Cuadro N°8. Matriz Sector - Instrumento - Impacto de la Banca de Desarrollo

Sector estratégico	Instrumentos financieros	Función económica de la intervención	Acciones de banca de desarrollo asociadas
Manufactura avanzada, nearshoring y cadenas globales de valor	Crédito de inversión de largo plazo, factoraje internacional, seguros de crédito a la exportación, arrendamiento financiero	Integración de proveedores locales en cadenas regionales de producción, fortalecimiento de capacidades manufactureras	Bancomext y Nacional Financiera financian empresas en autopartes, aeroespacial, dispositivos médicos, metalmecánica y electrónica vinculadas a cadenas productivas del T-MEC
Electromovilidad e infraestructura de transporte sostenible	Préstamos de largo plazo, financiamiento combinado, asistencia técnica	Desarrollo de mercados de movilidad eléctrica y reducción de emisiones del transporte urbano	Bancóldex canaliza financiamiento por US\$50 millones con apoyo del BID para buses eléctricos, estaciones de

³¹ Entiéndase como que no es algo que ocurre solo en uno o dos casos aislados. Más bien, es un patrón que se repite en varios bancos de desarrollo y en distintos países. Es decir, aunque cada institución tenga sus particularidades, muchas terminan usando herramientas similares (como financiamiento de largo plazo, garantías o coinversión) porque enfrentan problemas parecidos al impulsar inversiones en sectores estratégicos.

			carga y centros de homologación tecnológica
Industria automotriz electrificada y transición industrial	Crédito de inversión, financiamiento a innovación industrial	Desarrollo tecnológico en la cadena automotriz y fortalecimiento de proveedores vinculados a electrificación	BNDES financia proyectos asociados a electrificación del transporte y modernización tecnológica de la industria automotriz brasileña
Energía limpia, hidrógeno verde y almacenamiento energético	Crédito verde de largo plazo, financiamiento climático, cofinanciamiento internacional	Expansión de infraestructura energética baja en carbono y reducción de riesgos tecnológicos	Corfo impulsa el programa Crédito Verde que financia proyectos de energías renovables, eficiencia energética y electromovilidad con montos de hasta US\$30 millones por empresa
Minerales críticos, litio y tecnologías de baterías	Financiamiento de investigación y desarrollo, convocatorias tecnológicas competitivas	Escalamiento tecnológico en cadenas de minerales estratégicos y desarrollo de soluciones para almacenamiento energético	Corfo financia desafíos tecnológicos vinculados a litio metálico, reutilización de baterías de vehículos eléctricos y reducción de emisiones en concentrados de cobre
Bioeconomía agroalimentaria y bioinsumos	Incentivos financieros a intermediarios, financiamiento indirecto a adopción tecnológica	Transformación de sistemas agrícolas hacia modelos más sostenibles y reducción de dependencia de agroquímicos	FIRA impulsa el programa Sustenta+ para promover bioinsumos en cultivos de maíz y caña de azúcar con reducción significativa en el uso de fertilizantes químicos
Infraestructura digital y economía de datos	Crédito para infraestructura tecnológica, financiamiento de equipos especializados	Expansión de capacidad regional de procesamiento y almacenamiento de datos	BNDES otorga financiamiento por US\$35 millones a Scala Data Centers para expansión de infraestructura digital en varios estados de Brasil
Infraestructura digital financiada mediante mercado de capitales	Fondos de inversión temáticos y vehículos financieros verdes	Movilización de capital institucional hacia infraestructura tecnológica estratégica	Banco Nacional de Costa Rica participa en la estructuración de un fondo verde para financiar la construcción de un centro de datos
Infraestructura logística para relocalización productiva	Crédito de infraestructura, inversión mixta público-privada	Reducción de costos logísticos y atracción de inversión industrial	Banobras financia proyectos logísticos y de transporte vinculados al nearshoring por más de US\$490 millones

Fuente: Elaboración propia con base en experiencias de BND de ALC sistematizadas por ALIDE.

5.2. Articulación entre innovación y emprendimiento desde la banca de desarrollo

La consolidación de agendas de innovación y emprendimiento en ALC ha puesto en primer plano un desafío central, que consiste en traducir capacidades tecnológicas y conocimiento en procesos sostenidos de escalamiento empresarial, aumento de la productividad y generación de empleo de calidad. La discusión deja de centrarse en el diseño de instrumentos aislados y se desplaza hacia la capacidad de articular financiamiento, capacidades y actores en torno a trayectorias empresariales más dinámicas. En este campo, los BND y las agencias públicas especializadas adquieren una relevancia particular, al contar con instrumentos y capacidades para intervenir tanto en fallas de mercado como en restricciones sistémicas que dificultan la

aparición y consolidación de actividades innovadoras (CEPAL, 2024; OECD et al., 2026), así como en la creación e inteligencia de mercados (ALIDE, 2025).

La relevancia de esta función se aprecia con especial claridad en una región que sigue enfrentando productividad estancada, estructura exportadora concentrada y elevada heterogeneidad empresarial. En consecuencia, la política pública no puede limitarse a apoyar algunos emprendimientos de alto crecimiento. Necesita construir puentes entre innovación, inversión productiva, modernización empresarial y transformación estructural. Allí los BND muestran una ventaja comparativa institucional, porque pueden operar con horizontes de largo plazo, asumir riesgos que el mercado evita y coordinar instrumentos diversos bajo objetivos de política más amplios (Ferraz et al., 2023; CEPAL, 2025).

La evidencia reciente sugiere que esta transición hacia un rol más complejo de la BND ya se encuentra en marcha, con algunas instituciones con mayor recorrido que otras. En Brasil, por ejemplo, la acción coordinada entre el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico y Social (BNDES) y la Financiadora de Estudos y Projetos (FINEP) ha permitido movilizar más de US\$11,600 millones entre 2023 y 2025 en financiamiento orientado a innovación, digitalización y modernización productiva, con un ritmo de ejecución que en 2025 iguala en nueve meses el total aprobado en 2023 (BNDES, 2025; FINEP, 2025). Este volumen no solo refleja una expansión de recursos, sino un cambio en la jerarquía de la innovación dentro de la política económica, que pasa a ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo.

Este desplazamiento cuantitativo viene acompañado de un cambio cualitativo relevante. La innovación deja de ser entendida como un ámbito sectorial o tecnológico específico y se integra dentro de una lógica más amplia de transformación productiva, donde se busca simultáneamente elevar productividad, fortalecer cadenas de valor, promover digitalización y avanzar hacia modelos de producción más sostenibles. En ese sentido, la articulación entre innovación y emprendimiento no constituye un objetivo aislado, sino un componente esencial de una política de desarrollo productivo más ambiciosa.

Desde esta perspectiva, la contribución de los BND a la articulación entre innovación y emprendimiento puede ordenarse en cuatro planos. El primero es el financiamiento escalonado de startups y empresas innovadoras, mediante capital semilla, capital emprendedor, fondos de fondos, aceleración y mentoría. El segundo es la difusión y adopción tecnológica en MIPYMES, una frontera menos visible, pero probablemente más decisiva para la productividad agregada. El tercero es la articulación de ecosistemas, mediante conexión de actores, infraestructura institucional e instrumentos de cooperación. El cuarto es la orientación estratégica de la innovación hacia inclusión, sostenibilidad y desarrollo territorial, junto con la consolidación de métricas de adicionalidad e impacto. Los casos relevados –Brasil, Chile, Colombia, Perú y México– muestran que estos planos ya están presentes en la práctica reciente de la BND, aunque con distintos niveles de escala, sofisticación y continuidad.

Instrumentos para financiar startups y empresas innovadoras

Una primera contribución de los BND en esta agenda se relaciona con la necesidad de financiar empresas jóvenes, innovadoras o intensivas en conocimiento que enfrentan severas restricciones para acceder al sistema financiero tradicional³². Sin embargo, un mapeo general de la BND en ALC sugiere que el desafío no radica solo en ampliar la disponibilidad de recursos,

³² Las razones son conocidas. Estas firmas suelen operar con activos intangibles, flujos futuros inciertos, modelos de negocio todavía en validación y necesidades de inversión cuyo retorno depende de procesos de experimentación y aprendizaje. Esto reduce el atractivo del crédito bancario tradicional y eleva la importancia de instrumentos más flexibles, crédito bancario tradicional y eleva la importancia de instrumentos más flexibles, de largo plazo y cercanos a la lógica del capital de riesgo.

sino también en construir un conjunto de instrumentos coherente con las distintas etapas de evolución de una empresa innovadora.

En ese punto, la experiencia de Chile es ilustrativa. CORFO ha desarrollado una arquitectura que distingue entre instrumentos para etapas tempranas tecnológicas, etapas tempranas con riesgo tecnológico y comercial, y etapas de desarrollo y crecimiento. A ello se suma Start-Up Chile, cuya reformulación más reciente estructura la intervención en *Build, Ignite* y *Growth*, es decir, un recorrido que acompaña desde la idea y el prototipo hasta la validación comercial, la expansión, el acceso a mercados internacionales y la conexión con financiamiento privado (ALIDE, 2021; CORFO, 2026).

Este diseño escalonado es importante por dos razones. En primer lugar, evita que la política pública trate al emprendimiento innovador como una categoría homogénea, cuando las necesidades financieras, gerenciales y comerciales cambian de manera significativa entre una etapa de prototipado y una de expansión. En segundo lugar, permite que la intervención pública no se agote en el impulso inicial, una de las debilidades más frecuentes de la política regional. Buena parte de las empresas apoyadas por incubadoras o programas de capital semilla enfrenta posteriormente un “vacío de escalamiento”, entendido como la falta de instrumentos adecuados para transitar desde la validación temprana hacia el crecimiento sostenido. La trayectoria de CORFO sugiere que una política eficaz debe cerrar precisamente ese vacío.

Los resultados acumulados de la experiencia chilena refuerzan esta interpretación. Según la Cuenta Pública de CORFO y el Informe Público de Capital de Riesgo, entre 1998 y 2024 la Corporación financió 72 fondos de capital de riesgo, apoyando inversiones en cerca de 500 empresas, con una fuerte presencia de MYPES. El instrumento no se concibe solo como provisión de recursos. El financiamiento a fondos busca incorporar socios estratégicos que aporten redes, capacidades de gestión y mejores prácticas de gobierno corporativo. El capital público se canaliza a través de vehículos que combinan financiamiento y acompañamiento, una característica central cuando se trata de empresas que deben acelerar procesos de aprendizaje organizacional (CORFO, 2025).

Brasil ofrece una segunda referencia clave, aunque con una institucionalidad más distribuida entre BNDES, FINEP y otros actores. El caso de los fondos *Criatec* es particularmente útil porque cuenta con evidencia rigurosa de impacto. La evaluación del programa encuentra efectos significativos sobre empleo, masa salarial, personal de I+D y solicitudes de patentes, lo que sugiere que el capital semilla puede alterar la trayectoria de crecimiento y sofisticación tecnológica de las firmas apoyadas (Martini et al., 2024). En contextos donde la banca privada no tiene incentivos suficientes para financiar activos intangibles y donde los mercados privados de capital emprendedor son todavía pequeños o concentrados, un programa público bien diseñado puede generar adicionalidad real y no mera sustitución de recursos privados.

El caso brasileño aporta, además, una lección adicional. La política de apoyo a startups no se redujo a fondos de participación. El BNDES Garagem puso en el centro una restricción menos visible, aunque muy relevante en economías en desarrollo: la falta de competencias empresariales, redes y preparación para escalar. El programa combinó mentorías, conexión con inversionistas, acceso a socios estratégicos y servicios especializados, y su evaluación mostró efectos positivos sobre empleo formal, masa salarial y empleo técnico-científico. La implicancia es importante. El financiamiento por sí solo no basta cuando las empresas jóvenes enfrentan limitaciones en gestión, diseño organizacional, vinculación con clientes o estructuración de su crecimiento. En ese sentido, la aceleración y la construcción de capacidades empresariales deben entenderse como parte del repertorio de la BND y no como un complemento menor (Machado et al., 2026).

Un aspecto especialmente relevante en la evolución reciente de Brasil es que el apoyo a emprendimientos innovadores ya no se agota en capital semilla y aceleración. El portafolio se ha ampliado hacia tecnologías estratégicas e infraestructura digital habilitante. Desde 2023, el BNDES aprobó alrededor de US\$950 millones en crédito y participación accionaria para proyectos ligados a inteligencia artificial (IA), con recursos destinados a integradores, desarrolladores, hardware especializado, infraestructura en la nube y centros de datos. En este ámbito, el Banco lanzó en 2024 una línea de crédito por US\$380 millones para el desarrollo de data centers. A ello se suman operaciones como el crédito de US\$60 millones a Embraer para proyectos de investigación y nuevas tecnologías. Lo que emerge de estos hechos es una visión más amplia de la relación entre innovación y emprendimiento. No se trata solo de financiar empresas jóvenes, sino de consolidar un entorno tecnológico en el que startups, empresas consolidadas, infraestructura digital e innovación aplicada se refuerzan entre sí.

FINEP complementa esa lógica con una arquitectura propia que cubre casi toda la cadena de innovación. Su informe anual 2024 muestra una expansión significativa del financiamiento reembolsable, con US\$2,960 millones en contrataciones y US\$2,150 millones en liberaciones, además de casi mil proyectos de MIPYMES apoyados por la vía descentralizada³³, con cerca de US\$700 millones en crédito. En paralelo, FINEP mantiene instrumentos de inversión directa e indirecta en empresas, a través de FINEP Startup y fondos de inversión en participaciones. El programa FINEP Startup cubre un vacío particularmente importante, situado entre iniciativas como Centelha y Tecnova, los programas de aceleración, el crowdfunding y los fondos seed o de venture capital. A fines de 2024, el FIP FINEP Startup 1 contaba con capital comprometido de US\$10 millones y capacidad para acompañar hasta 25 empresas. El dato muestra escala³⁴, pero también focalización en segmentos subatendidos del mercado. FINEP, además, terminó 2024 con 18 fondos activos y 76 empresas en cartera, lo que confirma una tendencia hacia una mayor participación en el desarrollo del mercado de capital emprendedor.

BANCÓLDEX, por su parte, estructuró un Fondo de Fondos que invierte en vehículos emprendedores, de crecimiento, impacto, deuda privada e infraestructura, asumiendo un rol de inversionista ancla y gestor profesional. La importancia del caso colombiano no radica solo en el volumen de recursos comprometidos. Lo decisivo es que este banco contribuye a atraer inversionistas privados, profesionalizar gestores y consolidar una industria de capital alternativo todavía en proceso de maduración. En mercados donde el venture capital sigue siendo pequeño y relativamente concentrado, la banca de desarrollo tiene una función de señalización relevante (BANCÓLDEX, 2024). Su presencia puede reducir el riesgo percibido, mejorar estándares y movilizar coinversión.

En Perú, la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) ha avanzado en una dirección similar. La entidad viene comprometiendo recursos en fondos de venture capital y anunció un programa de inversión en fondos más amplio, orientado a sectores estratégicos y MIPYMES. Aunque la escala peruana todavía es menor que la brasileña o la chilena, la señal institucional es importante. El banco de desarrollo no actúa solo como prestamista o garante, sino como creador de mercado para nuevos vehículos de inversión. Ello resulta especialmente relevante en ecosistemas pequeños, donde la ausencia de gestores, fondos y coinversionistas privados puede constituir una barrera tan importante como la propia falta de recursos (COFIDE, 2025).

México aporta otra perspectiva. NAFIN exhibe una arquitectura amplia de fomento empresarial que combina crédito, garantías, cadenas productivas, factoraje, capital emprendedor y programas sectoriales. Más recientemente, junto con BANCOMEXT, anunció una estrategia

³³ Esta institución opera esquemas de crédito descentralizado a través del credenciamiento de agentes financieros, como bancos regionales y otras instituciones intermediarias, que canalizan recursos hacia empresas innovadoras, especialmente Mipymes.

³⁴ Se refiere al volumen de recursos movilizados y el alcance de las operaciones en términos de empresas y proyectos apoyados.

para financiar cerca de US\$7,000 millones en MIPYMES y proyectos estratégicos del Plan México, incorporando crédito, garantías y esquemas de coinversión, además de una plataforma denominada Impulsora de Innovación México, orientada a movilizar capital público y privado hacia proyectos de innovación tecnológica e IA a través del Fondo de Fondos. Este punto es particularmente relevante porque sugiere que la articulación entre emprendimiento e innovación en México se conecta de manera más explícita con prioridades de inversión, innovación tecnológica e IA, ampliando el repertorio de la banca de desarrollo mexicana (NAFIN, 2025).

Este panorama sugiere que la BND aporta valor cuando contribuye a estructurar una secuencia de financiamiento y acompañamiento. No se trata solo de cubrir una falla de crédito o la ausencia de mercados, sino de hacer posible una trayectoria empresarial que va desde la idea inicial hasta el crecimiento, pasando por capital de largo plazo, mentoría, validación, redes, coinversión, gobierno corporativo e infraestructura tecnológica habilitante. En el Anexo N°1 se resumen algunos de los principales instrumentos utilizados por bancos nacionales de desarrollo y agencias públicas para startups y empresas innovadoras en la región, lo cual permite observar varios rasgos importantes:

- La creciente diversidad del repertorio de instrumentos. La BND ya no actúa solo con crédito, subsidios o redescuento, sino también a través de capital, fondos de fondos, coinversión, subvención, aceleración, mentoría, validación tecnológica e inversión en infraestructura digital;
- Se observa una lógica de continuidad entre instrumentos, particularmente visible en Chile y Brasil;
- Emerge una orientación temática y territorial más definida, que incluye salud, IA, sostenibilidad, desarrollo regional y cadenas productivas estratégicas;
- Se identifica una convergencia creciente entre banca de desarrollo y política industrial, lo que sugiere que el emprendimiento innovador comienza a concebirse no solo como fenómeno empresarial, sino como parte de una estrategia más amplia de transformación productiva.

Financiamiento de la adopción tecnológica en MIPYME

Una de las contribuciones más importantes que surge de la evidencia regional es la necesidad de ampliar el foco del análisis. La innovación y el emprendimiento no pueden estar centrados exclusivamente en startups tecnológicas. Si el objetivo es elevar productividad, diversificar la estructura productiva y expandir capacidades empresariales, la adopción tecnológica en MIPYMES debe ocupar un lugar mucho más visible. En países donde la base empresarial está compuesta mayoritariamente por PYMES, el cambio técnico no ocurre solo en laboratorios, hubs digitales o fondos de venture capital. También ocurre en talleres, agroindustrias, comercios, firmas de servicios y manufactureras que incorporan software, automatización, nuevas prácticas logísticas, analítica de datos, teledetección, trazabilidad o comercio electrónico. La productividad agregada de ALC depende en gran medida de la difusión de estas tecnologías y de la capacidad de las empresas para convertirlas en mejoras efectivas de procesos, productos y modelos de negocio.

La experiencia brasileña ofrece evidencia relevante en este plano. El Programa BNDES Mais Inovação y las líneas complementarias de FINEP permiten observar una concepción amplia de la innovación, donde el apoyo público abarca no solo actividades intensivas en I+D, sino también difusión tecnológica, modernización digital, adquisición de bienes y servicios innovadores, y transformación productiva alineada con prioridades estratégicas. En 2024, el subprograma de Difusión Tecnológica concentró una parte muy importante de las operaciones aprobadas por el

BNDES, con presencia significativa de MIPYMES. Este hecho revela que una política de innovación puede ser simultáneamente sofisticada y masiva: puede apoyar la frontera tecnológica y, al mismo tiempo, expandir la modernización productiva del tejido empresarial (BNDES, 2024; MCTI, 2026; FINEP, 2026). Así, el BNDES aprobó 2,249 operaciones por más de US\$2,070 millones. De ellas 2,210 fueron operaciones indirectas en el subprograma de Difusión Tecnológica, con un valor de US\$630 millones, mientras que 39 operaciones directas concentraron US\$1,460 millones. La política pública puede ser masiva y selectiva al mismo tiempo, teniendo un brazo orientado a miles de operaciones de difusión tecnológica en MIPYMES y otro dedicado a inversiones de innovación de mayor escala.

La ampliación del programa hasta diciembre de 2025 refuerza esa orientación. Las nuevas condiciones del BNDES Mais Inovação elevaron el valor máximo anual por cliente en la línea de Difusión Tecnológica a US\$11 millones, aumentaron el tope de la línea Inversión automática en digitalización a US\$3 millones e incorporaron el subprograma Aquisição de bens inovadores, con operaciones entre US\$4 millones y US\$25 millones, con mínimos diferenciados para Norte y Nordeste. Más allá de los montos, lo relevante es la dirección de política: el banco utiliza su capacidad financiera para inducir modernización y digitalización en el tejido productivo. El financiamiento a bienes de capital 4.0³⁵, en consecuencia, no es solo apoyo a inversión privada, sino una política explícita de aumento de eficiencia, reducción de costos operativos y difusión tecnológica (MCTI, 2026; FINEP, 2026).

La línea Crédito Industria 4.0 profundiza esta lógica. Con un presupuesto de US\$2,010 millones en BNDES y US\$2,420 millones considerando la acción conjunta con FINEP en 2025, el crédito busca impulsar la modernización del parque industrial mediante la adquisición de bienes de capital con robótica, IA, computación en la nube, internet de las cosas (IoT) y teledetección. Hasta 2024, el 52% de los recursos colocados había sido destinado a MIPYMES. Esto revela dos cuestiones importantes. Primero, que la política de difusión tecnológica puede alcanzar escala nacional. Segundo, que la BND puede reducir la brecha de acceso a innovación para empresas de menor porte, al ofrecer tasas más bajas, plazos más amplios y una red acreditada capaz de canalizar recursos hacia el tejido productivo disperso.

La articulación entre financiamiento y validación tecnológica aparece con especial claridad en la iniciativa Smart Factory, desarrollada por el Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) y BNDES dentro del programa Brasil Mais Produtivo. Aunque el financiamiento directo es relativamente acotado en comparación con otras líneas, su diseño vincula el desarrollo tecnológico con la aplicación en entornos productivos reales. Esta característica reduce una de las principales fallas de la política de innovación en ALC: la dificultad para traducir prototipos en adopción efectiva por parte de las empresas. La ambición de escalar este modelo hacia miles de MIPYMES refuerza su carácter estratégico.

FINEP complementa este enfoque desde otra escala. En 2024, la institución alcanzó más de US\$2,900 millones en contrataciones reembolsables, consolidándose como uno de los principales instrumentos de financiamiento a la innovación en Brasil. Además, la vía descentralizada apoyó casi mil proyectos de MIPYMES, con más de US\$690 millones, y el 86% de las empresas beneficiarias fueron de menor tamaño. FINEP no solo opera como financiadora de proyectos tecnológicos de gran escala, sino también como mecanismo de difusión de innovación empresarial en segmentos poco atendidos, aprovechando su red de agentes financieros y su capacidad para adaptar instrumentos a empresas de distinto tamaño.

³⁵ Son equipos, maquinaria y sistemas productivos que incorporan la lógica de la Industria 4.0, es decir integran tecnologías digitales como automatización avanzada, sensores, internet de las cosas (IoT) y análisis de datos. Estos activos permiten mejorar la eficiencia, flexibilidad y trazabilidad de los procesos productivos, facilitando la digitalización y modernización de las empresas.

Inovacred ocupa un lugar particularmente importante dentro de ese entramado. El programa se consolidó como uno de los principales instrumentos reembolsables para innovación empresarial en Brasil. En 2025 contrató US\$610 millones y FINEP anunció US\$305 millones para el primer semestre de 2026, con 30% de los recursos reservados a las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste. El financiamiento cubre equipos, software, infraestructura tecnológica, mano de obra especializada y servicios técnicos, con tasas reducidas y plazos largos. La relevancia del instrumento no radica solo en su volumen, sino también en su función de previsibilidad. Contar con recursos regulares y una red de agentes financieros reduce una de las principales fuentes de incertidumbre para las empresas: la discontinuidad en la disponibilidad de financiamiento.

La subvención económica permite a FINEP operar donde el riesgo tecnológico hace menos apropiado el financiamiento reembolsable. En 2024, desembolsó cerca de US\$650 millones en financiamiento no reembolsable. Para 2026, lanzó convocatorias por más de US\$360 millones orientadas a transición energética, desarrollo de la cadena de valor de minerales críticos, salud, cadenas agroindustriales sostenibles y desarrollo regional. Estos instrumentos son importantes porque permiten financiar proyectos con mayor incertidumbre tecnológica y mayor potencial transformador. Además, vinculan innovación con agendas sectoriales y regionales concretas, reforzando una lógica de política por misiones.

Colombia aporta una perspectiva complementaria. BANCÓLDEX ha vinculado explícitamente su acción a la política de reindustrialización y a la inclusión crediticia de la economía popular, combinando líneas para modernización, financiamiento de tecnología y software, neocrédito y servicios no financieros. Esta mezcla de instrumentos revela una comprensión realista del problema. La MIPYME no requiere solo recursos; requiere también reducción de brechas de información, acceso a plataformas de intermediación más transparentes, acompañamiento y apoyo para vincular el financiamiento con decisiones de inversión productiva. El neocrédito, en ese sentido, no solo mejora el acceso, sino que también puede cambiar la relación de las microempresas con el sistema financiero formal y abrir espacio para una agenda gradual de modernización (BANCÓLDEX, 2025).

México avanza en una dirección similar, aunque con una arquitectura distinta. La información más reciente de NAFIN muestra una plataforma de fomento empresarial de gran escala, con crédito, garantías, derrama en cadenas productivas y operaciones de factoraje que permiten a proveedores acceder al beneficio del cobro anticipado. Esta base es relevante porque indica que la modernización empresarial en México puede apoyarse en mecanismos de factoraje, equipamiento, cadenas productivas, garantías y programas sectoriales, incluso antes de llegar a instrumentos más sofisticados de innovación. La nueva estrategia NAFIN, BANCOMEXT y Plan México profundiza esa lógica, al combinar cerca de US\$7,000 millones en financiamiento para MIPYMES con garantías, coinversión, apoyo a polos de desarrollo y una plataforma explícita para innovación tecnológica e IA (NAFIN, 2024; NAFIN, 2025).

Cuadro N°9. Principales Instrumentos de Adopción Tecnológica y Modernización Empresarial en MIPYME

Institución (País)	Instrumento / línea	Tipo de instrumento	Actividades financiables o promovidas
BNDES, Brasil	Programa BNDES Mais Inovação	Crédito / financiamiento de inversión	Transformación digital, rediseño de procesos, software, teledetección, nuevos métodos analíticos, desarrollo de productos, robótica, IA, consultorías y modernización productiva
BNDES, Brasil	Crédito Industria 4.0	Crédito para difusión de bienes de capital 4.0	Compra de máquinas y equipos con robótica, IA, nube, IoT, teledetección y comunicación máquina a máquina (M2M)

BNDES + SENAI, Brasil	Smart Factory BNDES/2025 / Brasil Mais Produtivo	Apoyo no reembolsable a I+D+i y validación tecnológica	Soluciones de industria 4.0, sensores, aplicaciones móviles, robótica, simuladores, IA y validación en ambiente real de producción
FINEP, Brasil	FINEP Reembolsável Direto / Crédito Descentralizado / Inovacred	Crédito reembolsable directo e indirecto	Proyectos de I+D+i, modernización tecnológica, transformación digital, infraestructura tecnológica, software, equipos, mano de obra especializada y servicios técnicos
FINEP, Brasil	Convocatorias de Subvención Económica	Subvención no reembolsable	Agroindustria, salud, movilidad urbana, aviación sostenible, semiconductores, tecnologías digitales, residuos, saneamiento, vivienda, energías renovables, bioeconomía, agricultura familiar, propiedad intelectual, defensa, Amazonía y desarrollo regional
FINEP, Brasil	Líneas temáticas de subvención para residuos, saneamiento, vivienda y misiones NIB	Subvención temática	Economía circular, residuos sólidos, biogás y biometano, agua y saneamiento, materiales para vivienda popular, industrialización, transición energética y tecnologías estratégicas
BANCÓLDEX, Colombia	Líneas de modernización, tecnología, software y neocrédito	Crédito de segundo piso, crédito digital y servicios no financieros	Maquinaria, equipos, tecnología, software, modernización o innovación productiva
BANCÓLDEX, Colombia	Líneas especiales con aliados	Crédito con condiciones preferenciales	Modernización, reactivación, inversión y reconversión productiva
NAFIN y ecosistema mexicano	Programas de fomento, cadenas productivas, micronegocios y apoyo PYME	Crédito, garantías, factoraje, asistencia técnica y promoción	Inversión productiva, competitividad, innovación, permanencia empresarial, factoraje financiero, equipamiento y acompañamiento
NAFIN + Bancomext, México	Estrategia para Mipyme y proyectos estratégicos del Plan México / Impulsora de Innovación México	Crédito, garantías, coinversión y capital de riesgo vía Fondo de Fondos	Financiamiento productivo, factoraje, garantías, coinversión, innovación tecnológica, IA, naves industriales, parques industriales, capital de trabajo y equipamiento
BNDES + SEBRAE + MEMP + OEI, Brasil	Plataforma Empreender Clima	Plataforma digital de preestructuración y acceso a crédito verde	Formación, itinerarios de aprendizaje, mapa del ecosistema climático, catálogo de financiamiento verde, formulación asistida de proyectos
FINEP, Brasil	Portafolio integral de apoyo a proyectos de I+D+i con crédito, subvención y apoyo a ICT	Portafolio integral de instrumentos	Crédito, subvención económica, apoyo a ICT y esquemas de coinversión

Fuente: elaboración propia con base en BNDES, FINEP, BANCÓLDEX, COFIDE, NAFIN y SEBRAE

Notas: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

En términos de política, la implicancia es clara. Una agenda de innovación y emprendimiento para ALC no puede seguir concentrándose solo en emprendimientos de alta visibilidad. Debe incorporar con fuerza la difusión tecnológica en MIPYMES. Allí los BND tienen un papel singular, porque pueden combinar crédito, leasing, garantías, subvención, servicios no financieros, plataformas digitales y articulación con otros actores públicos para reducir las barreras que enfrentan las empresas pequeñas al modernizarse. En términos de productividad agregada, esta puede ser una de las áreas donde la banca de desarrollo genere mayor impacto de mediano plazo.

La adopción tecnológica no es una línea única, sino un portafolio. En ese portafolio conviven crédito de inversión, subvención no reembolsable, validación tecnológica, asistencia técnica, plataformas digitales, articulación con instituciones científicas y tecnológicas (ICT) y mecanismos de coinversión. Esta diversidad resulta fundamental porque las barreras a la modernización empresarial también son heterogéneas. Algunas empresas enfrentan restricciones de tasa o plazo, otras carecen de capacidades internas, otras no cuentan con información sobre alternativas tecnológicas y otras no pueden validar soluciones en entornos reales. En la medida en que el repertorio institucional es más amplio y está mejor articulado, aumenta la capacidad de la banca de desarrollo para cerrar estas brechas.

Ecosistemas de innovación y emprendimiento como función estratégica para el escalamiento empresarial

Una parte sustantiva del valor público generado por los BND no se explica por el monto de los recursos movilizados, sino por su capacidad para actuar como articuladores de ecosistemas. En ALC, la innovación suele estar fragmentada entre universidades, centros tecnológicos, agencias públicas, startups, fondos, aceleradoras, grandes empresas y gobiernos territoriales. Cuando no existe una institución con capacidad de ordenar trayectorias, conectar instrumentos y reducir discontinuidades, el resultado suele ser un ecosistema incompleto. Puede haber ideas prometedoras, pero no fondos especializados; fondos disponibles, pero sin flujo suficiente de proyectos preparados; investigación académica, pero poca transferencia a empresas. En ese escenario, la banca de desarrollo puede cumplir una función organizadora decisiva.

Chile proporciona un ejemplo particularmente claro. CORFO no solo financia fondos y programas de emprendimiento. También opera instrumentos que fortalecen redes, alianzas y plataformas de desarrollo en sectores específicos. Esta clase de intervención es importante porque muestra que la articulación ecosistémica puede y debe financiarse. No se trata solo de esperar que los actores cooperen espontáneamente. La política pública puede crear incentivos, cofinanciar plataformas compartidas, facilitar redes de transferencia y construir infraestructura institucional para que las empresas accedan a capacidades que individualmente no podrían desarrollar. La innovación deja así de entenderse solo como atributo de empresas aisladas y empieza a verse como resultado de un entorno articulado (CORFO, 2025).

El caso de Start-Up Chile también refuerza esta interpretación, ya que desde sus inicios buscó atraer talento internacional, conectar startups con Chile, estimular cultura emprendedora y generar redes. La información institucional más reciente sigue ubicándolo dentro de una lógica de sofisticación productiva, impacto en el ecosistema y proyección internacional. El hecho de que el programa se mida no solo por número de empresas atendidas, sino por crecimiento posterior en ventas, revela que la política pública ha intentado mover la atención desde la mera promoción hacia resultados más ligados al escalamiento y dinamismo empresarial.

Brasil presenta un ecosistema más complejo y distribuido, donde la articulación se reparte entre varias instituciones. FINEP, BNDES, el Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), la Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPPII), SENAI y otros actores configuran un entramado en el que distintos instrumentos cubren subsidios, crédito, coinversión, cooperación universidad-empresa, incubación, validación y desarrollo de proveedores. La importancia de esta configuración no reside solo en la división de tareas, sino en la posibilidad de construir una secuencia sistémica. Una empresa puede transitar desde apoyo temprano y aceleración hacia crédito reembolsable, validación tecnológica, integración con ICT y, más tarde, acceso a fondos o infraestructura sectorial. Esa continuidad, aunque imperfecta, es una de las razones por las cuales el caso brasileño resulta relevante para el resto de la región (Martini, 2026; FINEP, 2026).

La propia FINEP se asume como articuladora de políticas públicas y conocimiento. En 2024 promovió seminarios sobre innovación, sostenibilidad, neointustrialización, deeptechs, IA y desafíos climáticos, reuniendo instituciones científicas, universidades, sector productivo y gobierno (FINEP, 2025). Esta dimensión puede parecer secundaria frente a las cifras de crédito o subvención, pero no lo es. La construcción de ecosistemas requiere espacios de formulación, aprendizaje y coordinación. Cuando una agencia pública se limita a ejecutar líneas financieras sin alimentar la conversación estratégica, su capacidad transformadora se reduce. FINEP, en cambio, combina financiamiento con articulación de agendas y formulación de política.

La inversión en infraestructura de innovación refuerza esta lógica. El gobierno brasileño lanzó una convocatoria pública por US\$610 millones para implantación o expansión de Centros de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, con BNDES y FINEP, mediante una combinación de préstamos, participación accionaria y aportes no reembolsables. El objetivo es concentrar laboratorios, áreas de prueba, investigación básica y aplicada, y colaboración con universidades e institutos de innovación. Este tipo de instrumento desplaza la atención desde el apoyo a empresas individuales hacia la construcción de capacidades tecnológicas permanentes. Un ecosistema innovador no surge solo por acumulación de proyectos, también requiere infraestructura, plataformas de prueba, centros de conocimiento y mecanismos estables de cooperación.

La experiencia de Smart Factory y Brasil Mais Produtivo añade otra capa a esta función articuladora. La coordinación entre el Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), SENAI, SEBRAE, la Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), EMBRAPPII, FINEP y BNDES muestra que la modernización de las MIPYMES es más eficaz cuando financiamiento, asistencia técnica, validación y difusión tecnológica operan dentro de una lógica de política integrada. La BND no es aquí solo fuente de recursos. Es una pieza central de una arquitectura institucional que busca elevar productividad y competitividad mediante cooperación organizada.

La Plataforma Empreender Clima representa otra forma de articulación. En este caso, el BNDES no opera como proveedor directo de crédito, sino como parte de una herramienta que combina formación, precalificación de proyectos, mapa de financiamiento y vínculo con bancos acreditados. La innovación no está en el volumen de recursos, sino en la reducción de barreras de acceso para pequeñas empresas que usualmente no pueden estructurar proyectos aptos para líneas verdes. Esta es una función articuladora en sentido estricto: ordenar información, simplificar trayectorias y conectar demanda empresarial con oferta financiera especializada (De Belem, 2025).

Colombia ofrece una experiencia de articulación entre BND y política pública más amplia. BANCÓLDEX opera en coordinación con ministerios, gobernaciones, alcaldías, cámaras de comercio y patrimonios autónomos. Esta articulación permite lanzar líneas especiales con mejores condiciones, apoyar sectores priorizados y ampliar cobertura territorial. El Fondo de Fondos añade otra capa, al conectar al banco con gestores privados, fondos especializados y nuevas clases de activos. Lo relevante no es solo la movilización de capital. También lo es la profesionalización del ecosistema de inversión y la posibilidad de que el Banco actúe como generador de confianza en un mercado todavía en consolidación.

Perú muestra una articulación más emergente. COFIDE se plantea como catalizador de recursos y articulador entre sector público y privado. Su evolución reciente hacia programas de inversión en fondos y hacia una mayor centralidad de la innovación y la transformación digital sugiere que el Banco intenta expandir su papel más allá de la intermediación financiera. En mercados relativamente pequeños, esta función puede ser incluso más importante que en economías de

mayor escala, porque la escasez de gestores, instrumentos y redes es una restricción estructural para el desarrollo del ecosistema (COFIDE, 2025).

La BND no contribuye a la articulación entre innovación y emprendimiento únicamente cuando financia empresas. También lo hace cuando organiza interacciones, reduce fragmentación, construye plataformas y crea infraestructura institucional para la innovación. Esta dimensión es menos visible en los balances, pero puede explicar una parte sustantiva de los efectos de largo plazo. Una política centrada exclusivamente en colocaciones puede mejorar el acceso a recursos. Una política que, además, construye ecosistemas, puede alterar de manera más profunda la capacidad innovadora del país.

Innovación con dirección: inclusión, sostenibilidad y territorio

Un rasgo particularmente relevante de la evolución reciente de la política regional es que la innovación y el emprendimiento empiezan a vincularse más explícitamente con objetivos de sostenibilidad, inclusión y equilibrio territorial. Esto no debe leerse como un giro superficial. En la región, una política de innovación desligada de la heterogeneidad territorial y de las brechas de acceso tiende a reproducir concentraciones preexistentes. Los ecosistemas más dinámicos suelen asentarse en pocas ciudades, captar la mayor parte del capital emprendedor y vincularse con segmentos relativamente estrechos de empresas y perfiles empresariales. Si la BND pretende desempeñar un papel transformador, necesita contribuir a corregir esa concentración.

Brasil ofrece diversas iniciativas recientes. El fondo de IA lanzado por BNDESPar y FINEP establece que 30% de los recursos deberán dirigirse a startups localizadas en las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste. Se trata de un criterio de asignación significativo porque intenta usar el instrumento financiero no solo para acelerar una tecnología emergente, sino también para desconcentrar geográficamente parte de sus beneficios. La Plataforma Empreender Clima va en una línea similar al reducir barreras de acceso al crédito verde para pequeñas empresas, incluidas aquellas vinculadas a actividades de menor escala y mayor vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático.

FINEP, por su parte, ha resaltado recientemente avances en la regionalización de recursos a través de la visibilización de proyectos premiados en distintas regiones del país. Esto apunta a una cuestión central: una política nacional de innovación adquiere mayor legitimidad y potencial transformador cuando logra construir capilaridad territorial y no se limita a reforzar los polos ya consolidados (Agencia Brasil, 2026).

Chile también ofrece una evolución relevante. La Cuenta Pública de CORFO y la reformulación de Start-Up Chile incorporan elementos de desarrollo regional, equidad de género y sostenibilidad. Este cambio es importante porque Chile cuenta con un ecosistema más maduro que muchos otros países de ALC, lo que permite desplazar parcialmente el foco desde la creación de empresas hacia la orientación del esfuerzo innovador. El hecho de que parte de los instrumentos de capital de riesgo y de los programas de emprendimiento se alineen con externalidades positivas, descarbonización y género sugiere una política de innovación cada vez más conectada con objetivos de transformación productiva más amplios. La experiencia de los programas Potencia y Escalamiento Intermediario con foco sostenible, que apoyaron 136 emprendimientos en 2024 y 2025 con resultados relevantes en ventas y levantamiento de capital, muestra que sostenibilidad, aceleración y validación de mercado pueden reforzarse mutuamente.

Por su lado, BANCÓLDEX articula emprendimiento, reindustrialización, economía popular, sostenibilidad y apoyo a grupos tradicionalmente excluidos. La innovación, en este marco, ya no aparece solo asociada a empresas tecnológicas de frontera. También se vincula con proyectos

verdes, inclusión financiera, mujeres empresarias, comunidades indígenas y economía popular. Esto amplía de manera importante la comprensión de lo que puede significar innovación para una BND. No se trata únicamente de tecnologías disruptivas, sino también de nuevas formas de inclusión productiva, modernización y acceso a mejores oportunidades para segmentos empresariales rezagados (BANCÓLDEX, 2025).

Mientras que la estrategia NAFIN-BANCOMEXT anunciada en 2026 incluye programas específicos para mujeres empresarias, mujeres exportadoras y micronegocios formales, además de financiamiento a polos de desarrollo económico y economía circular. El hecho de que la innovación tecnológica e IA aparezcan vinculadas a un esquema más amplio de financiamiento para MIPYMES, desarrollo regional e inversión estratégica sugiere una integración creciente entre inclusión financiera, desarrollo territorial e innovación. Esta convergencia evita la segmentación entre una política de innovación para pocos y una política de desarrollo productivo general desvinculada de la tecnología.

En Perú, COFIDE también ofrece señales en esta dirección, al integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), sostenibilidad y evaluación de impacto dentro de su estrategia institucional. Aunque la evidencia disponible es menos detallada sobre programas temáticos, el punto general permanece: la BND tiene margen para orientar la innovación hacia prioridades más amplias que la rentabilidad privada, contribuyendo a una transformación más equilibrada e inclusiva. En una región donde las desigualdades territoriales, sectoriales y de acceso siguen siendo profundas, esta orientación estratégica es parte del valor diferencial que puede aportar la banca de desarrollo.

Medición de impacto, adicionalidad y valor público

La creciente visibilidad de la banca de desarrollo en innovación y emprendimiento obliga a una última consideración. A medida que aumentan los recursos, también aumenta la exigencia de demostrar resultados. Esto vuelve imprescindible desplazar la conversación desde la ejecución financiera hacia la adicionalidad, el desempeño empresarial y el valor público generado. A partir del mapeo realizado sobre la BND de ALC, algunas instituciones muestran avances importantes, aunque persisten desafíos.

Brasil presenta algunos de los avances más sólidos. La evaluación del programa Criatec, elaborada por equipos del BNDES, ofrece resultados particularmente relevantes porque se basa en una estrategia cuantitativa rigurosa y observa variables estrechamente vinculadas con transformación productiva. Los resultados promedio indican efectos positivos de 61% en empleo, 275% en masa salarial, 21% en personal ocupado en I+D y 10% en solicitudes de patentes para las firmas beneficiarias, en comparación con grupos de control comparables (Martini et al., 2024). Estos resultados son significativos por al menos dos razones. La primera es que muestran que el capital semilla no solo amplía el acceso a recursos financieros, sino que puede alterar la trayectoria de crecimiento y sofisticación tecnológica de las firmas jóvenes. La segunda es que ofrecen una medida concreta de adicionalidad: la intervención pública no aparece como simple sustitución de recursos privados, sino como un factor que modifica variables reales del desempeño empresarial.

La misma evaluación también permite matizar el tipo de efecto que puede esperarse. En las empresas más maduras dentro del universo analizado, los impactos reportados alcanzan 30.2% en masa salarial de diciembre, 21.4% en patentes solicitadas y 8.2% en patentes concedidas, mientras que en empleo potencialmente técnico los efectos también se mantienen positivos, aunque con menor magnitud relativa (Martini et al., 2024). Esto sugiere que la intervención pública puede tener efectos diferenciados según la edad y etapa de las firmas. No todas las empresas innovadoras responden igual al capital semilla. En algunas, el principal efecto se

observa en contratación de personal calificado; en otras, en capacidad de patentamiento; en otras, en expansión salarial o escalamiento comercial.

La evidencia de BNDES Garagem refuerza este argumento desde otro ángulo. En este caso, la intervención no se basa en capitalización directa, sino en aceleración, mentoría y conexión con inversionistas y socios estratégicos. La evaluación encuentra efectos aproximados de 29% sobre empleo formal, 105% sobre masa salarial y 13% sobre empleo técnico-científico en los *startups* apoyados (Machado et al., 2026). El valor analítico de estos resultados es alto, porque muestra que las capacidades empresariales también generan adicionalidad medible. La lección de política es clara: en ecosistemas donde el emprendimiento enfrenta restricciones de gestión, redes y escalamiento, la BND debe mirar tanto los instrumentos financieros como la construcción de capacidades, el acompañamiento estratégico y la articulación con redes de inversión.

Chile aporta una dimensión complementaria. CORFO cuenta con una trayectoria destacable en evaluación de impacto de sus instrumentos de fomento a la innovación, y la literatura especializada destaca que existe evidencia consistente de efectos positivos en innovación de productos y procesos, adicionalidad de insumos, productividad y empleo (Ernest y Crespi, 2025). Esta acumulación institucional es significativa porque muestra que la evaluación no tiene por qué ser un ejercicio aislado. Puede consolidarse como una capacidad permanente para ajustar instrumentos, identificar efectos heterogéneos y sostener la legitimidad de la política pública en el tiempo.

En el caso chileno, la evidencia cuantitativa sobre capital de riesgo es particularmente útil. La industria de capital de riesgo apoyada por CORFO logró multiplicar 1.8 veces las ventas de las empresas de la muestra analizada, con mejor desempeño en los fondos de etapas tempranas (FT), donde las ventas crecieron 2.4 veces, frente a 1.4 veces en fondos de crecimiento (FC). Este hallazgo complementa la evidencia brasileña desde otra variable de desempeño. Mientras Criatec y Garagem permiten observar empleo, masa salarial y patentes, la experiencia chilena ayuda a observar expansión comercial y tracción de mercado.

Además, las evaluaciones de CORFO muestran que los efectos pueden diferir según el tipo de programa. En algunas líneas de InnovaChile, los resultados positivos aparecen con mayor claridad en ventas, empleo y exportaciones, mientras que otros efectos sobre innovación estrictamente definida, como introducción de nuevos productos, pueden ser más difíciles de detectar o requerir plazos más extensos (Cuantix, 2022). Esto lleva a una conclusión importante: la medición del impacto en innovación no puede descansar en un único indicador. Una intervención puede no mostrar efectos inmediatos en patentes o productos nuevos y, sin embargo, generar adicionalidad valiosa en capacidades de absorción, inserción exportadora, interacción con aliados o escalamiento comercial.

La experiencia colombiana permite introducir con más claridad la dimensión de movilización de capital y de impacto alineado. BANCÓLDEX, a través de su programa de inversión en fondos y de su Fondo de Fondos, se propuso como meta que, por cada peso invertido por el Banco en un fondo de capital, al menos dos pesos se dirigieran hacia Colombia. A diciembre de 2023, la institución había comprometido COP\$300,703 millones (US\$84 millones) en 23 fondos, y esos fondos habían invertido COP\$3.97 billones (US\$1,100 millones) en 386 empresas y proyectos. En este caso, el capital atraído al país alcanzó US\$450 millones, equivalente a 5.3 veces el capital comprometido por BANCÓLDEX. Este dato es especialmente poderoso porque ofrece una medida explícita de adicionalidad financiera y de apalancamiento. La intervención pública no solo canalizó recursos propios. Consiguió movilizar un volumen varias veces superior de capital hacia empresas y proyectos.

En el compartimento Capital para Emprender, el Fondo de Fondos acumuló compromisos por US\$29.5 millones, había desembolsado 77.18% de ese total y había permitido realizar 226 inversiones en 202 compañías a través de nueve fondos subyacentes. En el compartimento BANCÓLDEX Capital, la inversión acumulada en 172 compañías alcanzó cerca de US\$750 millones y, en Colombia, el capital invertido se había multiplicado 7.6 veces, en línea con la tesis de inversión del vehículo. Esta relación entre capital comprometido e inversión movilizada resulta especialmente útil para la discusión sobre valor público. Permite mostrar que la adicionalidad de la BND no debe medirse solo por el resultado de las empresas beneficiarias, sino también por su capacidad de estructurar mercados, atraer co-inversionistas y profundizar industrias financieras que de otra manera serían más pequeñas o más lentas en madurar.

BANCÓLDEX aporta, además, una aproximación más amplia a la medición del impacto. Su informe de impacto de fondos señala que la institución hace seguimiento a ingresos, cobertura geográfica, tipo de actividad económica, empleo generado, composición por edad, género, nivel educativo y duración de contratos, así como participación de mujeres en juntas y alta gerencia, brechas salariales e inclusión productiva de grupos tradicionalmente marginados. Esta amplitud lleva la evaluación desde la rentabilidad financiera hacia una noción más rica de valor público. Una banca de desarrollo empresarial no debería conformarse con demostrar que una inversión rinde. Debe mostrar también que mejora oportunidades, amplía cobertura territorial, incorpora segmentos excluidos y genera empleo más y mejor distribuido.

En México, la métrica institucional de NAFIN sobre financiamiento a MIPYMES respecto del financiamiento total al sector privado, así como los indicadores de penetración financiera asociados a cartera y aportaciones de capital del Fondo de Fondos, sugieren una preocupación creciente por medir profundidad y alcance. En 2024, el índice de penetración financiera de la institución aumentó y, al considerar cartera al sector privado más aportaciones de capital del Fondo de Fondos, se alcanzó 2.29% del PIB. Este tipo de métrica no mide innovación de manera directa, pero sí la capacidad de la BND para ampliar el espacio financiero y productivo en el que la innovación puede desarrollarse (NAFIN, 2025).

A partir de estas experiencias, se desprenden tres implicancias analíticas. La primera es que la medición de impacto debe operar en varios niveles simultáneamente. Un primer nivel corresponde a resultados empresariales directos, como empleo, masa salarial, ventas, productividad, exportaciones, inversión en I+D o patentes. Un segundo nivel corresponde a resultados financieros y de mercado, como movilización de capital privado, profundidad del mercado de fondos, capacidad de atraer inversionistas, diversificación de instrumentos o reducción de barreras de acceso. Un tercer nivel corresponde a efectos sistémicos, como articulación con ICT, desarrollo regional, inclusión de mujeres y grupos subrepresentados, o fortalecimiento de capacidades institucionales.

La segunda implicancia es que la adicionalidad debe entenderse en sentido amplio. En algunos casos se manifiesta como aumento de empleo, salarios o patentes, como en Criatec y Garagem. En otros, se expresa en expansión comercial, como en los fondos apoyados por CORFO. En otros, se observa en la capacidad de movilizar capital varias veces por encima del aporte inicial, como en BANCÓLDEX. En otros más, se vincula con cobertura territorial, penetración financiera o acceso de grupos excluidos. Esta diversidad obliga a abandonar una visión estrecha del impacto. No existe un único indicador que capture todo el valor de la banca de desarrollo en innovación. Lo apropiado es construir tableros diferenciados según tipo de instrumento, estadio de la empresa y teoría del cambio.

La tercera implicancia es institucional. La consolidación de una agenda de medición de impacto exige mejorar datos, trazabilidad, interoperabilidad y capacidades analíticas dentro de las propias instituciones. En este punto, FINEP ofrece un ejemplo importante con su énfasis en

transparencia, monitoreo, sistemas digitales y recolección de datos, mientras que COFIDE plantea la transformación digital como soporte para mejores servicios de desarrollo. Esto importa porque, sin sistemas sólidos de información, la BND puede ampliar recursos, pero tendrá dificultades para aprender, corregir y priorizar. La evaluación no es simplemente un requisito de rendición de cuentas. Es también una capacidad estratégica para mejorar diseño, efectividad y valor público.

5.3. Inclusión social, financiera y territorial

La acción de la BND en este conjunto de iniciativas (Anexo N°2) cumple una función central para cerrar brechas de inclusión porque no se limita a ofrecer financiamiento en sentido estricto, sino que articula crédito, formación, infraestructura, digitalización y mecanismos de acceso adaptados a poblaciones y territorios con restricciones estructurales.

En términos generales, esta oferta se despliega en tres ámbitos complementarios:

- **Inclusión social**, mediante productos orientados a jóvenes, mujeres, productores rurales, comunidades agrícolas y hogares con necesidades de vivienda o transporte escolar;
- **Inclusión territorial**, a través del financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento, energía y movilidad;
- **Inclusión financiera**, mediante plataformas digitales, cuentas de ahorro, billeteras electrónicas y programas de educación financiera.

En conjunto, esta arquitectura permite intervenir sobre distintas barreras de acceso, desde la falta de activos productivos o infraestructura hasta la ausencia de capacidades, cobertura territorial o canales de transacción adecuados.

En **inclusión social**, la BND contribuye a cerrar brechas en educación, empleo, y acceso a oportunidades productivas mediante instrumentos que combinan financiamiento y fortalecimiento de capacidades. Algunos productos se orientan a la formación y al acceso a educación, como plataformas de capacitación virtual o esquemas de financiamiento para transporte escolar. Otros se concentran en empleo, emprendimiento e inclusión productiva, especialmente en el sector agropecuario, pesca o pequeños negocios liderados por mujeres y jóvenes. También existen instrumentos dirigidos a grupos específicos, como la agricultura familiar campesina o comunidades agrícolas, a fin de atender rezagos históricos de acceso a agua, financiamiento o inversión productiva.

Las características financieras de estos productos muestran una amplia diversidad. En algunos casos, el financiamiento se estructura con montos relativamente acotados y plazos adaptados a unidades productivas pequeñas.

Desde la perspectiva de la inclusión, la relevancia de esta oferta radica en que reduce restricciones que afectan de manera desproporcionada a grupos con menor acceso relativo a recursos financieros y no financieros. Cuando los productos se orientan a jóvenes rurales, mujeres emprendedoras, pequeños productores o comunidades agrícolas, la banca de desarrollo no solo amplía acceso al crédito, sino que también corrige asimetrías de escala, historial crediticio, dispersión territorial y falta de activos iniciales. En los casos en que el crédito se complementa con formación, tecnificación o apoyo a la gestión, el efecto potencial sobre inclusión es mayor, porque el financiamiento deja de ser un fin en sí mismo y pasa a convertirse en un instrumento para fortalecer capacidades productivas y mejorar la inserción económica de los beneficiarios.

El Crédito Joven Rural de BanEcuador B.P., por ejemplo, financia entre US\$500 y US\$20,000, con plazos de hasta 5 años para activo fijo y 3 años para capital de trabajo, incluyendo períodos de gracia de hasta 2 años y 1 año, respectivamente. En otros casos, los instrumentos alcanzan escalas mayores, como los Créditos para la tecnificación del agro: Sumar equipamiento del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., que contemplan montos de hasta ARS3,500 millones (US\$2.56 millones), con plazos de hasta 10 años, 2 años de gracia y opción de leasing de hasta 5 años. A su vez, en líneas vinculadas a vivienda social, como Compromiso Vivienda Popular de Findeter, los plazos pueden llegar hasta 20 años, con una línea total del orden de COP 2 billones (US\$561 millones). Estas diferencias muestran que la banca de desarrollo adapta los montos y horizontes financieros a la naturaleza de la necesidad que busca cubrir, desde micro y pequeñas iniciativas productivas hasta programas de alcance social e infraestructura de mayor escala.

En **inclusión territorial**, la acción de la BND se articula alrededor de proyectos de infraestructura que permiten ampliar cobertura, mejorar calidad de servicios y reducir brechas espaciales de acceso. Aquí predominan líneas de redescuento, programas de inversión, fideicomisos y financiamiento de activos en sectores como agua y saneamiento, energía y transporte. La similitud más importante entre estos productos es que todos responden a necesidades de inversión física de mediano y largo plazo, con beneficios que trascienden al usuario individual y se extienden al territorio en su conjunto. En agua y saneamiento, esto se traduce en proyectos de agua potable, alcantarillado, drenaje, aguas residuales y residuos sólidos. En energía, se expresa en transmisión eléctrica, generación renovable, eficiencia energética y acceso a nuevas fuentes. En transporte, se manifiesta en movilidad urbana, espacio público y transporte limpio.

Las condiciones financieras de este grupo muestran una lógica distinta a la de inclusión social. Los montos son más altos, los plazos más extensos y, en varios casos, las tasas se estructuran mediante fórmulas indexadas o esquemas de redescuento.

FNE Sol del Banco do Nordeste do Brasil S.A. puede financiar hasta 100% de la inversión, con plazos de hasta 12 años para empresas y productores rurales, hasta 8 años para personas físicas y hasta 24 años en proyectos de locación, además de un tope de R\$100,000 (US\$20,077) para persona física en ciertos segmentos. En infraestructura energética, Compromiso Eficiencia Energética y Conectividad Virtual de Findeter ofrece plazos de hasta 10 años con hasta 2 años de gracia, y opera con tasas referenciadas al Indicador Bancario de Referencia (IBR) más margen de intermediación. En transporte escolar, Camino BNDES a la Escuela contempla plazos de hasta 10 años, con 2 años de carencia y un límite de financiamiento de hasta el 100%.

El aporte de estos instrumentos al cierre de brechas de inclusión territorial es particularmente relevante porque actúan sobre determinantes estructurales del bienestar y la productividad. La infraestructura de agua, saneamiento, energía y movilidad no solo mejora cobertura física, sino que reduce costos de acceso, tiempos de desplazamiento, exposición a fallas de servicio y desigualdades entre territorios. Desde esa perspectiva, la banca de desarrollo cumple una función de cierre de brechas al canalizar financiamiento hacia sectores y proyectos con largos horizontes de maduración, altos costos iniciales y beneficios sociales amplios, en contextos donde la banca comercial o el financiamiento privado tienden a ser más restrictivos.

En **inclusión financiera**, la acción de la BND se apoya, además de los diferentes, productos y programas financieros, sobre todo en la expansión de canales digitales, medios de pago, cuentas de ahorro y programas de educación financiera. Aquí la finalidad principal no es tanto financiar inversión física o capital de trabajo, sino reducir barreras de acceso, uso y aprendizaje en el sistema financiero. La oferta incluye aplicaciones móviles, plataformas web, billeteras digitales,

canales remotos de atención y productos de ahorro orientados a segmentos específicos, además de programas de formación financiera. La similitud central entre estos instrumentos es que todos buscan simplificar la relación entre institución y usuario, reducir costos de transacción y ampliar cobertura operativa, especialmente en contextos donde la distancia, el tiempo o la limitada infraestructura física dificultan el acceso a servicios financieros tradicionales.

Las condiciones financieras en este eje difieren sustancialmente de las observadas en inclusión social y territorial. En varios casos, como Webcomex Nación, Home Banking y Pampa Móvil, App BN Móvil, Servicio Yape con el Banco de la Nación, Págalo.pe o WhatsApp Agroamigo, no corresponden montos, plazos ni tasas crediticias, porque se trata de plataformas o canales operativos orientados a pagos, consultas, transferencias o atención digital. De forma similar, las cuentas orientadas a niños y jóvenes o los programas de educación financiera tienen como objetivo principal la inclusión temprana, la administración de recursos y el aprendizaje financiero, por lo que sus parámetros financieros son limitados o no aplican en la misma lógica que un crédito.

El papel de la BND para cerrar brechas de inclusión financiera radica, precisamente, en que extiende la frontera de acceso más allá del crédito. Al promover plataformas digitales, canales móviles, billeteras electrónicas, cuentas de ahorro y programas formativos, estas instituciones permiten que poblaciones con menor acceso relativo, como mujeres, jóvenes, usuarios rurales o nuevos usuarios del sistema, puedan incorporarse a servicios financieros básicos y desarrollar capacidades de uso. En ese sentido, la inclusión financiera se aborda de manera funcional, es decir, no solo como presencia formal en el sistema, sino como posibilidad real de operar, ahorrar, pagar, recibir transferencias y utilizar productos adecuados a las necesidades del usuario.

Vistas en conjunto, las iniciativas de inclusión social, territorial y financiera muestran varias **similitudes**: 1) la mayor parte de los productos está dirigida a grupos o territorios donde persisten restricciones estructurales de acceso, escala, cobertura o capacidades; 2) muchos instrumentos combinan más de una función, por ejemplo crédito con capacitación, infraestructura con sostenibilidad, o digitalización con educación financiera; 3) la BND adapta los instrumentos al tipo de beneficiario, diferenciando entre hogares, jóvenes, mujeres, pequeños productores, gobiernos subnacionales, prestadores de servicios o usuarios de plataformas digitales; y 4), en todos los casos la intervención busca ampliar oportunidades y reducir desigualdades, aunque lo haga mediante mecanismos distintos.

Por otro lado, las **diferencias** se expresan, sobre todo, en la naturaleza del producto, el tipo de beneficiario, la escala financiera y la estructura de condiciones. En inclusión social predominan créditos, programas de apoyo y formación para individuos, emprendimientos o unidades productivas pequeñas y medianas. En inclusión territorial sobresalen líneas de redescuento, programas de inversión y financiamiento de infraestructura, con montos más elevados y plazos más largos. En inclusión financiera predominan cuentas, aplicaciones, plataformas y programas formativos, donde con frecuencia no aplican tasas, plazos o montos crediticios.

En conjunto, la banca de desarrollo no opera con un único modelo de cierre de brechas. Su acción combina crédito, ahorro, infraestructura, capacitación, plataformas digitales, fideicomisos y líneas de redescuento, con condiciones y escalas diferenciadas según la naturaleza de la barrera que se busca resolver. Precisamente en esa diversidad radica una de sus principales fortalezas: la posibilidad de intervenir de manera adaptada sobre brechas sociales, territoriales y financieras que no podrían ser atendidas adecuadamente mediante un solo tipo de instrumento. Desde esta perspectiva, la contribución de la banca de desarrollo a la inclusión no se limita a proveer recursos, sino a estructurar respuestas específicas para ampliar el acceso efectivo a oportunidades, servicios y activos en poblaciones y territorios donde las restricciones tienden a ser más persistentes.

El papel de la banca de desarrollo en los grandes proyectos sociales

Los grandes proyectos sociales suelen enfrentar restricciones que dificultan su financiamiento y ejecución bajo esquemas convencionales de mercado. Entre ellas se encuentran los horizontes largos de repago, la necesidad de coordinación entre distintos niveles de gobierno, los riesgos de construcción y demanda, y las debilidades en la preparación técnica de los proyectos. En este contexto, la banca nacional de desarrollo cumple una función estratégica porque puede transformar necesidades sociales y territoriales en operaciones estructuradas, mejorar su bancabilidad y sostener la inversión en sectores donde el mercado tiende a subinvertir.

- **Originación y preparación de proyectos.** La experiencia regional muestra que la banca de desarrollo agrega valor antes del desembolso, mediante estudios, diseño, estructuración, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades del ejecutor. En Colombia, la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. desarrolló un Programa de Asistencia Técnica para la Reestructuración y el Desarrollo de Transporte Público, orientado a apoyar la reorganización del sistema integrado de transporte masivo, abordando componentes técnicos, legales y financieros. En Colombia, la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. también ha operado con esquemas de asistencia técnica para infraestructura social y urbana. En Brasil, el BNDES estructura concesiones y asociaciones público-privadas, cumpliendo una función que reduce incertidumbre y mejora la calidad de los proyectos antes del cierre financiero.
- **Estructuración financiera y la movilización de recursos a escala.** La banca nacional de desarrollo no solo aporta recursos propios, sino que diseña vehículos, garantías, coberturas y esquemas fiduciarios que permiten ampliar el financiamiento disponible. En Costa Rica, el Bono Social para el Desarrollo Inclusivo del Banco Nacional de Costa Rica movilizó US\$75 millones y orientó recursos hacia micro, pequeñas y medianas empresas, con énfasis en unidades lideradas por mujeres. Al cierre de 2023, esta operación había formalizado 5.631 créditos, de los cuales 51,2% correspondía a empresas lideradas por mujeres, y 40,6% de los fondos desembolsados se dirigió a ese segmento. En Uruguay, el Crédito Compra de Campos del Banco de la República Oriental del Uruguay ilustra otra modalidad de estructuración financiera aplicada al acceso a tierra para productores agrícolas y ganaderos.
- **Articulación territorial y sectorial de la inversión.** La BND no financia únicamente proyectos aislados, sino que puede organizar su intervención en torno a cadenas productivas, regiones y agendas de desarrollo local. En Brasil, el Programa de Educação Empreendedora del Banco do Nordeste do Brasil S.A. se dirige a startups del nordeste brasileño y de municipios específicos de Espírito Santo y Minas Gerais, con el fin de promover emprendimiento innovador y desarrollo sostenible mediante formación y acceso a oportunidades de negocio. En Costa Rica, el programa Transformando Comunidades del Banco Nacional de Costa Rica había apoyado 137 proyectos socioprodutivos desde 2016 y beneficiado a más de 625,000 personas, a través de fondos no reembolsables orientados al desarrollo económico local y comunitario. Estos casos muestran que la banca nacional de desarrollo puede actuar como organizadora de la demanda, articuladora territorial y promotora de proyectos con impacto económico y social simultáneo.
- **Gestión de riesgos y la mejora de la gobernanza del proyecto.** Los grandes proyectos sociales requieren arreglos contractuales robustos, trazabilidad y mecanismos de monitoreo que permitan anticipar riesgos territoriales, operativos y socioambientales. En Brasil, GeoBNDES utiliza inteligencia geográfica e imágenes satelitales para apoyar la caracterización territorial de los proyectos financiados y mejorar su seguimiento; la plataforma reúne información georreferenciada de más de 1,000 proyectos activos. En Colombia, la Plataforma Decision del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

permite evaluar la viabilidad técnica y financiera de proyectos agropecuarios en zonas rurales con baja conectividad y había facilitado cerca de 11,600 operaciones por alrededor de US\$53 millones desde 2021. En México, la Plataforma de Asesoría Técnica de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura acerca tecnologías de agricultura 4.0 a pequeños y medianos productores y contaba con más de 4,000 usuarios en 25 estados, además del monitoreo de casi 100,000 hectáreas.

- **Incorporación de objetivos sociales y ambientales dentro de esquemas financieros complejos.** La BND ha mostrado que es posible combinar viabilidad financiera con metas de inclusión, innovación y sostenibilidad. En Brasil, BNDES Mais Inovação aprobó proyectos por más de US\$2,500 millones entre 2023 y 2024 para impulsar inversión privada en investigación, desarrollo e innovación y fortalecer la transformación digital de la industria. También en Brasil, LabAgroMinas, del Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., desembolsó alrededor de US\$46 millones en 2024 para facilitar la transición de productores rurales hacia prácticas agrícolas más sostenibles y regenerativas. En el ámbito ambiental, Floresta Viva del BNDES prevé una inversión inicial de R\$823 millones (US\$166 millones) durante 7 años, con el objetivo de restaurar entre 25,000 y 35,000 hectáreas y remover entre 8 y 11 millones de toneladas de dióxido de carbono. En México, el Bono Azul: pesca y acuicultura de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura alcanzó US\$229.5 millones, con más de US\$40 millones ya financiados en proyectos del sector. En Ecuador, el programa Rompiendo Brechas de la Corporación Financiera Nacional B.P. había financiado 15,800 operaciones hasta febrero de 2025 y beneficiado a cerca de 28,000 MIPYMES, de las cuales 60% son lideradas por mujeres.
- **Función contracíclica y de continuidad de la inversión.** Cuando aumentan la volatilidad, las tasas de interés o la aversión al riesgo, los grandes proyectos sociales tienden a postergarse porque presentan retornos más largos y requieren alta coordinación. En esos contextos, la banca nacional de desarrollo puede preservar la continuidad de la inversión mediante crédito de largo plazo, refinanciamiento, garantías y programas de apoyo sectorial. Esta función no consiste solo en expandir crédito en coyunturas adversas, sino en evitar que se interrumpan proyectos estratégicos en vivienda, transporte, desarrollo territorial, innovación, sostenibilidad y servicios básicos.

En esta lógica, la banca de desarrollo aporta instrumentos críticos:

- Garantías parciales de crédito y coberturas, para mejorar calificaciones de riesgo y ampliar base de inversionistas.
- Tramos de primer riesgo o subordinados, para absorber pérdidas iniciales y hacer bancable el tramo senior.
- Financiamiento combinado (recursos concesionales y no concesionales) para viabilizar retornos privados en proyectos con alto retorno social.

Siendo que, el papel de la BND en los grandes proyectos sociales puede entenderse como una función integral que abarca preparación, estructuración, articulación territorial, gestión de riesgos, innovación financiera y continuidad de la inversión. Las experiencias regionales muestran que esta función ya se materializa en programas concretos de asistencia técnica para transporte, bonos sociales para MIPYMES, educación emprendedora, desarrollo comunitario, restauración ecológica, innovación productiva, inclusión financiera y apoyo a mujeres emprendedoras. Desde una perspectiva de inclusión, esta capacidad es decisiva porque permite que inversiones de gran escala lleguen a territorios y poblaciones donde el mercado tiende a subinvertir, sin perder viabilidad técnica, sostenibilidad financiera ni legitimidad social.

Figura N°33. Papel de la banca de desarrollo en proyectos sociales



Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

El desempeño reciente de la inversión en ALC confirma la persistencia de una restricción estructural que limita la capacidad de la región para sostener procesos de transformación productiva. Los niveles de acumulación de capital continúan siendo reducidos en comparación con otras economías emergentes y, además, se caracterizan por una asignación que privilegia sectores con menor contenido tecnológico, baja sofisticación productiva y escasa generación de encadenamientos. Esta dinámica incide directamente sobre la productividad y contribuye a explicar la dificultad de ALC para sostener trayectorias de crecimiento elevadas, convergentes e inclusivas.

El entorno internacional ha redefinido los determinantes de la inversión. La reorganización de las cadenas globales de valor, la transición energética y la expansión de la economía digital han modificado los criterios de localización del capital, otorgando mayor relevancia a factores como la previsibilidad regulatoria, seguridad, la infraestructura y la conectividad. Si bien ALC cuenta con activos significativos —recursos naturales, potencial energético—, su capacidad para traducir estas ventajas en flujos sostenidos de inversión de calidad se ve condicionada por factores macroeconómicos, limitaciones logísticas, fragmentación regional y dificultades en la estructuración y ejecución de proyectos.

La identificación de sectores con alto potencial de inversión permite visualizar una trayectoria alternativa para el crecimiento regional. La manufactura de nueva generación, los vectores energéticos asociados a la transición, la infraestructura digital, la bioeconomía, los minerales críticos y los servicios intensivos en conocimiento configuran espacios donde la inversión puede generar aumentos significativos de productividad y diversificación. Sin embargo, el paso desde el potencial hacia la materialización de proyectos enfrenta restricciones vinculadas a horizontes de maduración extensos, incertidumbre tecnológica y regulatoria, y requerimientos de capital que exceden las condiciones habituales del financiamiento privado.

En este contexto, la BND adquiere relevancia como mecanismo de articulación entre oportunidades productivas y financiamiento. Su capacidad para canalizar recursos de largo plazo hacia actividades intensivas en capital permite atender segmentos que no encuentran cobertura adecuada en el sistema financiero tradicional. Esta característica resulta particularmente importante en proyectos vinculados a infraestructura, energía, transformación productiva, incorporación tecnológica e innovación empresarial, donde la rentabilidad se materializa en horizontes extendidos y bajo condiciones de riesgo que requieren esquemas financieros específicos.

El aporte de la BND no se limita a la provisión de crédito. Su contribución se expresa en una combinación de instrumentos financieros y no financieros que permite intervenir sobre distintas barreras de inversión. Entre los instrumentos financieros destacan el crédito directo de largo plazo, las líneas de segundo piso, el redescuento, el leasing, el factoraje, las garantías parciales, los fondos de garantía, los esquemas de cofinanciamiento, el financiamiento combinado, los fondos de inversión, los fondos de fondos, la coinversión, la deuda subordinada, los bonos temáticos y las subvenciones no reembolsables para innovación o adopción tecnológica. Entre los instrumentos no financieros destacan la asistencia técnica, la preparación de proyectos, los estudios de factibilidad, la estructuración financiera, el acompañamiento empresarial, la mentoría, la aceleración, la articulación con instituciones científicas y tecnológicas, y la generación de información para reducir asimetrías.

Las condiciones financieras asociadas a estos instrumentos son parte central de su valor agregado. En varios casos, la BND ofrece plazos más extensos que la banca comercial, períodos de gracia, financiamiento en moneda local, tasas preferenciales o bonificadas, garantías que

reducen el riesgo percibido por intermediarios financieros, cofinanciamiento con organismos multilaterales y estructuras que combinan recursos concesionales y no concesionales. Estas condiciones son especialmente relevantes en sectores donde la inversión requiere maduración prolongada, como infraestructura, energía, vivienda, transporte sostenible, digitalización, innovación industrial y modernización tecnológica de MIPYMES.

La contribución de los BND se expresa también en su capacidad para intervenir en la estructura de riesgos de los proyectos. A través de garantías, coberturas, financiamiento combinado, tramos subordinados, asistencia técnica y esquemas de cofinanciamiento, la banca de desarrollo facilita la participación de inversionistas privados al mejorar la relación riesgo-retorno de iniciativas de mayor complejidad. De este modo, genera un efecto de movilización de capital que trasciende la intervención directa y amplía el alcance de la inversión en sectores estratégicos.

La función de estructuración de proyectos constituye otro componente central. En numerosos casos, las oportunidades de inversión no avanzan debido a la ausencia de estudios de factibilidad, evaluaciones ambientales, análisis de demanda, estructuración contractual o esquemas financieros adecuados. La BND contribuye a cerrar estas brechas mediante asistencia técnica, estructuración financiera y generación de información que permite transformar iniciativas potenciales en proyectos viables y financiables. Esto resulta determinante en sectores emergentes, donde la ausencia de referencias de mercado aumenta la percepción de riesgo y limita la participación del capital privado.

La intervención de los BND también incide en la creación de nuevos mercados. En actividades asociadas a tecnologías emergentes o procesos de transición, la participación inicial de la banca de desarrollo permite generar experiencias demostrativas, establecer estándares, validar modelos financieros, reducir incertidumbre para futuros inversionistas y facilitar la consolidación de nuevas actividades productivas. Esta función es particularmente visible en capital emprendedor, electromovilidad, hidrógeno verde, infraestructura digital, bioeconomía, inteligencia artificial, minerales críticos y soluciones climáticas.

La articulación entre financiamiento y política productiva representa otra dimensión relevante. La BND se encuentra en condiciones de alinear la asignación de recursos con prioridades estratégicas, promoviendo la generación de encadenamientos, el fortalecimiento de proveedores locales y la incorporación de innovación. Esta capacidad de coordinación es clave en sectores donde la inversión requiere complementariedades entre infraestructura, capital humano, regulación y capacidades productivas.

La articulación entre financiamiento y política productiva representa otra dimensión relevante. La BND se encuentra en condiciones de alinear la asignación de recursos con prioridades estratégicas, promoviendo encadenamientos, fortalecimiento de proveedores locales, adopción tecnológica e incorporación de innovación. Esta capacidad de coordinación es clave en sectores donde la inversión requiere complementariedades entre infraestructura, capital humano, regulación, conocimiento tecnológico y capacidades productivas. La experiencia reciente de instituciones como el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), la Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (BANCÓLDEX), Nacional Financiera (NAFIN), el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) muestra que la banca de desarrollo puede operar como plataforma de política productiva, no solo como intermediario financiero.

Sin embargo, la efectividad de estas intervenciones enfrenta restricciones importantes. Entre ellas destacan los mayores costos de fondeo, la disponibilidad limitada de recursos de largo plazo en moneda local, el riesgo cambiario asociado a financiamiento externo, la exposición a variaciones de tasas de interés, las restricciones fiscales que limitan capitalizaciones o subsidios explícitos, y la dificultad para mantener instrumentos preferenciales sin comprometer sostenibilidad financiera. En proyectos con ingresos en moneda local y financiamiento en moneda extranjera, el riesgo cambiario puede afectar la bancabilidad y elevar el costo efectivo de la inversión. Por ello, resulta necesario fortalecer mecanismos de fondeo doméstico, garantías cambiarias, coberturas, instrumentos en moneda local y esquemas de financiamiento combinado que reduzcan el costo de capital sin debilitar la solvencia institucional de los BND.

En lo referido al financiamiento del emprendimiento innovador, los BND han ampliado de manera significativa su intervención en el, incorporando instrumentos más adecuados para empresas intensivas en conocimiento, como capital semilla, venture capital, fondos de fondos y esquemas de coinversión. Este avance ha permitido atender restricciones estructurales en etapas tempranas, donde la incertidumbre, la falta de garantías y la predominancia de activos intangibles limitan el acceso al crédito tradicional. No obstante, el análisis muestra que esta expansión aún no resuelve plenamente el principal cuello de botella del ecosistema: el tránsito hacia el escalamiento. En este punto, se hace evidente la necesidad de fortalecer la oferta en etapas intermedias y de crecimiento, donde muchas empresas quedan atrapadas sin acceso a financiamiento adecuado para consolidar su expansión.

En paralelo, los BND han evolucionado desde esquemas tradicionales de crédito hacia arquitecturas de intervención más complejas, que combinan instrumentos financieros, mecanismos de inversión y servicios no financieros. Esta transformación refleja una comprensión más integral del proceso innovador, en el que las necesidades empresariales cambian a medida que las firmas avanzan en su ciclo de vida. Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos depende críticamente de su articulación. La fragmentación, la falta de secuencia y la débil coordinación entre programas continúan limitando la posibilidad de construir trayectorias empresariales sostenidas.

Otro aspecto central es el rol de los BND en la creación de mercados de capital emprendedor. En un contexto regional caracterizado por baja profundidad financiera y alta concentración, su participación como inversionistas ancla ha sido clave para reducir riesgos, atraer inversionistas privados y fortalecer la industria de capital de riesgo. Este rol resulta particularmente relevante en ecosistemas donde la ausencia de actores especializados restringe tanto la oferta de financiamiento como la calidad de la intermediación. El desafío hacia adelante no es solo mantener esta función, sino ampliarla mediante mayor movilización de recursos privados, profesionalización de gestores, desarrollo de fondos especializados y consolidación de mercados más dinámicos y sostenibles.

El análisis también muestra que los BND han comenzado a reconocer que las restricciones al crecimiento empresarial no son únicamente financieras. La incorporación de servicios no financieros, como mentoría, aceleración, asistencia técnica, formación gerencial y acceso a redes, representa un avance importante. Estos componentes contribuyen a fortalecer capacidades empresariales, mejorar la toma de decisiones, facilitar la inserción en mercados y aumentar la probabilidad de escalamiento. Sin embargo, su desarrollo aún es incipiente en muchos casos y tiende a operar como complemento, cuando la evidencia sugiere que debería formar parte integral de la estrategia de intervención.

Más allá del universo de startups, uno de los hallazgos más relevantes es el creciente involucramiento de los BND en la promoción de la adopción tecnológica en MIPYMES. En economías donde la mayor parte del tejido empresarial está compuesto por empresas de menor

tamaño, las ganancias de productividad dependen en gran medida de la incorporación de tecnologías existentes, la digitalización, la mejora de procesos, la trazabilidad, el comercio electrónico, la automatización y la adopción de soluciones de gestión. En este sentido, el papel de la banca de desarrollo resulta crítico para ampliar el acceso a financiamiento, leasing, garantías, subvenciones, asistencia técnica y plataformas digitales que permitan cerrar brechas tecnológicas. Sin embargo, el alcance de estas intervenciones aún es limitado frente a la magnitud del desafío regional, lo que plantea la necesidad de ampliar cobertura, profundidad y continuidad.

Asimismo, los BND desempeñan un papel relevante en la articulación de ecosistemas de innovación. En entornos caracterizados por fragmentación institucional y débil coordinación, su capacidad para conectar empresas, universidades, agencias públicas, inversionistas, centros tecnológicos y gobiernos territoriales constituye una ventaja comparativa. Esta función permite integrar financiamiento, capacidades y políticas en torno a objetivos comunes. Aun así, este rol podría fortalecerse mediante una mayor participación en la gobernanza de los ecosistemas, promoviendo agendas compartidas, mecanismos de coordinación, plataformas de información y criterios de priorización sectorial y territorial.

En términos estratégicos, se observa una alineación creciente entre las intervenciones de los BND y agendas más amplias de transformación productiva, como digitalización, sostenibilidad, transición energética, reindustrialización e inclusión productiva. Este cambio refleja una evolución en la forma de concebir la innovación, que deja de ser un ámbito aislado para integrarse en una lógica más amplia de desarrollo productivo. En este marco, la orientación de recursos hacia sectores estratégicos adquiere mayor relevancia, especialmente en aquellos con capacidad de generar encadenamientos y efectos de arrastre sobre el resto de la economía.

De manera complementaria, el análisis permite sostener que los BND han comenzado a trascender su rol tradicional de corrección de fallas de mercado, avanzando hacia funciones más complejas vinculadas a la creación de mercados. Esta transición es visible en áreas como capital emprendedor, innovación tecnológica, infraestructura digital, financiamiento climático, movilidad sostenible y bioeconomía. En estos espacios, la intervención pública no solo suple carencias existentes, sino que contribuye a estructurar nuevos segmentos productivos y financieros. Este cambio amplía el alcance de su contribución, pero también exige mayores capacidades institucionales, mejor gestión de riesgos, sistemas de medición más robustos y una visión estratégica más clara.

En cuanto a inclusión financiera, social y territorial, los BND constituyen instrumentos de política pública estructural para ampliar la inclusión, sostener la inversión de largo plazo y reducir brechas que el mercado no corrige de manera espontánea. Su relevancia no se limita a la provisión de crédito, sino que abarca la preparación de proyectos, la estructuración financiera, la mitigación de riesgos, la articulación institucional y el acompañamiento técnico. Estas funciones son especialmente importantes cuando la restricción no es solo la falta de recursos, sino la limitada capacidad para transformar necesidades sociales, territoriales y climáticas en proyectos viables, financiados y sostenibles.

Desde una perspectiva de política pública, los BND deben considerarse parte central de la arquitectura de desarrollo. Las brechas de inclusión siguen siendo significativas: en 2024, el 25.5% de la población de América Latina y el Caribe (ALC) se encontraba en pobreza y el 9.8% en pobreza extrema; en 2023, la pobreza multidimensional afectaba al 57% de la población rural, frente al 15.5% de la población urbana, y al 50.6% de la población indígena, frente al 18.5% de la población no indígena. Estos datos muestran que la inclusión requiere instrumentos diferenciados para segmentos que enfrentan restricciones persistentes de acceso, escala, información, garantías y capacidades.

En inclusión financiera, su papel es decisivo para ampliar el acceso y uso efectivo de servicios en mujeres, hogares de bajos ingresos, población rural, trabajadores informales y MIPYMES. En 2024, el 69.7% de los adultos de ALC tenía una cuenta bancaria, pero solo el 28.8% ahorra formalmente mediante una cuenta y apenas el 28.5% accedía a crédito formal. Además, solo el 54.6% declaraba que no tendría dificultad para acceder a dinero adicional en 30 días, proporción que caía a 47.5% entre mujeres y a 38.6% en hogares de bajos ingresos. Por ello, los BND pueden contribuir mediante cuentas simplificadas, billeteras digitales, sistemas de pago interoperables, garantías, crédito de segundo piso, educación financiera, canales híbridos y productos adaptados a usuarios con bajo historial crediticio o alta informalidad.

En inclusión productiva, las MIPYMES representan el 99.5% de las empresas, generan el 60% del empleo y aportan alrededor del 25% del producto interno bruto (PIB) regional, pero enfrentan una brecha de financiamiento estimada en US\$1.8 billones, equivalente al 35% del PIB regional. Por ello, la acción de los bancos nacionales de desarrollo no debe limitarse al crédito tradicional. Deben combinar garantías parciales, fondos de garantía, factoraje, leasing, capital de trabajo, financiamiento para inversión, asistencia técnica, digitalización, formalización y mecanismos alternativos de financiamiento. La financiación alternativa alcanzó US\$5,270 millones en 2020, con 86% destinado a MIPYMES, lo que confirma la importancia de ampliar instrumentos financieros innovadores y marcos regulatorios proporcionales.

En inclusión territorial, la contribución de los BND se expresa en el financiamiento de infraestructura económica y social con horizontes largos de maduración. ALC requiere invertir al menos 3.12% del PIB anual para ampliar y mantener infraestructura, pero la inversión promedio reciente se ubicó en torno a 1.8% del PIB. Además, el 41% de las necesidades de inversión debería destinarse a mantenimiento y reposición, lo que muestra que el desafío no consiste solo en construir nueva infraestructura, sino también en preservar, modernizar y hacer resilientes los activos existentes. En este ámbito, los bancos nacionales de desarrollo pueden aportar crédito de largo plazo, líneas de redescuento, financiamiento a gobiernos subnacionales, garantías, estructuración de proyectos, financiamiento combinado y asistencia técnica.

Las brechas sectoriales ilustran la magnitud del desafío. En agua y saneamiento, 161 millones de personas carecen de servicios de agua potable gestionados de forma segura y 431 millones no cuentan con saneamiento gestionado de forma segura. Para alcanzar el acceso universal hacia 2030, la región necesita movilizar alrededor de US\$372,000 millones adicionales en cinco años, equivalente a una inversión anual inferior al 1.3% del PIB regional. En energía, ALC requiere entre US\$6,000 millones y US\$8,000 millones anuales hasta 2030 para expandir y modernizar la transmisión eléctrica, mientras la inversión observada se ubica entre US\$2,000 millones y US\$4,000 millones anuales. En conectividad digital, la brecha de cobertura móvil afecta a 44 millones de personas, pero la brecha de uso es mayor: 174 millones viven en áreas con cobertura de banda ancha móvil y no utilizan internet móvil por barreras de asequibilidad, habilidades digitales o confianza.

La efectividad de los BND depende de su capacidad para intervenir a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto. La preparación, evaluación, estructuración, gestión de riesgos y monitoreo no deberían tratarse como funciones accesorias, sino como componentes sustantivos de la política pública, especialmente en proyectos de inclusión, infraestructura, adaptación climática e innovación. Una parte importante de la brecha de inversión regional es, en la práctica, una brecha de preparación y bancabilidad. Por ello, resulta necesario fortalecer capacidades de asistencia técnica, estructuración y originación dentro de los BND, así como su coordinación con gobiernos subnacionales, prestadores de servicios, entidades sectoriales, inversionistas privados y organismos multilaterales.

En materia climática, los BND aparecen como vehículos institucionales clave para convertir riesgos climáticos y de naturaleza en carteras financiadas. ALC concentra el 22% de las inundaciones más severas del mundo y, desde 2000, ha registrado 1,632 desastres naturales, con más de 260,000 muertes, más de 200 millones de personas afectadas y pérdidas superiores a US\$398,000 millones. En este contexto, los BND pueden combinar crédito de largo plazo, garantías, financiamiento combinado, tramos de primer riesgo, bonos verdes, fondos climáticos, asistencia técnica y mecanismos de transferencia de riesgo para sostener inversión en resiliencia, infraestructura crítica, adaptación y soluciones basadas en la naturaleza.

Por ello, los BND deben concebirse como instituciones de transformación económica y social, capaces de articular inclusión, infraestructura, productividad y resiliencia. Su eficacia no debería medirse únicamente por volumen de colocaciones, sino por su capacidad para cerrar brechas estructurales en acceso, calidad, cobertura, continuidad del servicio, sostenibilidad socioambiental, adicionalidad financiera, movilización de capital privado y fortalecimiento de capacidades. Su valor agregado radica en modificar las condiciones bajo las cuales la inversión se vuelve posible: plazos más largos, períodos de gracia, financiamiento en moneda local, garantías, asistencia técnica, estructuración de proyectos, cofinanciamiento y mejor distribución de riesgos.

REFERENCIAS

Capítulo I

- Banco de la Reserva Federal de Nueva York. *Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI)*.
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). *World Investment Report 2024* (PDF).
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). *Global Trade Update, December 2023 y March 2024*.
- Fondo Monetario Internacional (2024). *Perspectivas de la economía mundial, abril de 2024, octubre 2025*.
- Fondo Monetario Internacional (2025). *Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial: Una economía firme ante fuerzas divergentes*". Enero.
- Fondo Monetario Internacional (2025). *Perspectivas de la economía mundial, octubre*.
- Grupo del Banco Mundial. *Perspectivas de los mercados de productos básicos, octubre de 2022 y página sobre mercados de productos básicos*.
- Organización Mundial del Comercio (OMC). *Global Trade Outlook and Statistics, April 2024*.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). *Trends in World Military Expenditure, 2024 y comunicado 28 abril 2025*.

Capítulo II

- Agosin, M. R., Urzúa, S., Wagner, R., Trejos, A., De Olloqui, F., Pietrobelli, C., Rasteletti, A., Stein, E. H., Fernández-Arias, E., Crespi, G., Blyde, J. S., Cornick, J., Volpe Martincus, C., Casaburi, G., Rucci, G., Maffioli, A., Bassi, M., & Panizza, U. (2014). *¿Cómo repensar el desarrollo productivo?: Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica*. <https://doi.org/10.18235/0012587>
- ALIDE (2023). *Potencial y oportunidades para América Latina y el Caribe en el escenario actual y el apoyo de la Banca de Desarrollo*. Documento básico.
- Álvarez, I., Berganza, J. C., & Machuca, C. M. (2025). *La inversión extranjera directa entre América Latina y España*. Boletín Económico, 2025/T1. Banco de España. <https://doi.org/10.53479/39319>
- Andrade, A. J. G., Mazzali, O. E. M., Arana, O. M. V., & Mercer-Blackman, V. A. (2026, January 29). *Perspectivas para América Latina y el Caribe en 2026: viejas trabas al crecimiento, nuevas incertidumbres*. BID. <https://shkd.us/iWk7ywP7>
- Arbache, J. (2019, October 2). *¿Y las inversiones en infraestructura?* CAF. <https://www.caf.com/es/blog/y-las-inversiones-en-infraestructura/>
- Ayres, J., Izquierdo, A., & Parrado, E. (2025). *Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2025: Oportunidades regionales en medio de cambios globales*. <https://doi.org/10.18235/0013475>
- BID (2023). *Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2023: preparar el terreno macroeconómico para un crecimiento renovado*. <https://doi.org/10.18235/0004780>

- BNDES (2025a). *BNDES aprova R\$ 200 mi para Eve avançar no desenvolvimento do carro voador*. [https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/industria/BNDES-aprova-R\\$-200-mi-para-Eve-avancar-no-desenvolvimento-do-carro-voador/](https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/industria/BNDES-aprova-R$-200-mi-para-Eve-avancar-no-desenvolvimento-do-carro-voador/)
- BNDES. (2025b). *BNDES aprova R\$ 180 mi para Scala adquirir equipamentos para data centers*. Agência BNDES De Notícias. Marzo 27. [https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/infraestrutura/BNDES-aprova-R\\$-180-mi-para-Scala-adquirir-equipamentos-para-data-centers/](https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/infraestrutura/BNDES-aprova-R$-180-mi-para-Scala-adquirir-equipamentos-para-data-centers/)
- Bolsa CR. (2022). *Colocación de primer Fondo Verde de Costa Rica reafirma ruta para financiar proyectos sostenibles*. Enero, 14. https://www.bolsacr.com/sites/default/files/sites/default/files/Prensa/ComunicadosPrensa/colocacion_de_primer_fondo_verde_de_costa_rica_reafirma.pdf
- CAF (2023b). *Hacia un turismo vivo y regenerativo en América Latina y el Caribe*. <https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/hacia-un-turismo-vivo-y-regenerativo-en-america-latina-y-el-caribe/>
- CAF. (2023a). *Caminos innovadores de inversión, cooperación y alianza digital*. Caracas: CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Retrieved from <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2103>
- CEPAL (2025a). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2025 (LC/PUB.2025/12-P)*
- CEPAL (2025b). *La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2025 (LC/PUB.2025/7-P/Rev.1)*
- Child, F., Valenzuela, J., Ferreira, N., Francis, T., Gall, B., & Russell, K. (2025). *Seizing the moment: Latin America's productivity opportunity*. McKinsey. <https://n9.cl/bb2ma>
- CORFO. (2024). *Crédito Verde de Corfo supera los US\$83 millones para financiar proyectos sustentables liderados por empresas chilenas - CORFO*. Diciembre 10. https://www.corfo.gob.cl/sites/cpp/nacional/10_12_2024_credito_verde/
- Espino, K. (2025). *República Dominicana exporta tecnología médica a 132 países*. El Día, 15 de agosto. <https://eldia.com.do/republica-dominicana-exporta-tecnologia-a-132-paises/>
- Ferraz, J. C. (2023). *Development finance institutions for sustainable industrial development*. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Policy Brief Series: Insights on Industrial Development. <https://shkd.us/CtuuTfc2>
- Gil, P. (2025). *BNDES lidera em financiamento de ônibus elétricos na América Latina*. <https://veja.abril.com.br/coluna/radar-economico/bndes-lidera-em-financiamento-de-onibus-eletricos-na-america-latina/>
- Giordano, P., Campos, R., & Michalczewsky, K. (2025). *Monitor de Comercio e Integración 2025: Vientos de cambio: La valorización de los servicios turísticos ante la reconfiguración del comercio de bienes*. <https://doi.org/10.18235/0013820>
- Goldman Sachs. (2026). *Latin America Is Predicted to Post Modest Growth amid Upheaval in Venezuela*. February, 5. <https://shkd.us/gvNNcFOV>
- Gregory, N, Craviotto, N., Getzel, B., Fides Oltra, L. (2025) DFI sponsorship of new platforms and ventures: why and how? ODI Report. London: ODI - <https://shkd.us/lllwsclj>
- Hernández, A. (2024). *Sexto Informe de Gobierno de AMLO: Banobras financia desarrollo de infraestructura para nearshoring*. <https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sexto-informe-de-gobierno-de-amlo-banobras-financia-desarrollo-de-infraestructura-para-nearshoring/>

- IOA. (2025). *Data Centers: Evaluating opportunities and challenges for key markets in Latin America*. Institute of the Americas. <https://iamericas.org/wp-content/uploads/2025/08/Summary-Report-Data-Centers-and-Energy-2025.pdf>
- J.P. Morgan. (2025). *The future of regional integration: Can Latin America thrive in a new era*. <https://shkd.us/Ex1s6JzL>
- Martinez, J. (2025, May 17). *FIRA lanza «Sustenta Más» para un campo sostenible*. <https://www.periodicomitierra.mx/fira-lanza-sustenta-mas-para-un-campo-sostenible/>
- Milken Institute. (2025). *Índice de Oportunidad Global 2025*. <https://milkeninstitute.org/sites/default/files/2025-03/Espa%C3%B1ol-GOI2025-RevisitingLatinAmericaCaribbean.pdf>
- Mobility. (2022). *Bancóldex lanza línea de crédito para buses eléctricos e infraestructura de carga*. Mobility Portal. Febrero 7. <https://www.mobilityportal.eu/es/notes/bancoldex-lanza-linea-de-credito-para-buses-electricos-e-infraestructura-de-carga>
- NME. (2025). *Corfo apoya la instalación de fábricas de electrolizadores para la industria de hidrógeno verde*. Revista Nueva Minería & Energía. <https://www.nuevamineria.com/revista/corfo-apoya-la-instalacion-de-fabricas-de-electrolizadores-para-la-industria-de-hidrogeno-verde/>
- NME. (2026). *Corfo adjudica proyectos tecnológicos en litio y tierras raras por US\$6 millones* Revista Nueva Minería & Energía. <https://www.nuevamineria.com/revista/corfo-adjudica-proyectos-tecnologicos-en-litio-y-tierras-raras-por-us6-millones/>
- OECD (2025), *Evaluación del impacto socioeconómico de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe: Un enfoque en las inversiones de la UE*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/13c7d291-es>.
- OECD et al. (2023), *Perspectivas económicas de América Latina 2023: Invirtiendo para un desarrollo sostenible*, OECD Publishing, Paris.
- OECD et al. (2026). *Perspectivas económicas de América Latina 2025: Impulsando y financiando la transformación productiva*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/e4f25c0d-es>.
- Sessele, M. (2024). *Role of DFIs in the establishment of the hydrogen economy*. Working paper series, April. <https://shkd.us/RVLAOIcX>
- Speyside Group. (2025). *Nearshoring in LATAM: Why are companies choosing this region to grow?* <https://speyside-group.com/news-insights/nearshoring-in-latam-why-are-companies-choosing-this-region-to-grow>
- UNEP (2023) *Driving Finance for Sustainable Food Systems. A Roadmap to Implementation for Financial Institutions and Policy Makers*. Geneva. United Nations Environment Programme, UNEP.

Capítulo III

- Agência Brasil. (2026). *Prêmio FINEP de Inovação mostra avanços na regionalização dos recursos*. <https://lnk.ua/fOtLoeILN>.
- ALIDE (2026) *Informe Técnico “Smart Development Banks”*. Noviembre.
- ALIDE (2026). *Data centers sostenibles y Banca de Desarrollo en América Latina y el Caribe*. Revista Banca y Desarrollo, pp19-23.

- ALIDE. (2021). Corfo y su experiencia en el financiamiento del emprendimiento chileno. <https://www.alide.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/banca-y-desarrollo-Julio-Setiembre-2021.pdf>.
- BANCOLDEX. (2024). Cuarto informe anual de impacto fondos de capital BANCÓLDEX. <https://lnk.ua/5rr096BRv>.
- BBVA. (2026). Apoyos para pymes en México: mapa completo de programas públicos y financieros. <https://lnk.ua/u2GnXzB0q>.
- Blanco, A. (2024). El auge del ecosistema emprendedor tecnológico y las startups en América Latina: situación actual y desafíos. Real Instituto Elcano. <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-auge-del-ecosistema-emprendedor-tecnologico-y-las-startups-en-america-latina-situacion-actual-y-desafios/>.
- Braude, H., Castro, V., & Fiorentin, F. (2024). Estrategias, políticas e instrumentos para la innovación verde en América Latina. <https://hdl.handle.net/11362/68842>.
- Campos, N., Jiménez Calderón, M. I., Sardán, S., Serrate, L., & Urquidi, M. (2025). El potencial de las políticas de fomento al emprendimiento para impulsar el empleo: ¿qué dice la evidencia? <https://doi.org/10.18235/0013464>.
- Castellanos, D. S. (2025). Sin emprendedores de alto impacto, Latam seguirá atrapada en un bajo crecimiento: Banco Mundial. Bloomberg. <https://lnk.ua/oQ2C33aGK>
- CEPAL (2024). Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, 2024 (LC/PUB.2024/15-P/Rev.1).
- CEPAL. (2025). Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, 2025: ¿cómo salir de la trampa de baja capacidad para crecer? Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. <https://bit.ly/PDP-2025S>.
- COFIDE. (2025). Plan de gobierno y transformación digital 2025 - 2026. <https://lnk.ua/MWPS4lrgw>
- CORFO. (2025). Cuenta Pública Participativa 2025 Gestión 2024. <https://lnk.ua/5fq582q4k>
- Cuantix. (2022). Evaluación de impacto retorno de la innovación: impacto de la inversión de corfo en instrumentos de fomento de la innovación. <https://lnk.ua/6yyN6OjhB>.
- De Belém, A. B. (2025). Sebrae, MEMP e BNDES lançam Plataforma Empreender Clima para facilitar acesso dos pequenos negócios ao crédito verde | ASN Nacional - Agência Sebrae de Notícias. <https://lnk.ua/gEpej7liD>.
- Ernest, W., & Crespi, G. (2025). El ecosistema de emprendimiento dinámico de Costa Rica: desafíos y opciones de políticas públicas. <https://doi.org/10.18235/0013398>.
- Ferraz, J. C., Hamatsu, N., & Ramos, L. (2023). Políticas e instrumentos para el fomento del desarrollo productivo en el Brasil: aprendizajes de experiencias innovadoras recientes. <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/68788>.
- Fiducoldex (2024). Informe de Gestión y sostenibilidad.
- FINEP. (2026). Apoio e Financiamento. <https://lnk.ua/cli4XdW7d>.
- Jacques, A. (2025). Transferencia Tecnológica en Chile; Insumo para el análisis en el marco de la actualización de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo - 2026. <https://lnk.ua/1TZkgJ3DX>.

- Kantis, H., & Federico, J. (2025). Reporte GEIAL 2025: Emprendimiento dinámico en América Latina ¿Cómo construir ecosistemas emprendedores de alto desempeño? <https://geial.com/reporte-geial-2025/>.
- Lemuel, K. D., Wang, J., Theresa Lazarus, A., & Angel, V. (2025). Impulsores de la innovación y la competitividad en pequeñas y medianas empresas: un análisis exhaustivo de la región de América Latina y el Caribe. <https://hdl.handle.net/11362/85945>.
- Machado, L., Rêgo, Ludovice Rego, G., & Peixoto, S. (2026). Aceleração de startups no Brasil: evidências de impacto do BNDES Garagem. BNDES. <https://lnk.ua/tl4QpzDf9>.
- Maloney, W. F., Cirera, X., & Ferreyra, M. M. (2025a). Reclaiming the Lost Century of Growth: Building Learning Economies in Latin America and the Caribbean. En Washington, DC: World Bank eBooks. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2205-6>.
- Maloney, W.F.; Vuletín, G.J.; Garriga, P.; & Morales, R. (2025b). Emprendimiento Transformador para el Empleo y el Crecimiento (español). Washington, DC: Grupo del Banco Mundial. doi:10.1596/978-1-4648-2299-5.
- Martini, P. (2026). BNDES e FINEP lançam fundo de IA e abrem chamada pública para selecionar gestor. Valor Econômico. <https://lnk.ua/0f4CzUAYm>.
- Martini, R. A., Machado, L., & Nascimento, L. o. D. (2024). O impacto dos fundos Criatec no crescimento e inovação de startups: uma análise baseada em estudo de eventos. Estudos Econômicos (São Paulo), 54(4). <https://doi.org/10.1590/1980-53575443rll>.
- Maruyama, F. M. (2025). Políticas de inovação pelo lado da demanda: um caminho estratégico para o Brasil. Portal - Connected Smart Cities. <https://lnk.ua/ufwYHgniZ>.
- MCTI. (2026). MCTI e FINEP anunciam investimento de R\$ 3,3 bilhões em projetos alinhados à Nova Indústria Brasil. Ministério Da Ciência, Tecnologia E Inovação. <https://lnk.ua/QXf1DLPKV>.
- NAFIN. (2025). Informe Anual 2024. <https://lnk.ua/amYT6qMq7>
- OCDE. (2025). Perspectivas económicas de América Latina 2025: impulsando y financiando la transformación productiva. Resumen. <https://hdl.handle.net/11362/83224>.
- OECD, CAF & SELA (2024), Índice de Políticas para PyMEs: América Latina y el Caribe 2024: Hacia una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/807e9eaf-es>.
- OECD, CAF & Unión Europea. (2026), Perspectivas económicas de América Latina 2025: Impulsando y financiando la transformación productiva. <https://doi.org/10.1787/e4f25c0d-es>.
- Paus, E., & Robinson, M. (2022). Innovación a nivel de las empresas, políticas gubernamentales y la trampa del ingreso medio: enseñanzas de cinco economías latinoamericanas. <https://hdl.handle.net/11362/48090>.
- PCM. (2025). Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al 2030. Presidencia del Consejo de Ministros Perú. <https://lnk.ua/TgJ6ivXk4>.
- Quilici, S. (2025). La cuenta pendiente de América Latina: por qué el ecosistema emprendedor necesita medir su desempeño y coordinar políticas. Forbes Argentina. <https://lnk.ua/7Ntam1PES>.
- Rivas, G. (2014). El fomento al emprendimiento dinámico en países del Cono Sur de América Latina: Análisis de experiencias y lecciones de política. <https://doi.org/10.18235/0007172>.

Capítulo IV

- Altman, E. I., & Sabato, G. (2023). The Role of Capital Markets in Funding MSMEs in Latin America and the Caribbean. <https://doi.org/10.18235/0005188>.
- Arias Ortiz, E., Giambruno, C., y Karsaclian, S. (2026). *El estado de la educación en América Latina y el Caribe 2026: la perspectiva geoespacial* (Nota técnica IDB-TN-3287). Banco Interamericano de Desarrollo.
- Aurazo, J., Franco, C., Frost, J., & McIntosh, J. (2025). Fast payments and financial inclusión in Latin America and the Caribbean (BIS Papers No. 153). Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap153.pdf>.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2024, octubre 16). IDB Group recommends six structural reforms to address region's housing deficit.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2025a). *From risk to reliability: Resilient infrastructure services to face nature's challenges*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2025b). *Unlocking the grid: How to ensure reliable and sustainable energy in Latin America and the Caribbean*.
- Banco Mundial. (2024a, 13 de marzo). *Promoting livable cities by investing in urban mobility*. World Bank.
- Banco Mundial. (2024b, 23 de abril). *Replicable mass transit systems reduce emissions and connect people to opportunities in Latin American cities*. World Bank.
- Banco Mundial. (2026a). Account ownership at a financial institution or with a mobile-money-service provider (% of population ages 15+). World Bank Open Data.
- Banco Mundial. (2026b). People using safely managed drinking water services (% of population). World Bank Open Data.
- Banco Mundial. (2026c). People using safely managed sanitation services (% of population). World Bank Open Data.
- BEI & ALIDE. (2024). *Climate financing in Latin America and the Caribbean: How are public development banks supporting the climate transition?* European Investment Bank.
- CAF, e Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. (2025). *Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025* (2.ª ed.). CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, e Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.
- CAF. (2024). How to close the infrastructure investment gaps in Latin America and the Caribbean. CAF. <https://www.caf.com/en/blog/how-to-close-the-infrastructure-investment-gaps-in-latin-america-and-the-caribbean/>
- CEB (2025). Social Infrastructure in Focus: The Role of Multilateral Development Banks (2025). https://coebank.org/documents/1744/Social_Infrastructure_in_Focus-The_Role_of_MDBs.pdf?expires=1773155796
- CEPAL. (2024, 2 de febrero). *Brechas de conectividad como factor de exclusión*. Observatorio de Desarrollo Digital. <https://desarrollodigital.cepal.org/es/datos-y-hechos/brechas-de-conectividad-como-factor-de-exclusion>
- CEPAL. (2025). *The economics of climate change in Latin America and the Caribbean, 2025: Climate action to overcome development traps* (LC/TS.2025/86). Naciones Unidas.

- CEPAL. (2025a). *Sustainable bond issuances in international markets, 2014-2022: Characteristics and trends*.
- CEPAL. (2025b). *Cierre de la brecha de financiación de la biodiversidad en América Latina y el Caribe*.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024). Informe urbano de América Latina y el Caribe 2024 (LC/TS.2024/109).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024a). Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025a, 31 de marzo). CEPAL y PNUD presentan un nuevo Índice de Pobreza Multidimensional para América Latina.
- Consultative Group to Assist the Poor. (2025, noviembre). *How digital innovation is powering Latin America's financial inclusion*. <https://www.cgap.org/blog/how-digital-innovation-is-powering-latin-americas-financial-inclusion>.
- Convergence. (2024). *State of blended finance 2024*. https://ppp.worldbank.org/sites/default/files/2025-06/State%20of%20Blended%20Global%20Finance%202024_0.pdf.
- Credicorp. (2025, 24 de marzo). Aumento de mujeres en el nivel avanzado de inclusión financiera en Latinoamérica. <https://grupocredicorp.com/mujeres-en-el-nivel-avanzado-de-inclusion-financiera-aumentan-en-latinoamerica/>
- Finance in Common. (2025). *Unlocking the potential of public development banks for sustainable development*. <https://financeincommon.org/sites/default/files/2025-02/RAPPORT%20FiCS%20-%20Confe%CC%81rence%20FFD%204%20-%20Digital%20Version.pdf>.
- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (2026b, 20 de marzo). Más de \$701.000 millones del Ministerio de Educación avanzan en 41 proyectos de infraestructura universitaria ejecutados por Findeter en 16 departamentos.
- GSMA. (2024a). *Connectivity gaps in Latin America*. <https://www.gsma.com/about-us/regions/latin-america/connectivity-gaps-in-latin-america/>.
- GSMA. (2024b). *The Mobile Economy Latin America 2024*. <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/mobile-economy/wp-content/uploads/2024/06/The-Mobile-Economy-Latin-America-2024.pdf>.
- IDB Invest. (2026). *Blended finance*. <https://www.idbinvest.org/en/solutions/blended-finance>
- IDB. (2024a). *Advancing a just transition in Latin America and the Caribbean*. <https://publications.iadb.org/en/advancing-just-transition-latin-america-and-caribbean>
- IDB. (2024b). *Unlocking the grid: How to ensure reliable and sustainable energy in Latin America and the Caribbean*. <https://publications.iadb.org/en/unlocking-grid-how-ensure-reliable-and-sustainable-energy-latin-americaand-caribbean>.
- IDB. (2025). *From risk to reliability: Resilient infrastructure services to face nature's challenges*. IDB. <https://publications.iadb.org/en/risk-reliability-resilient-infrastructure-services-face-natures-challenges>.
- IDB. (2025b). *IDB Group, OPEC Fund launch \$3 million facility to unlock over \$400 million in infrastructure in Latin America and the Caribbean*. <https://www.iadb.org/en/news/idb-group-opef-fund-launch-3-million-facility-unlock-over-400-million-infrastructure-latin-america>.

- IFC. (2025). *Mobilizing private capital: The role of blended finance in a changing global context*. <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2025/role-of-blended-finance-in-an-evolving-global-context>.
- IJGlobal. (2024). *Infrastructure and project finance Latin America regional report FY 2024*. <https://www.ijglobal.com/uploads/IJGlobal%20Regional%20Report%20%E2%80%93%20Latin%20America%20FY%202024.pdf>.
- International Labour Organization. (2025a). *Panorama Laboral 2024 de América Latina y el Caribe*.
- International Labour Organization. (2025b). *Jóvenes en el mercado laboral: entre la informalidad y la falta de oportunidades*.
- International Labour Organization. (s. f.). *Indicadores y análisis sobre empleo juvenil e informalidad en América Latina y el Caribe*.
- Klapper, L., Singer, D., Starita, L., & Norris, A. (2025). *La base de datos Global Findex 2025: Conectividad e inclusión financiera en la economía digital. Resumen*. Banco Mundial, Washington, DC. Licencia: Creative Commons de Reconocimiento 3.0 para Organizaciones Intergubernamentales (CC BY 3.0 IGO).
- OECD et al. (2024). *Perspectivas económicas de América Latina 2024: Financiando el desarrollo sostenible*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/25aed2f5-es>.
- OECD et al. (2025). *Latin American Economic Outlook 2025: Promoting and Financing Production Transformation*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/80e48de5-en>.
- OECD. (2024). *SME Policy Index: Latin America and the Caribbean 2024*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/sme-policy-index-latin-america-and-the-caribbean-2024_ba028c1d-en.html
- OECD. (2025). *Mobilising private finance for development*. <https://www.oecd.org/en/topics/leveraging-private-finance-for-development.html>.
- Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2024). *Annual Report 2024*. UNDRR.
- OIT. (2025). *2025 Labour Overview of Latin America and the Caribbean*. <https://doi.org/10.54394/SCJS5838>.
- OPEC Fund. (2025). *OPEC Fund and IDB launch new facility to boost infrastructure investment in Latin America and the Caribbean*. <https://opecfund.org/news-events/news/opec-fund-and-idb-launch-new-facility-to-boost-infrastructure-investment-in-latin-america-and-the-caribbean>.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025a). *Mobilising private finance for development*. OECD.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025b). *OECD DAC Blended Finance Guidance 2025*. OECD.
- Pineda, R., Albornoz, S., Aravena, C., & Gálvez, T. (2024). *Empleo informal en América Latina: grupos más propensos (Serie Macroeconomía del Desarrollo No. 219, LC/TS.2024/115)*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/87470164-6ff9-4cff-a836-b9ae88ccc7e3/content>

- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2024). *Adaptation Gap Report 2024*. PNUMA.
- Randall, D., Chimienti, M. T., & Galicia Rabadan, G. (2025, 5 de noviembre). Fast payments are driving digital transformation and inclusion in Latin America and the Caribbean. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/en/latinamerica/fast-payment-digital-transformation-latin-america>
- Sanitation and Water for All. (2024). 2024 Latin America and the Caribbean finance ministers' meeting report. SWA. https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2024-07/LAC-FMM_REPORT-ENG-AF.pdf
- UNEP. (2025). *Adaptation Gap Report 2025: Running on Empty*.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2024). *Regional Assessment Report on Disaster Risk in Latin America and the Caribbean 2024 (RAR24): From risk to resilience, strategic investments for a sustainable future*.
- World Bank. (2024). Replicable mass transit systems reduce emissions and connect people to opportunities in Latin American cities (Results brief). <https://projects.worldbank.org/en/results/2024/04/23/replicable-mass-transit-systems-reduce-emissions-and-connect-people-to-opportunities-in-latin-american-cities>
- World Bank. (2025a). *Fast payments are driving digital transformation and inclusion in Latin America and the Caribbean*. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/en/latinamerica/fast-payment-digital-transformation-latin-america>
- World Bank. (2025b). *Strengthening disaster resilience and response in Latin America and the Caribbean*. <https://www.worldbank.org/en/results/2025/06/30/-strengthening-disaster-resilience-and-response-in-lac>
- World Bank. (2025c). *The Little Data Book on Financial Inclusion 2025: From the Global Findex Database*. World Bank. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/be6615202d1f08a25855c8ac2d615122-0050012025/related/Little-Data-Book-2025-Web.pdf>
- World Meteorological Organization. (2025). *State of the climate in Latin America and the Caribbean 2024 (WMO-No. 1367)*.

ANEXOS

Anexo N°1. Principales Instrumentos Utilizados por Bancos de Desarrollo y Agencias Públicas para Startups y Empresas Innovadoras

Institución	Instrumento / programa	Tipo de instrumento	Etapas objetivo	Modalidad de apoyo
CORFO, Chile	Start-Up Chile: Build, Ignite, Growth	Subsidio + aceleración + acompañamiento	Idea, prototipo, validación comercial y expansión	Financiamiento directo al emprendimiento, mentorías, academia, conexión con redes e inversionistas
CORFO, Chile	FET, FT y FC*	Financiamiento a fondos de inversión	Etapas tempranas tecnológicas, etapas tempranas y crecimiento	Deuda de largo plazo a fondos regulados bajo Ley 20,712
CORFO, Chile	Programas Potencia y Escalamiento Intermediario con foco sostenible	Aceleración y escalamiento intermediado	Startups sostenibles en crecimiento y escalamiento	Financiamiento a través de aceleradoras especializadas
BNDES, Brasil	Fondos Criatec	Capital semilla / venture capital	Startups intensivas en I+D y tecnología	Inversión vía fondos con acompañamiento de gestores
BNDES, Brasil	BNDES Garagem	Aceleración	Etapas tempranas y preparación para escalar	Mentorías, conexión con inversionistas, socios estratégicos y servicios especializados
BNDES, Brasil	BNDES Mais Inovação	Crédito para innovación y digitalización	Empresas innovadoras en expansión, modernización tecnológica e innovación aplicada	Operaciones directas e indirectas; financia máquinas, software, consultorías, robótica, IA y tecnologías de punta
BNDES, Brasil	Crédito Indústria 4.0	Crédito para difusión de bienes de capital 4.0	Empresas que buscan modernizar parque industrial e incorporar tecnologías digitales	Financiamiento directo e indirecto para bienes de capital con robótica, IA, nube, teledetección, M2M e IoT
BNDES + SENAI, Brasil	Smart Factory BNDES/2025	Apoyo no reembolsable a proyectos de digitalización industrial	Proveedores tecnológicos y Mipymes usuarias de soluciones 4.0	Cofinanciamiento de proyectos de I+D+i y validación en ambiente real de producción
BNDES + FINEP + Butantan, Brasil	FIP Salud	Fondo de inversión en participaciones	Mipymes innovadoras de salud	Inversión de capital a través de vehículo especializado
BNDESPar + FINEP, Brasil	Fondo de IA	Fondo de inversión en participaciones	Startups intensivas en IA	Coinversión pública como ancla
BNDES, Brasil	Financiamiento a innovación corporativa e infraestructura tecnológica	Crédito para I+D e infraestructura habilitante	Empresas innovadoras consolidadas y firmas intensivas en infraestructura digital	Crédito de largo plazo, en algunos casos combinado con otras líneas

FINEP, Brasil	FINEP Startup	Inversión directa en startups mediante opción de compra y posterior integralización en FIP	Etapas tempranas de empresas innovadoras de base tecnológica	Capital / coinversión
FINEP, Brasil	FIPs exclusivos y no exclusivos / Venture Capital	Inversión indirecta	Etapas tempranas y de crecimiento innovador	Participación a través de fondos
FINEP, Brasil	Crédito reembolsable directo y descentralizado	Crédito para innovación empresarial	Empresas innovadoras de distintos portes, con fuerte peso de Mipymes	Crédito directo y vía agentes regionales
FINEP, Brasil	Inovacred	Crédito reembolsable para innovación empresarial	Empresas innovadoras en expansión y modernización	Operado por agentes financieros acreditados
FINEP, Brasil	Subvención económica 2026	Subvención económica no reembolsable	Empresas con proyectos de alto riesgo tecnológico y alto impacto	Convocatorias sectoriales y regionales
BANCÓLDEX, Colombia	Fondo de Fondos BANCÓLDEX Capital	Fondo de fondos / inversión ancla	Emprendedor, crecimiento, impacto, deuda privada e infraestructura	Inversión en vehículos subyacentes
COFIDE, Perú	Participación en fondos de venture capital / programa de inversión en fondos	Fondo de fondos / coinversión	Startups, Pymes innovadoras y sectores estratégicos	Inversión como ancla en fondos de capital, deuda o híbridos
NAFIN, México	Programas institucionales de apoyo a Mipymes y desarrollo empresarial	Financiamiento, garantías, cadenas productivas y asistencia	Empresas en inversión productiva y crecimiento, especialmente Mipymes	Crédito, garantías, factoraje, programas sectoriales, capital emprendedor y acompañamiento
NAFIN + Bancomext, México	Estrategia de financiamiento para Mipymes y proyectos estratégicos del Plan México	Crédito, garantías y coinversión	Mipymes, micronegocios formales, mujeres empresarias, mujeres exportadoras y proyectos estratégicos	Crédito, garantías y esquemas de coinversión en coordinación con banca comercial y sector privado

Fuente: elaboración propia con base en CORFO, BNDES, FINEP, BANCÓLDEX, COFIDE y NAFIN.

Notas: (*) Fondo Etapas Tempranas Tecnológicas (FET), Fondo Etapas Tempranas (FT), Fondo Desarrollo y Crecimiento (FC).

Anexo N°2. Ejemplos de Productos de la BND en Materia de Inclusión

Institución Financiera	Producto / Programa	Objetivo	Características	Beneficiario	Tipo de Producto	Plazos	Tasas	Montos
Inclusión social								
BanEcuador B.P.	Crédito Joven Rural	Fortalecer acceso y capacidades en educación y formación	Financiamiento a jóvenes de 18 a 29 años vinculados a emprendimientos agropecuarios.	Jóvenes rurales emprendedores agropecuarios	Crédito	Activo fijo: hasta 5 años; capital de trabajo: hasta 3 años; gracia hasta 2 años y 1 año, respectivamente	11.25% referencial; también sujeto al tarifario vigente	Desde US\$500 hasta US\$20,000
Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.	Aula BDP	Fortalecer acceso y capacidades en educación y formación	Plataforma virtual de capacitación dirigida a productores y emprendedores, con acceso remoto y disponibilidad permanente.	Productores y emprendedores	Capacitación / plataforma digital	—	—	—
Banco Nacional de Desenvolviment o Econômico e Social (BNDES)	Camino BNDES a la Escuela	Fortalecer acceso y capacidades en educación y formación	Financiamiento de vehículos de transporte escolar para estudiantes de educación básica de la red pública.	Gobiernos subnacionales / red pública educativa / estudiantes	Crédito / financiamiento de activos	Hasta 10 años, incluidos hasta 2 años de gracia	—	Financiamiento de hasta 100%
Banco de Fomento a la Producción (BFP)	BFP Mujer	Promover empleo, emprendimiento e inclusión productiva	Financia negocios liderados por mujeres, con productos adaptados a negocio, vivienda y consumo.	Mujeres emprendedoras y empresarias	Crédito	—	—	—
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), Costa Rica	Programa: Agro-Desarrollo SBD	Promover empleo, emprendimiento e inclusión productiva	Línea de financiamiento para pequeños y medianos productores	Pequeños y medianos productores agropecuarios	Línea de financiamiento	—	—	—

			agropecuarios, para capital de trabajo o inversión.					
Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP)	Bono Legal de Aguas (BLA)	Apoyar inclusión económica y social de pueblos indígenas	Apoyo dirigido a agricultura familiar campesina, organizaciones de usuarios de agua y comunidades agrícolas.	Agricultura familiar campesina, Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA), comunidades agrícolas	Bono / apoyo financiero	Según convocatoria y proceso técnico-legal; no se identifica un plazo estándar único del instrumento	—	Incentivo de hasta 95% del costo bruto, con topes máximos por proceso
Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRÍCOLA)	Campo Joven	Promover empleo, emprendimiento e inclusión productiva	Iniciativa de financiamiento y apoyo para jóvenes del sector agropecuario, orientada al relevo generacional y al emprendimiento rural.	Jóvenes vinculados al sector agropecuario	Crédito / programa de apoyo	—	—	—
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)	Créditos para la tecnificación del agro: Sumar equipamiento	Promover empleo, emprendimiento e inclusión productiva	Financia la adquisición de equipamiento productivo para empresas, productores y emprendedores.	Empresas, productores y emprendedores	Crédito de inversión	Crédito: hasta 10 años con 2 años de gracia; leasing: hasta 5 años	—	Hasta ARS3,500 millones (US\$2 millones); leasing financia hasta 100% del bien
Development Finance Corporation (DFC)	Pesca comercial	Promover empleo, emprendimiento e inclusión productiva	Ofrece capital de trabajo para flujo de caja, compra de equipos, embarcaciones y otros activos.	Empresas y productores del sector pesquero	Crédito / capital de trabajo	—	—	—
Financiera del Desarrollo Territorial (FINDETER)	Crédito de redescuento: Compromiso	Promover empleo, emprendimiento	Canaliza liquidez y capital de trabajo para adquisición, mejoramiento y	Entidades ejecutoras / hogares de vivienda social	Crédito de redescuento	20 años para adquisición de vivienda nueva; 5 años con hasta	6,3% E.A. para adquisición de vivienda	Monto total de la línea: COP2 billones (US\$561 millones)

	Vivienda Popular	e inclusión productiva	construcción de vivienda de interés social y prioritaria.			1 año de gracia para constructoras; hasta 6 meses en capital de trabajo para mejoramiento	nueva VIS/VIP	
Caja de Ahorros	Préstamos Personales para Empresas Privadas	Fortalecer acceso y capacidades en educación y formación	Dirigido a profesionales del sector privado, incluye empleados de empresas privadas, educación y salud.	Profesionales y empleados del sector privado	Préstamo personal	Hasta 120 meses	3.25%	Desde los \$500 hasta los \$75,000
Inclusión territorial								
Financiera del Desarrollo Territorial (FINDETER)	Línea de crédito redescuento: Reactiva Agua y Residuos Sólidos	Ampliar y mejorar servicios de agua y saneamiento	Financia proyectos de agua potable, saneamiento básico y residuos sólidos de entidades territoriales y prestadores de servicios.	Entidades territoriales y prestadores de servicios	Línea de crédito de redescuento	—	—	—
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BdE)	Programa para Gestión de Agua Potable y Saneamiento Ambiental (PROGAPSA)	Fortalecer infraestructura hídrica y ambiental	Financia preinversión e inversión para construcción, ampliación, mejoramiento y reconstrucción de infraestructura de agua potable, aguas residuales y pluviales.	Gobiernos locales y prestadores públicos	Programa de financiamiento	—	—	—

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BdE)	Programa Nacional de Inversiones en Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos (Prosaneamiento)	Ampliar y mejorar servicios de agua y saneamiento	Para inversiones en agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, con énfasis en municipios intermedios.	Municipios intermedios y prestadores	Programa de inversión	—	—	—
Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social (BNDES)	BNDES Finem - Transmisión de Electricidad	Ampliar y modernizar infraestructura	Financiamiento para ampliación y modernización de infraestructura de transmisión eléctrica y otros activos de infraestructura.	Empresas y ejecutores de infraestructura	Financiamiento de inversión	—	—	—
Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB)	FNE Sol	Impulsar infraestructura energética sostenible	Financia proyectos micro de generación distribuida de energía a partir de fuentes renovables, incluso en sistemas aislados.	Productores, empresas y usuarios de generación distribuida	Línea de financiamiento	Empresas y productores rurales: hasta 12 años con hasta 36 meses de gracia; personas naturales: hasta 8 años con hasta 6 meses	Según normativa del Consejo Monetario Nacional (CMN) aplicable	Hasta 100% de la inversión; para persona física micro generadora, hasta R\$100,000 (US\$20,077)
Financiera del Desarrollo Territorial (FINDETER)	Crédito de redescuento: Eficiencia Energética y Conectividad Virtual	Mejorar eficiencia y confiabilidad energética	Financia proyectos de eficiencia, generación, distribución, transmisión, almacenamiento y otras soluciones energéticas.	Entidades y empresas ejecutoras	Crédito de redescuento	Hasta 10 años con hasta 2 años de gracia a capital	IBR - 2% M.V.; IBR - 1.85% T.V.; IBR - 1.75% S.V.; margen hasta 400 pbs	Monto final sujeto a análisis del banco de primer piso; línea con recursos adicionales de COP 1 billón (US\$280.3 millones) en 2026

Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL)	Línea de financiamiento de eficiencia energética y energías renovables	Impulsar infraestructura energética sostenible	Financia proyectos de energías renovables y eficiencia energética para actividades productivas.	Empresas y actividades productivas	Línea de financiamiento	—	—	La iniciativa de eficiencia energética para Pymes moviliza US\$41.7 millones (US\$20 millones reembolsables, US\$1.7 millones no reembolsables y US\$20 millones de contrapartida)
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE)	Fideicomiso INFOGAS	Ampliar y modernizar infraestructura energética	Mecanismo fiduciario para promover acceso a sistemas de gas natural mediante financiamiento y cobertura de riesgos.	Usuarios y proyectos de acceso a gas natural	Fideicomiso	—	—	—
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BdE)	Programa de Movilidad Urbana Sostenible KfW	Mejorar infraestructura de transporte y movilidad	Financia proyectos de espacio público, movilidad activa y transporte limpio en entornos urbanos.	Gobiernos locales y proyectos urbanos	Programa de financiamiento	Plazo del programa: 72 meses, hasta octubre de 2028	—	Fase II suscrita por EUR 48.5 millones
Inclusión financiera								
Banco de la Nación Argentina	Webcomex Nación	Digitalizar la gestión de operaciones financieras y comerciales	Plataforma en línea para operaciones de comercio exterior, trámites, pagos y seguimiento documental.	Empresas usuarias de comercio exterior	Plataforma digital	—	—	—
Banco de La Pampa	Home Banking y Pampa Móvil	Facilitar el acceso remoto a servicios financieros	Canales digitales para consultas, transferencias, pagos y	Clientes personas y empresas	Canales digitales / banca móvil	—	—	—

			administración de productos.					
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	App BN Móvil	Ampliar el acceso a servicios financieros mediante banca móvil	Aplicación para realizar operaciones bancarias, pagos y consultas desde dispositivos móviles.	Clientes bancarios	Aplicación móvil	—	—	—
Banco de la Nación	Servicio Yape con el Banco de la Nación	Expandir el uso de pagos y transferencias digitales	Integración con billetera digital para transferencias y pagos vinculados a cuentas bancarias.	Usuarios de cuentas bancarias	Billetera digital / pagos	—	—	—
Banco de la Nación	Págalo.pe	Facilitar pagos digitales de servicios públicos	Plataforma web para pagos en línea de tasas y servicios de entidades públicas.	Ciudadanía y usuarios de servicios públicos	Plataforma digital de pagos	—	—	—
Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB)	WhatsApp Agroamigo	Mejorar la atención y el acceso digital de los usuarios	Canal digital de atención y orientación para usuarios de programas financieros rurales.	Usuarios de programas rurales	Canal digital de atención	—	—	—
Banco de Desarrollo Rural S.A. (BANRURAL)	Señora Cuenta	Promover el acceso de las mujeres a productos financieros básicos	Cuenta de ahorro orientada a mujeres para facilitar la administración de recursos.	Mujeres	Cuenta de ahorro	—	—	Monto de apertura: Q100 (US\$ 13)
Banco de Desarrollo Rural S.A. (BANRURAL)	Educación Financiera Banrural	Fortalecer capacidades para el uso adecuado de productos financieros	Plataforma educativa con contenidos de formación financiera personal y empresarial.	Clientes público y en general	Educación financiera / plataforma	—	—	—

BanEcuador B.P.	Programa de educación financiera	Mejorar conocimientos para el uso informado de servicios financieros	Programa de capacitación y acompañamiento en gestión financiera.	Clientes y población objetivo	Programa de capacitación	—	—	—
Caja de Ahorros	Cuenta Caja de los Niños y Juvenil	Fomentar la inclusión financiera temprana	Cuentas de ahorro para niños y jóvenes, orientadas al aprendizaje y manejo básico de recursos.	Niños, jóvenes y sus familias	Cuenta de ahorro	—	Cuenta de los Niños: 2%; Cuenta Juvenil: 0.75%	Monto de apertura: US\$2.5; Monto de apertura: US\$5